

# ***Los últimos días de las FARC: una cobertura periodística durante la fase final del proceso de dejación de armas en Colombia***

**TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)**

**Autor: Pablo Gracia García**

**Máster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados**

**Curso: 2016 / 2017**

**Universidad Complutense de Madrid**



# ÍNDICE

## **I. INTRODUCCIÓN**

1. Descripción del trabajo y delimitación del campo temático.....4
2. Metodología y estructura.....6

## **II. MARCO TEÓRICO**

1. El conflicto en cifras.....8
2. Contexto histórico.....9
3. La negociación de paz..... 17

## **III. REPORTAJE, COBERTURA Y ANÁLISIS**

1. Planificación del viaje a Bogotá.....20
2. Preparación del trabajo de campo..... 22
  - 2.1. Planificación del viaje a Cali..... 22
  - 2.2. Planificación del viaje a Caldoño.....22
  - 2.3. Cuestiones relativas a la seguridad.....24
  - 2.4. Gestión de las entrevistas..... 26
3. Publicación del reportaje.....28
4. Reportaje.....30
5. Análisis de las cuestiones abordadas en el reportaje..... 41
  - 5.1. Incumplimiento de los plazos establecidos en el punto 3.....42
  - 5.2. Extracción de caletas.....44
  - 5.3. Disidentes.....45
  - 5.4. Violaciones de los acuerdos.....46
  - 5.5. Retos.....47
6. Entrevistas.....52

## **IV. CONCLUSIONES**..... 112

## **NOTAS** .....115

## **V. BIBLIOGRAFÍA**.....117

## **ÍNDICE DE ABREVIATURAS**

**AGC** Autodefensas Gaitanistas de Colombia

**AUC** Autodefensas Unidas de Colombia

**BACRIM** Bandas Criminales

**CFHBD** Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo

**CINEP** Centro de Investigación y Educación Popular (Programa para la paz)

**CNMH** Centro Nacional de Memoria Histórica

**CONVIVIR** Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural

**CSIVI** Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación

**DA** Dejación de Armas

**ECOMUN** Economías Sociales del Común

**FIP** Fundación Ideas para la Paz

**HRW** Human Rights Watch

**MM&V** Mecanismo de Monitorización y Verificación

**MRP** Movimiento Revolucionario del Pueblo

**PNIS** Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

**PSD** Política de Seguridad Democrática

**RFS** Reporteros Sin Fronteras

**RUV** Registro Único de Víctimas

**UNIPEP** Unidad Policial para la Edificación de la Paz

**UNP** Unidad Nacional de Protección

**UP** Unión Patriótica

**ZVTN** Zonas Veredales de Transición a la Normalidad

# I. INTRODUCCIÓN

## 1. Descripción del trabajo y delimitación del campo temático

El 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaban por fin un acuerdo definitivo para acabar con un conflicto armado de más de 53 años de existencia, que había dejado hasta el momento alrededor de 220.000 víctimas mortales y más de ocho millones de afectados de forma directa. El pacto se concretaba tras más de cuatro años de negociaciones y un sinnúmero de dificultades, incluido un referéndum perdido (el 2 de octubre de 2016 los colombianos rechazaron en una votación el texto que las partes negociadoras habían presentado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias), circunstancia por la que se decidió matizar varios apartados del documento original y redactar el Acuerdo Final aprobado en noviembre.

Se abría entonces una nueva etapa en Colombia, en la que el arreglo alcanzado es sólo el punto de partida de una serie de problemáticas que Gobierno y FARC deberán afrontar durante los próximos años. El Acuerdo Final responde a uno de los procesos de paz más complejos que se han abordado en materia de desarme y recoge en sus más de 300 páginas compromisos detallados respecto a las cuestiones que han enfrentado a los dos contendientes durante más de cinco décadas: la reforma rural integral (que contribuirá a la transformación estructural del campo: la reivindicación que dio origen al conflicto), la participación política de la guerrilla (que dotará a las FARC de garantías para continuar su lucha mediante la vía legal), el problema del narcotráfico (el acuerdo compromete a los guerrilleros a desligarse de las economías ilícitas y los involucra en los planes de sustitución de cultivos) y la reparación de las víctimas (las FARC contribuirán a esa reparación con un inventario de bienes, además de beneficiarse de una Ley de Amnistía que será regulada por un mecanismo jurídico, la Jurisdicción Especial para la Paz).

La repercusión del proceso colombiano ha sido enorme y mucho se ha escrito ya sobre todas estas cuestiones a lo largo del globo. El presente trabajo, por tanto, no pretende profundizar en esas materias. El objetivo es efectuar una cobertura periodística durante la última fase de implementación del punto 3 del Acuerdo Final, denominado *Fin del*

*conflicto* y relativo al Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (es decir, el capítulo que regula el procedimiento de dejación, identificación, registro, recolección y almacenamiento de las armas de las FARC). Esta cobertura tiene como pieza central un reportaje elaborado sobre el terreno, de texto y contextualizado con material fotográfico, que da cuenta de lo que allí sucede pocos días antes de que la guerrilla se reincorpore a la vida civil y se extinga oficialmente como grupo armado. Se buscaba ofrecer un producto comunicativo desde las entrañas del proceso, que incluyese testimonios de miembros de FARC, de delegados del Mecanismo de Monitorización y Verificación de Naciones Unidas y de población civil afectada por el conflicto.

Para ello, se viajó a una de las 26 Zonas Veredales de Transición a la Normalidad (ZVTN) donde los más de 7.000 guerrilleros de las FARC se encontraban desplegados esperando su reintegración, y se mantuvieron encuentros con miembros de los principales actores involucrados en la dejación de armas, así como con algunos investigadores y estudiosos del proceso de paz. El reportaje se publicó el día 13 de agosto en *Descifrando la Guerra* ([www.descifrandolaguerra.es](http://www.descifrandolaguerra.es)) y se editará también en octubre de 2017 en el segundo número de la revista digital que la web especializada en conflictos armados saca cada dos meses.

En virtud de los acuerdos, los miembros de las FARC debían concentrarse en 26 zonas veredales repartidas en diferentes puntos del territorio colombiano, en las que se llevaría a cabo el proceso de dejación de armas y que funcionarían como preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de FARC. Los guerrilleros comenzaron a concentrarse en esas zonas en febrero de 2017 y el plan inicial para la entrega de la totalidad de las armas y la reintegración de los combatientes se fijó en el 1 de junio, pero esos plazos acabarían alargándose por motivos que más tarde se explicarán. La ZVTN a la que se consiguió acceder fue la Carlos Perdomo, en la vereda de Los Monos (Caldono, departamento de Cauca). Esa visita se produjo el 15 de julio de 2017, apenas quince días antes del 1 de agosto, la fecha fijada para la reincorporación de las FARC como ciudadanos de pleno derecho a la sociedad colombiana (plazo que luego se amplió al 15 de agosto).

El propósito de este TFM es dar a conocer la situación de esos campamentos en ese momento, identificar y evaluar los principales escollos que se han encontrado durante la dejación de armas y valorar la colaboración entre las tres delegaciones involucradas en el

proceso: Gobierno de Colombia, FARC y observadores internacionales de Naciones Unidas. Se señalarán también aquí los principales desafíos que deberán afrontar las FARC una vez finalizado ese proceso, así como las complicaciones que presentan algunos de los proyectos de inserción de los guerrilleros. Además, al ser este un trabajo con un fuerte componente práctico, se incluyen varios apartados que dan cuenta de la planificación ideada para llevar a cabo la cobertura y se desarrolla una suerte de memoria del trabajo sobre el terreno que dio lugar al reportaje elaborado.

Como ya se ha dicho, ese reportaje es el núcleo del trabajo y en él se abordan todos los objetivos anteriormente planteados. No obstante, este TFM repasa también en los aspectos teóricos necesarios para comprender los contenidos desarrollados en la pieza informativa y amplía algunas de las cuestiones técnicas acometidas allí. El resultado es un producto teórico-práctico que combina la planificación, cobertura y elaboración del reportaje, por una parte, con las lecturas previas y la recopilación de información necesarias para contextualizarlo, por otra.

Por último, ha de entenderse que el reportaje se elaboró con el objetivo de publicarse antes del 15 de agosto de 2017, plazo en el que finalmente las ZVTN en las que se encontraban los guerrilleros pasaron a convertirse en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Por lo tanto, varios de los asuntos que en él se abordan adoptan un enfoque con miras a ese *deadline* y en algunos momentos el producto se aleja de la atemporalidad propia de otras piezas. Sin embargo, su lectura después de esa fecha continúa cargada de interés, porque aporta respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el desarme de las FARC: ¿Cómo se desarrolló el proceso de dejación de armas y de extracción de caletas? ¿Qué garantías de transparencia existen? ¿Quién (y cómo) ha ejercido de mediador durante la dejación de armas? ¿A qué se dedicarán a partir de agosto los exguerrilleros? ¿Cómo se garantiza la seguridad de los miembros de FARC?

## **2. Metodología y estructura**

La metodología empleada en este TFM ha alternado las fuentes primarias y las secundarias. Las primeras han resultado clave para la cobertura del reportaje sobre el terreno, mientras que las segundas juegan un papel esencial durante la preparación del

trabajo y la fase final de este. Entre las fuentes primarias se incluyen las entrevistas realizadas a guerrilleros de las FARC, a miembros del contingente de observadores internacionales de Naciones Unidas, a civiles que han sufrido las consecuencias de la guerra, y a investigadores y expertos en el ámbito del conflicto armado colombiano. Las fuentes secundarias se relacionan con los documentos y textos consultados para dotar de contenido teórico al producto final: bibliografía, informes de diferentes organizaciones y artículos y especiales en prensa escrita.

La estructura del TFM consta de tres capítulos: uno dedicado al marco histórico; otro relativo al reportaje, su cobertura y el análisis; y una tercera parte en la que se abordan las conclusiones.

En el primer capítulo se detallan las cifras generales del conflicto armado en Colombia, uno de los más brutales y violentos durante la segunda mitad del siglo XX. Se realiza también un relato cronológico del desarrollo del conflicto, que parte desde el nacimiento de las FARC, da cuenta de la evolución de la guerra durante los años 60 y 70, y continúa con los diferentes intentos de negociación fracasados en la década de los 80 y los 90, hasta culminar con el inicio de nuevas conversaciones en 2012. Se dedica también un epígrafe a la evolución de este último proceso, que concluye con el acuerdo alcanzado en 2016.

El segundo capítulo recoge el reportaje elaborado, el proceso de planificación llevado a cabo y un análisis de las cuestiones que se abordan en la pieza informativa. Este apartado constituye el cuerpo del TFM y delimita la cobertura periodística afrontada. Se incluyen, además, las entrevistas realizadas y un epígrafe que describe los contactos mantenidos para concretar la publicación del reportaje.

Por último, se incorpora un capítulo dedicado a las conclusiones, donde se propone un balance del trabajo realizado y se valoran las acciones, complicaciones y desafíos afrontados por Gobierno Nacional y FARC durante el proceso de dejación de armas.

## II. MARCO TEÓRICO

### 1. El conflicto en cifras

No existe discusión entre los investigadores a la hora de señalar la principal fuente de referencia para conocer las cifras del conflicto armado en Colombia. El informe *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*, publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante CNMH), con sede en Bogotá, es citado por casi la totalidad de los expertos en el conflicto como el documento más fiable en lo que respecta a las estadísticas de la guerra. El informe recoge datos desde 1955 y aborda de forma pormenorizada múltiples facetas de la problemática.

Así, el CNMH habla de 220.000 asesinatos documentados, 5.712.506 desplazamientos forzados, 25.007 desapariciones forzadas, 1.982 masacres, 10.189 víctimas de minas antipersonales, 16.340 casos de asesinatos selectivos, 27.023 secuestros y 6.421 casos de reclutamiento forzado. Sin embargo, *¡Basta ya!* recopila información hasta 2013 y, desde entonces, las cifras han sufrido un incremento notable prácticamente en el total de los apartados.

El diario *El Tiempo* hablaba a finales de 2016 de 274.784 víctimas mortales reconocidas por la justicia y de un número total de afectados que supera ya los ocho millones de personas. A pesar de no existir una actualización tan rigurosa como la ofrecida por el CNMH en 2013, ninguna organización se desmarca ya de esos números. En abril de 2017 el presidente Juan Manuel Santos, en un discurso durante la conmemoración del ‘Día de las víctimas, la memoria y el perdón’, concretaba ese último dato en 8.376.463 afectados.

Santos citaba como fuente al Registro Único de Víctimas (RUV). La institución señala que, de esa cifra, 8.074.272 corresponden a “víctimas del conflicto armado” y las otras 302.191 a la categoría de “víctimas sentencias”. El incremento desde 2013 es significativo en varios capítulos. Destaca, por ejemplo, el aumento en el número de secuestros: 34.814 en abril de 2017, casi 8.000 casos más que los contabilizados por *¡Basta ya!* en 2013.

Atención aparte merece el capítulo del desplazamiento forzado. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) arrojaba a finales de junio de 2017 la cifra de 7,7 millones de colombianos desplazados, un número que coloca a Colombia

como el segundo país del planeta en esa estadística, únicamente superado en la lista por Siria, con más de 12 millones de personas. Colombia no se libra, eso sí, de liderar el ranking mundial de desplazados internos, con 7,4 millones de personas apartadas de su hogar dentro de las fronteras del país.

No es objetivo de este trabajo, en cualquier caso, analizar el incremento sufrido en las diferentes modalidades de violencia del conflicto. Basta mencionar que, aun en pleno proceso negociador (iniciado en 2012), todos los bandos han continuado cometiendo atrocidades. El resultado de ese comportamiento se ha visto reflejado en todos y cada uno de los apartados que vienen cuantificando el sufrimiento de las víctimas desde que comenzó la guerra. Se han señalado los capítulos de los secuestros y de los desplazamientos forzados, pero ningún listado se ha librado de crecer: 11.500 afectados por minas antipersonales (más de 2.000 asesinados), más de 10.000 torturas, un mínimo de 40.000 desaparecidos (el Comité Internacional de la Cruz Roja contabiliza incluso más de 100.000)... El acuerdo de paz con las FARC supone un salto abismal hacia adelante, pero las cifras actuales, comparadas con las de 2013, indican que todavía queda mucho camino por recorrer.

## **2. Contexto histórico**

El nacimiento de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las guerrillas más antiguas del país, se produce en 1964. Para identificar el origen del conflicto, en cualquier caso, es necesario acudir a los primeros movimientos insurgentes.

Alfredo Molano ubica esos primeros movimientos en la década de los 20 del siglo XX y los vincula a dos grandes litigios en el sur del departamento de Tolima y en el norte del departamento del Cauca: la lucha por la tierra de los indígenas (paeces y pijaos) y la de los campesinos por el reconocimiento de sus derechos políticos (*A lomo de mula. Viajes al corazón de las FARC*, Molano, 2015). El primer hecho estuvo protagonizado por el indio Quintín Lame, quien entre 1922 y 1945 lideró una rebelión que buscaba recuperar los resguardos indígenas. El segundo se enmarca dentro de la colonización campesina de la Cordillera Central y el surgimiento de comandos como respuesta a la violencia del Gobierno, que comenzó gravando los baldíos para luego continuar con deshaucios e incendios de las propiedades.

No hay discusión entre los expertos a la hora de señalar la disputa por la tierra como eje central y génesis del conflicto, pero sí para situar el momento en el que comienza a intuirse el conflicto armado. Mientras que expertos como el antropólogo Darío Fajardo o el sacerdote jesuita Javier Giraldo establecen como punto de partida esas insurrecciones de los años 20, Molano prefiere centrar el comienzo real de la lucha en el contexto de ‘La Violencia’, el enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que llevó a Colombia a una brutal etapa de persecuciones que se saldó con más de 200.000 asesinatos entre 1948 y 1958, y que acabó con el pacto del Frente Nacional.

La mayoría de historiadores coincide en situar en 1948, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, candidato liberal a la presidencia de la República, el detonante no sólo del periodo de ‘La Violencia’, sino también el momento en el que comenzó a fraguarse la guerra que pocos años después lastraría al país por más de cinco décadas.

Tras varios años luchando contra la injerencia, abuso y expansión latifundista de los conservadores, en 1950 Isauro Yosa, alias *Mayor Lister*, se alía con los liberales de Gerardo Loaiza y dirige una marcha de campesinos desplazados hacia la región de El Davis en Rioblanco, al sur del departamento de Tolima. Allí se establece un reducto ganadero y agrícola formado por más de 2.000 habitantes, en el que los bienes son colectivos y donde los liberales de Loaiza y los comunistas (*comunes*, por entonces) de Yosa conviven hasta 1951, fecha en que se produce una ruptura con la Conferencia Boyacá y el poblado se divide en dos sectores (1). El Davis, en cualquier caso, es un hito clave del conflicto: sentó las bases de lo que más tarde serían las famosas repúblicas independientes.

En 1953 el general Rojas Pinilla, secundado por el liberalismo y por gran parte de los conservadores, sorprende con un golpe de Estado y desbanca del poder a Laureano Gómez. Rojas Pinilla decreta una amnistía para los guerrilleros, pero en El Davis, donde no olvidaban la participación del general en masacres y quema de poblados en el pasado, deciden no sumarse al indulto. La respuesta de Rojas Pinilla es cercar la hacienda, fusilar a los mandos de los *comunes* rebeldes y evacuar a la población civil. Los liberales pactaron un acuerdo, mientras que *Lister*, acompañado por Ciro Trujillo y Luis Alfonso Castañeda (alias *Richard*), entre otros, iniciaron una nueva etapa de resistencia en Villarrica, en el este de Tolima. No duraron mucho allí. En 1955 Rojas Pinilla, quien el año anterior ya había puesto de manifiesto su profundo odio hacia al comunismo con una ley que prohibía su profesión, bombardea con napalm la población durante la llamada

Guerra de Villarrica, obligando a los guerrilleros que escaparon de la ofensiva a instalarse en las altas regiones del macizo de Sumapaz.

Los comandantes guerrilleros formaron varios contingentes y meses más tarde se refugiarían con sus familias en las regiones de El Pato, Guayabero, el Arari, Marquetalia y Riochiquito, donde ganaron terreno a la selva y fundaron un conjunto de fincas. Aquello es lo que más tarde recibiría el nombre de ‘repúblicas independientes’. De aquel grupo ya formaba parte Pedro Antonio Marín, alias *Manuel Marulanda Vélez* o *Tirofijo*, cofundador años después de las FARC y uno de los protagonistas principales del conflicto armado.

Así nació la República de Marquetalia, un enclave en el corazón de la selva donde los guerrilleros pusieron en marcha un movimiento agrario y un sistema de autodefensas que continuó combatiendo al Ejército con emboscadas puntuales, con Marulanda, Yosa, Trujillo y Luis Alberto Morante, alias *Jacobo Arenas*, como líderes principales. Con la llegada del conservador Guillermo León Valencia a la presidencia en 1962, el Gobierno de Colombia pone en marcha un plan para acabar con las repúblicas independientes, que culmina con la denominada *Operación Soberanía* y el asalto de más de 16.000 soldados a Marquetalia en junio de 1964. Los bombardeos y ametrallamientos aéreos acabaron con la vida de más de 200 campesinos y destruyeron más de 100 ranchos.

La guerrilla consiguió replegarse y 50 campesinos comandados por Manuel Marulanda burlaron al Ejército escondiéndose en la selva. Días después Marulanda, Trujillo y Yosa, el Secretariado de la Resistencia, convocarían una conferencia en un lugar indeterminado del departamento del Cauca para analizar la situación tras la invasión. Allí se constituyó el Bloque Sur y se adoptó el Programa Agrario como principio básico del grupo. Ese es el momento en el que nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Meses más tarde, entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966, Jacobo Arenas presidiría la Segunda Conferencia del Bloque Sur, celebrada en El Pato (Meta), donde la organización se dotaría de un secretariado ejecutivo, un estado mayor, un reglamento y una estructura jerárquica. “Las llamadas repúblicas independientes se habían salido de madre y habían formado un ejército.” (*A lomo de mula. Viajes al corazón de las FARC*, Molano, 2015).

En ese momento las FARC cuentan con 350 guerrilleros, con Manuel Marulanda a la cabeza de la organización y son activos en un campo de acción que abarcaba fundamentalmente los departamentos de Tolima, Meta y Caquetá (*Breve historia del*

*conflicto armado en Colombia*, Ríos Sierra, 2017). Durante la segunda mitad de la década de los 60 duplican su número de efectivos y en la IV Conferencia Guerrillera de 1970, celebrada en El Pato, alcanzan ya los 780 combatientes. Estos primeros años están marcados por la aparición del resto de los principales actores insurgentes involucrados en el conflicto: el ELN (Ejército de Liberación Nacional, que nace prácticamente a la par que las FARC, en 1964), el EPL (Ejército Popular de Liberación, fundado en 1967) y el M-19 (Movimiento 19 de abril, guerrilla que se funda en 1974 y que, a diferencia de las anteriores, nace con proyección urbana). En 1978, además, el presidente Julio César Turbay Ayala promulga el Estatuto de Seguridad. Con esta controvertida ley se pone en marcha la doctrina de Seguridad Nacional en Colombia, política que contempla la creación de grupos armados para combatir a las guerrillas. Es el nacimiento del paramilitarismo y el inicio de una de las etapas más convulsas en la historia del país.

En mayo de 1982 se celebra la VII Conferencia Guerrillera de las FARC, en Guayaquero (Meta). Allí el grupo pasa a llamarse FARC-EP (se añaden las siglas de “Ejército del Pueblo”) y se establece la *Nueva Forma de Operar* (NFO), una nueva estrategia militar que apostó por aumentar la ofensiva en todos los ámbitos y que llevaría a la guerrilla a abrazar la criminalidad a gran escala para financiar la guerra. Desde entonces, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro comenzaron a ser actividades habituales para la organización.

Con la década de los 80, sin embargo, llegan los primeros esfuerzos de negociación para acabar con la guerra. Fue Turbay Ayala el primero que planteó la alternativa del diálogo en 1981 con una Comisión de Paz liderada por el anterior presidente, Carlos Lleras Restrepo, y una ley de amnistía que sería rechazada por los grupos insurgentes. El primer proceso de paz con visos reales de éxito llega con el Gobierno de Belisario Betancur. La Ley de Amnistía desarrollada por Betancur da lugar a una mesa de conversaciones en el municipio de La Uribe y a un cese al fuego bilateral con las FARC, el EPL y el M-19. Como resultado de ese acuerdo, el 28 de mayo de 1985 nace la Unión Patriótica (UP), un movimiento político que aglutinaba militantes del Partido Comunista de Colombia, liberales independientes y guerrilleros desmovilizados de las FARC.

En las elecciones de 1986 la UP obtiene 320.000 votos, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes, pero en los diez años siguientes sus militantes y dirigentes sufrirían una brutal persecución por parte del paramilitarismo, con Fidel y Carlos Castaño como principales líderes ejecutores, que se saldó con más de 3.000 asesinatos de miembros del partido

político (2). Así fracasó el primer intento de las FARC de trasladar la lucha al ámbito institucional.

El exterminio de la UP fue un golpe duro para las FARC, pero aun así guerrilla y Gobierno afrontarían en los años próximos dos intentos más de negociación. El primero, durante la presidencia de Virgilio Barco entre 1986 y 1990. El segundo, bajo el mandato de César Gaviria entre 1990 y 1994. Ambos fracasaron, en gran medida debido a las duras condiciones que establecía Barco, en el primer caso, y a la falta de confianza e implicación de las FARC en el diálogo, en el segundo.

En cualquier caso, en 1990 el fortalecimiento de las FARC ya era un hecho. La guerrilla ya actuaba en más de treinta frentes repartidos por toda la geografía del país, incluyendo los alrededores de los grandes núcleos urbanos, Bogotá, Medellín y Cali, y contaba con casi 6.000 combatientes. Esa cifra se duplicaría solo cuatro años después, en 1994, cuando las FARC superaban ya los 12.000 efectivos y las victorias de la guerrilla sobre la Fuerza Pública eran cada vez más frecuentes en todas las regiones del país. En ese mismo año la insurgencia inicia una aproximación de diálogo con el Gobierno de Ernesto Samper, una iniciativa que parece fructificar en un principio con el ELN (Samper llega incluso a dotar de carácter político a la organización, hasta que las negociaciones fracasan poco antes de las elecciones presidenciales de 1998), pero que en el caso de las FARC queda ya desdibujada a finales de 1994, cuando el Gobierno se niega a desmilitarizar el municipio de La Uribe.

En 1997 Carlos Castaño consigue integrar a los principales grupos paramilitares del país con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), iniciando así una de las etapas más sangrientas de Colombia hasta la desmovilización del grupo en 2006. Las AUC se convertirán en el grupo paramilitar más importante de todo el conflicto armado, alternando acciones contra las guerrillas y contra la población civil en una espiral de violencia que llenó de fango la historia del país con cruentas masacres como la de El Aro en 1997 (17 asesinatos, 42 viviendas quemadas y 700 desplazados), la de Mapiripán (49 asesinatos), también en 1997, o la de El Salado en el año 2000 (más de 60 asesinatos y 4.000 desplazados). Quienes más sufrieron los atropellos de las AUC fueron las poblaciones civiles y no las guerrillas, cuya afectación por el paramilitarismo siempre fue mucho menor. Ríos Sierra lo explica así: “Se podría decir que la consolidación del proyecto paramilitar solo resultó sobre escenarios concretos del país, como la región Atlántica o el departamento de Antioquia. De hecho, observando las cifras oficiales, se

puede ver cómo los niveles de presencia y activismo armado, sobre todo de las FARC, se mantuvieron estables cuando no crecientes en el suroccidente y el nororiente del país.” (*Breve historia del conflicto armado en Colombia*, 2017).

En 1998 accede a la presidencia el conservador Andrés Pastrana, quien había basado su campaña electoral en la promesa de un proceso de paz negociado para el conflicto armado. Con su mandato se inicia así un diálogo, el famoso Proceso del Caguán, que dura 1.139 días y que fracasaría debido a una marcada falta de estrategia por parte de Pastrana, a una enrevesada agenda de negociación y, sobre todo, a un claro desinterés de la guerrilla, que a la vez que dialogaba aprovechaba la “zona de despeje” habilitada por el Gobierno para continuar con la lucha, ganar terreno al Ejército y seguir con sus negocios ilegales.

Durante los años de Pastrana, además, los efectivos de las AUC van a duplicarse, alcanzando el número de 8.000 en el año 2002. La respuesta del presidente fue no solo no combatir el paramilitarismo, sino comenzar a conversar en secreto con las AUC bajo el auspicio del Gobierno de España y con el apoyo de algunos intelectuales del país. “Mientras le aseguraba a Marulanda que el terrorismo de los *paras* no era una política de Estado, Pastrana le susurraba a Castaño desde 1999 con la colaboración de José María Aznar, Gabriel García Márquez y Felipe González.” (*Colombia feroz*, Martín Medem, 2016).

A pesar de que el Gobierno de Estados Unidos incluía al grupo de Carlos Castaño en su lista de organizaciones terroristas, Pastrana contó en su aproximación a las AUC con el beneplácito de Washington. Es entonces cuando, en virtud de esa alianza con el presidente Bill Clinton, Pastrana pone en marcha el mayor proyecto político de su mandato: el Plan Colombia. El plan tenía un objetivo muy definido: dismantelar los cultivos ilícitos (fundamentalmente mediante erradicación aérea) para acabar así con la financiación de la guerrilla y el paramilitarismo.

En el año 2000 el cultivo de coca había alcanzado su máximo nivel, con 163.289 hectáreas (Ríos Sierra, 2017). En 2002, como consecuencia de la aplicación del Plan Colombia, el porcentaje de hectáreas cultivadas se redujo un 29,6 %. Ese éxito frente al narcotráfico, sin embargo, se pagó muy caro: el glifosato utilizado para erradicar cultivos trajo también consigo un aumento notable en la cifra de desplazamientos forzados y daños ambientales. Lo que no se vio afectado, en cualquier caso, fue el aumento progresivo de la violencia en el país. En 2002 las AUC, como se ha dicho anteriormente, habían duplicado sus

efectivos, mientras que por entonces las FARC ya contaban con 18.000 guerrilleros en 80 frentes, a los que se sumaban los 4.500 combatientes del ELN en 40 emplazamientos diferentes.

En 2002 llega a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, que acaba con el bipartidismo que durante décadas había permitido alternar el ejercicio del poder al Partido Liberal y al Partido Conservador. Es un momento en el que los grupos armados irregulares se encuentran en plena vorágine expansiva. A finales de los 90 los líderes militares de las FARC ya no ven como una quimera la posibilidad de tomar el poder político a través de las armas. En ese contexto, favorecido además por un clima internacional de carácter belicista debido a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Uribe rompe con las tendencias negociadoras de años anteriores y pone en marcha una brutal ofensiva contra la guerrilla mediante la continuación del Plan Colombia y la implementación de lo que se denominó Política de Seguridad Democrática (PSD).

La PSD se tradujo en una mastodónica maniobra política, llevada a cabo en dos fases, cuyo objetivo fue involucrar de manera conjunta y prioritaria tanto a autoridades como a población civil en la defensa de la seguridad y la lucha contra las guerrillas. Uribe no reparó en gastos en su aplicación. A los 10.700 millones de dólares del Plan Colombia (más de un tercio de ese presupuesto fue financiado por Estados Unidos) hay que sumar 1.835 millones de la primera fase de la PSD, que se implementó durante el primer mandato de Uribe entre 2002 y 2006, y los 5.770 de la segunda etapa, desarrollada durante su segundo mandato entre 2006 y 2010.

Uribe consiguió así rechazar la expansión que había llevado a las FARC a amenazar el control geográfico del país. En junio de 2003 comenzó la Operación Libertad I y 15.000 miembros de la Fuerza Pública consiguen que la guerrilla se repliegue y abandone el sueño de tomar Bogotá. Sin embargo, es durante su segundo mandato cuando Uribe decide descabezar militarmente a las FARC y asesta los golpes más importantes. La Operación Fénix (2008), la Operación Sodoma (2010) y la Operación Odiseo (ya bajo la presidencia de Santos, en 2011) acaban con la vida de Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano, líderes históricos de la guerrilla.

En 2012, año en el que comienzan las negociaciones de La Habana, las FARC contaban con menos de la mitad de los efectivos que componían la organización en 1998 y habían sufrido una importante pérdida de poder territorial. Aun así, su activismo superaba las

800 acciones guerrilleras al año, cifra que ridiculiza las 65 del ELN, grupo que desde 1998 había ido perdiendo fuelle e incluso estuvo a punto de desaparecer. La PSD y el Plan Colombia habían revertido el panorama del conflicto, mermando las capacidades de los grupos guerrilleros y frenando su expansión. Todo eso se consiguió con una brutal política de desprecio hacia los Derechos Humanos y gracias a una nueva modalidad de gobierno, la *parapolítica*, fenómeno que vinculó a grupos armados y narcotraficantes con partidos políticos y conglomerados empresariales, y que llevó todos los ratios de violencia (masacres, torturas, desapariciones forzadas, etc.) a unas cifras desorbitadas. Es la época de los famosos *falsos positivos* (3) y la etapa en la que Colombia supera los siete millones de desplazamientos forzados. Según un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP / Programa por la Paz), entre enero de 2002 y diciembre de 2009 se habrían contabilizado en el país un total de 12.997 violaciones de los DDHH. De esa cifra, la mayoría habrían sido perpetradas por los grupos paramilitares (5.486) y la Fuerza Pública (4.358), por delante de las cometidas por las FARC (2.507), el ELN (321) y otras guerrillas (325).

En cuanto al paramilitarismo de las AUC, su desmovilización se inició en 2003 con el acuerdo de Santa Fe de Ralito y acabó concretándose en 2006 con la disolución del Bloque Élder Cárdenas, el último contingente activo de las autodefensas. Uribe se apuntó políticamente el tanto de la desmovilización, pero su política respecto al paramilitarismo siempre estuvo cargada de sombras y nunca pudo hacer frente de forma convincente a las acusaciones que vinculan las *Convivir* (las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, promovidas por el expresidente) con las AUC a finales de los años 90.

En 2010 Juan Manuel Santos, último Ministro de Defensa de Uribe, llega a la presidencia. Uribe apoyó la campaña de Santos y designó a éste como su sucesor, pero cambiaría de opinión cuando Santos inicia un acercamiento con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Santos decide dar un giro radical a la política relativa al conflicto armado y en 2012 anuncia un nuevo proceso de negociación con las FARC fuera de territorio colombiano, en La Habana. Uribe entonces habla de “traición a la patria” y comienza así una campaña de desprestigio hacia su antiguo aliado que dura hasta hoy. Tras haber invertido más de un 5 % del PIB de Colombia en seguridad y defensa durante la última década, la política de *seguridad democrática* había llegado así a su fin. Martín Medem (2016) resume ese punto de inflexión de la siguiente manera: “Uribe siempre dijo que *la*

*victoria* (la aniquilación militar de las FARC) *es la paz*. Santos invirtió los términos. *La paz* (la negociación con las FARC) *es la victoria*”.

En el momento en el que se inicia el nuevo proceso negociador, las FARC contaban con 8.000 guerrilleros entre sus filas e influencia real en alrededor de 200 municipios, mientras que el ELN no alcanzaba los 2.000 combatientes en un área de influencia que abarcaba unos 50 emplazamientos (Ríos Sierra, 2017).

### **3. La negociación de paz**

A finales de agosto de 2012 el presidente Santos anuncia oficialmente la existencia de contactos en Cuba con las FARC con el objetivo de iniciar un proceso negociador. Ese anuncio se concreta en una ceremonia a primeros de septiembre en la que ya se anticipan los seis puntos que constituirían la hoja de ruta del proceso: 1) Política de desarrollo agrario integral; 2) Participación política; 3) Fin del conflicto; 4) Solución al problema de las drogas ilícitas; 5) Víctimas y 6) Implementación, verificación y refrendación. La negociación se llevaría a cabo en La Habana y cada equipo negociador contaría con 30 miembros, con Iván Márquez al frente de la delegación de las FARC y con Humberto de la Calle como representante gubernamental. Se designa también un Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, que ostentaría las funciones de asesoramiento, desarrollo y verificación de la política de paz.

Durante los años 2013 y 2014 se va avanzando en la agenda y en concretar la configuración de los diferentes puntos del acuerdo, pero no es hasta 2015 cuando el proceso experimenta un empuje significativo. En septiembre de ese año ya aparece en la mesa de conversaciones la propuesta de concentración de la guerrilla en diferentes puntos del territorio colombiano como paso previo a la dejación de armas (4). También se hace público el acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que establecía un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y que comprometía al Gobierno a otorgar una amnistía que debería beneficiar a más de 15.000 guerrilleros (en la amnistía no se incluyeron delitos de lesa humanidad, genocidio y graves crímenes de guerra). Estas líneas programáticas se definieron y se dieron a conocer en diciembre de 2015, preparando el proceso para 2016, año en el que se firma el Acuerdo Final.

El 19 de enero de 2016 Gobierno Nacional y FARC informan de la creación de un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación que regularía el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y de la solicitud enviada a Naciones Unidas para crear una misión política en Colombia, que se concretó una semana después con la aprobación de la Resolución 2261 por parte del Consejo de Seguridad.

Durante la primera parte del año también se debatió sobre la posibilidad de celebrar un plebiscito que legitimara los acuerdos de paz. La propuesta había sido realizada por el Gobierno pero en un principio no contó con el beneplácito de las FARC, quienes siempre criticaron que esa fuese una decisión unilateral y que desde el inicio de las negociaciones habían abogado por la creación de una nueva Constituyente. Finalmente, en mayo, las FARC aceptaron públicamente que se realizara una consulta. En julio, la Corte Constitucional aprobó el plebiscito, pero no sería hasta un mes después cuando el presidente Santos anunciaría la fecha de celebración: el domingo 2 de octubre. En ese mismo acto, las dos delegaciones anunciaron que habían cerrado por fin el Acuerdo Final, que incluía los seis puntos con los que se iniciaron las conversaciones.

El 26 de septiembre de 2016 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias *Timochenko*, firmaron oficialmente el Acuerdo Final en un acto celebrado en Cartagena de Indias. Sin embargo, el domingo 2 de octubre, fecha de celebración del referéndum, salta la sorpresa y a la pregunta de “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?” la mayoría del electorado responde *no* (el *no* gana por un margen muy reducido al *sí*: 50.2 % frente al 49.7 %) (5).

Se ha debatido mucho sobre las razones que llevaron a Colombia a rechazar el carpetazo a un conflicto que constituía la mayor lacra de la Historia reciente del país. Existen varios motivos que explicarían el resultado del plebiscito: la oposición de los sectores evangélicos (grupos de gran influencia en un país profundamente católico como es Colombia), la feroz campaña contra la paz promovida por Uribe (los medios de comunicación atacaron el acuerdo haciendo uso de todo tipo de retóricas, incluso calificando el pacto como “ideología de género”) y el odio que gran parte de la sociedad colombiana experimenta hacia la guerrilla son las causas que mejor podrían aclarar ese desenlace.

No obstante, no hay que perder de vista un factor definitivo a la hora de interpretar el resultado de la consulta realizada en octubre de 2016: el desprestigio de las instituciones colombianas y la falta de confianza de la población en sus políticos. Preguntado por esta cuestión, el profesor Adolfo Álvarez, director del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle (Cali), respondía lo siguiente: “El conflicto armado y la Historia política de los últimos 30 años acabaron despolitizando a la sociedad colombiana. Uno de los principales damnificados de estos años es la cultura política. La crisis de los partidos ha creado un ciudadano que detesta la política, que detesta a los dirigentes... Y que vota impulsivamente, movido por las pasiones. En unas elecciones normales habitualmente vota el 38 o el 39 %. Máximo el 40 %. Pero votan con lo que se llaman *las maquinarias*. Es gente que va a votar en función del dictado de un patrón electoral. Sin embargo, en el plebiscito votó el 37 % sin patrones. Para mí ese es un voto de conciencia muy importante”.

La alta abstención, la presión del *uribismo* y, sobre todo, el *no* al proceso de paz llevaron a las FARC y al Gobierno a replantear lo pactado y decidieron entonces realizar una serie de ajustes en los puntos del Acuerdo Final que más polémica habían desatado entre los colombianos: la participación política de las FARC, la justicia transicional (en el nuevo texto se estableció, por ejemplo, que fueran los jueces quienes determinaran caso por caso si una acusación de narcotráfico podría catalogarse como delito político), el enfoque de género del acuerdo (el nuevo documento especifica el respeto por la institución de la familia colombiana y no impone la ideología de género) o la matización de algunos aspectos relacionados con la restricción de libertad de los guerrilleros que recibiesen sentencia en los tribunales.

Así, poco más de un mes después de la celebración del referéndum, el 12 de noviembre de 2016 Gobierno Nacional y FARC presentaban un nuevo texto que incluía 56 modificaciones respecto al anterior. Ese segundo acuerdo sería el Acuerdo Final definitivo y se firmaría 12 días después, el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, con el objetivo de empezar a implementarse el 1 de diciembre. Cuando el 29 y el 30 de noviembre se llevó el acuerdo para su refrendación en el Senado y en la Cámara de Representantes, ambos órganos votaron en su totalidad por el *sí*. La única formación ausente durante la votación fue el Centro Democrático de Uribe, quien aún hoy continúa haciendo campaña contra el proceso de paz.

### **III. REPORTAJE, COBERTURA Y ANÁLISIS**

#### **1. Planificación del viaje a Bogotá**

El objetivo último de este TFM es la elaboración de un reportaje sobre el terreno en Caldon, municipio del departamento del Cauca. Se escoge este enclave porque allí se encuentra desplegada una de las sedes locales del Mecanismo Tripartito de Monitorización y Verificación de Naciones Unidas (MM&V), por un lado, y una de las 26 Zonas Veredales de Transición a la Normalidad (ZVTN) donde se encuentran asentadas las FARC desde febrero, por otro.

Dicho esto, Santiago de Cali se antoja como el destino más razonable a la hora de volar desde Madrid, si se tiene en cuenta que es la tercera ciudad del país en población y que, aunque no se ubica en el mismo departamento (Cali pertenece a Valle del Cauca y Caldon a Cauca), se encuentra a sólo 92 kilómetros de distancia de Caldon. La elección de Bogotá como primer destino responde a diferentes motivos. En primer lugar, se cotejan ambas opciones y se observa que el precio de los billetes de avión no varía demasiado de un lugar a otro. Se repara también en que los vuelos internos en Colombia son bastante baratos (no suelen superar los 100 euros) y se decide que, en caso de viajar a Cali en avión desde Bogotá, los billetes se comprarán una vez allí. En segunda instancia, y esta es la razón que determina la balanza en favor de la capital, se prefiere volar en primer lugar a Bogotá porque es allí donde se encuentra desplegado el coronel Alejandro Rubiella, jefe del contingente español de los observadores internacionales de la misión de Naciones Unidas en Colombia. Con él se han mantenido varias comunicaciones antes de viajar y él es quien a la postre va a mediar para que se conceda acreditación para entrevistar al MM&V en Caldon, además de conceder una entrevista personal con él y con otros miembros de sedes locales del MM&V que tendría lugar en Bogotá.

Los billetes de avión para Bogotá se compran el 15 de mayo a la compañía American Airlines. La estancia en la capital será, en principio, del 4 al 20 de julio. Más tarde se decidirá viajar a Cali en un periodo comprendido entre esas fechas. Se reserva habitación para esos días en el hotel L'Etoile Universidad Javeriana, ubicado frente a la Universidad Javeriana, en el barrio de Chapinero Alto. Se escoge esa zona por ser un entorno frecuentado por universitarios, cercano al centro de la ciudad, pero no demasiado cerca

de las zonas más peligrosas de Bogotá (el índice de delincuencia de la capital colombiana es uno de los más altos entre las ciudades de Latinoamérica). En el momento de planificar el viaje, el autor de este trabajo se encuentra realizando prácticas de comunicación en el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas Españolas (MOPS) y tiene que solicitar permiso para ausentarse de esa actividad durante su estancia en Colombia. Los mandos del MOPS no sólo no ponen objeciones, sino que facilitan el trabajo del alumno aportando contactos (como el del citado coronel Rubiella) e información de todo tipo relativa a la misión española en Colombia.

El siguiente trámite que se realiza es una visita al Consulado General de Colombia en Madrid, ubicado en la calle Alfonso XI 6, para recabar información acerca de las cuestiones prácticas relacionadas con el viaje. Aún existen brotes puntuales de fiebre amarilla en algunas zonas del país y en el consulado confirman que las zonas que voy a visitar no exigen vacunación previa (se exige únicamente en determinadas zonas de La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y en las regiones de la Amazonía, los Llanos Orientales y la Costa Atlántica).

La conveniencia o no de solicitar el Carnet Internacional de Prensa es otra de las cuestiones que se plantean. Soy miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y tengo la posibilidad de tramitarlo, pero no dispongo del tiempo necesario para formalizar los trámites burocráticos requeridos para trabajar como periodista en Colombia, y la tramitación del Carnet Internacional de Prensa tampoco regularizaría mi trabajo en el país. Es un error de planificación que debería haberse subsanado con antelación. Se visita la sede de Reporteros Sin Fronteras (RFS) en Madrid, en la calle María de Molina 50, y también se consulta al profesor Pablo Sapag Muñoz de la Peña, docente del Máster que cursa el alumno, con el objetivo de recibir consejo. Ambos inciden en las ventajas que trae consigo viajar con carnet. Finalmente se sigue el consejo y se viaja con él, pero la entrada a Colombia se realiza con pasaporte de turista, en cualquier caso.

El viaje de ida reservado, programado para el día 4 de julio, hace una escala en Miami. El último trámite que se realiza antes de viajar es la cumplimentación, vía internet, del formulario ESTA (Electronic System for Travel Authorization), la autorización que el Gobierno de Estados Unidos requiere para la entrada de viajeros en el territorio del país.

## **2. Preparación del trabajo de campo**

### **2.1. Planificación del viaje a Cali**

La acreditación para entrevistar al Mecanismo Tripartito en su sede de Caldono se solicita vía e-mail el viernes 7 de julio, pero no se obtiene respuesta hasta el jueves 13 de julio. Mientras se espera a recibir la confirmación de Naciones Unidas, se mantienen varias conversaciones telefónicas durante diferentes días con Alejandro J. López, profesor de la Universidad del Valle (Cali) con el que se han acordado varias entrevistas, para ir cerrando fechas para un encuentro.

El martes 11 de julio, sin haber recibido aún el permiso de Naciones Unidas para realizar la entrevista al MM&V, se decide comprar los billetes para Cali. Se reservan con la compañía Viva Colombia, con fecha de ida para el miércoles 12 de julio a las 21.00 y de regreso para el domingo 16 de julio a las 08.45. Se decide que, aunque no fructifique la petición realizada al MM&V, el viaje a Cali continúa siendo pertinente y productivo debido a las entrevistas solicitadas al profesor Alejandro J. López (tampoco se descarta en ningún momento el viaje a Caldono, independientemente de la respuesta de Naciones Unidas, que finalmente sí fue positiva).

Una vez reservados los billetes, se cierran las entrevistas con los profesores Alejandro J. López y Adolfo Álvarez y con el escritor Julián Malatesta para el jueves 13 de julio. Se reserva también habitación para las fechas señaladas en el hotel MS Ciudad Jardín de Cali. Se escoge ese hotel por su cercanía al campus de la Universidad del Valle, lugar donde tendrán lugar las entrevistas concertadas.

### **2.2. Planificación del viaje a Caldono**

La acreditación para entrevistar al MM&V en su sede local de Caldono se recibe el jueves 13 de julio, cuando el autor de este trabajo ya se encuentra en Cali. La planificación del viaje a Caldono, sin embargo, comienza desde el primer día que se llega a Cali. Ya en Bogotá se había venido constatando el respeto (miedo, en gran parte de los casos) que muchos colombianos experimentan cuando se habla de visitar ciertas zonas del país y por eso ya se preveía cierta dificultad para llegar a una zona como Caldono. Las dificultades para encontrar un medio de transporte que me llevara hasta allí, en cualquier caso, fueron más de las que se habían esperado en un principio.

Existe una línea regular de autobuses que conecta Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, con Popayán, capital del departamento de Cauca. La distancia entre ambas ciudades es de 138 kilómetros y se recorre por la famosa vía Panamericana. Si se sigue esa ruta, cuando se han recorrido alrededor de 70 kilómetros desde Cali, se llega a Mondomo (municipio donde sí realiza parada el servicio de autobuses), y desde allí se puede acceder a un desvío que, tras 18 kilómetros, enlaza con la localidad de Caldon.

Llegar a Caldon, por lo tanto, se antojaba relativamente sencillo. El problema residía en el acceso a la sede local del MM&V y, sobre todo, a los campamentos de la ZVTN Carlos Perdomo donde se encontraban las FARC, a los que únicamente se puede acceder por un camino sin pavimentar (allí lo llaman “carretera destapada”) que a cada metro que avanza se hace más impracticable. Era obvio que se hacía necesario un coche. Y ahí comenzaron los problemas. Ningún negocio de alquiler de coches accedió a prestar sus servicios sin cobrar suplementos abusivos por viajar a esa zona. Lo mismo sucedió con los taxistas consultados: o se negaban en rotundo, alegando que el destino era *zona roja*, o exigían cantidades desproporcionadas por llevarme hasta allí. El asunto se complicaba todavía más cuando se les decía que el servicio debía ser de ida y vuelta, y que debían esperar en la zona mientras yo realizaba mi trabajo.

Se consultó a los profesores Alejandro J. López y Adolfo Álvarez sobre el viaje que se quería realizar y también ellos mostraron sus dudas acerca de la conveniencia de viajar hasta allí. El profesor Álvarez planteó la posibilidad de viajar hasta Santander de Quilichao, municipio a 36 kilómetros de distancia de Caldon, y se ofreció para intentar encontrar un contacto que pudiese trasladar al alumno desde allí hasta los campamentos de las FARC. Se valoró esa posibilidad, pero ante la incertidumbre que planteaba esa opción, se decide continuar buscando otras alternativas.

La solución se encontró la mañana del viernes 14 de julio. Se solicita al servicio de recepción del hotel MS Ciudad Jardín que contacte con diferentes servicios de taxis de la ciudad para valorar y cotejar precios. El resultado es el mismo que el cosechado por el alumno: negativas y precios abusivos. Sin embargo, me cuentan que el hotel dispone de un servicio de transporte para los huéspedes y que puedo hablar personalmente con los chóferes para intentar llegar a un acuerdo. En principio, las tarifas que manejan en el servicio de recepción para la zona a la que quiero viajar son similares a las manejadas por los servicios de taxis (no bajan de 400.000 pesos por llevarme hasta Caldon, alrededor

de 120 euros al cambio), pero cuando hablo con Gustavo Burbono, el primero de los chóferes con el que negocio, accede a llevarme hasta Caldono, hasta la sede del MM&V y también a los campamentos de las FARC por 240.000 pesos (alrededor de 70 euros). Lo importante del trato, en cualquier caso, es que Gustavo se compromete a un servicio de ida y vuelta, y a esperar en el coche mientras yo realizo mi trabajo (a la postre Gustavo se revela como un generoso compañero de viaje, e incluso me acompaña en alguna de las entrevistas que realizo).

### **2.3. Cuestiones relativas a la seguridad**

Como se ha señalado anteriormente, se observó una reacción de miedo y recelo bastante generalizada entre la población colombiana cuando se citaba ciertas zonas del país. La mayoría de las personas a las que se comunicó la intención de viajar al departamento de Cauca, y concretamente a la zona de Caldono, mostraron preocupación, independientemente de su edad, profesión o nivel de formación. No sorprende, si se tiene en cuenta que las denominadas *zonas rojas* (6) fueron durante décadas reductos de guerrillas donde en ocasiones la Fuerza Pública ni siquiera tenía presencia real, pero sí llama la atención que, en pleno proceso negociador entre Gobierno y FARC, el imaginario que la población tiene acerca de esas zonas no haya variado demasiado respecto a los años en los que sí existía conflicto abierto.

Dos son las razones que, a juicio del autor, explican esta circunstancia. Una de ellas sería el propio desconocimiento de la situación actual por parte de un sector importante de la sociedad colombiana. Se observó que algunos colombianos todavía creen que la guerrilla de las FARC, aun en plena negociación con el Gobierno, continúa activa en la mayor parte del país. Si bien existen disidentes, éstos no superan el 5 %, alrededor de los 400 efectivos, y de ese número sólo representan una amenaza aquellos que se están uniendo a otros grupos armados. “A nivel nacional sí están controlados los disidentes”, explica el coronel Alejandro Rubiella. “Son 385, algo así, y hay que diferenciar entre los que han expulsado ellos y los que han desertado”. El jefe de la sede local del MM&V en la región del Jordán (Tolima), Javier Benito, explica la situación de los disidentes de la siguiente manera: “Lo que pasa es que tienen muy pocas salidas, porque un tío que está en la clandestinidad está prácticamente muerto. La mayoría se han acogido al programa de reincorporación del Ejército”.

Existe una segunda razón, en cualquier caso, que explica mejor el imaginario de los colombianos respecto a estas zonas del país: la ocupación del espacio dejado por las FARC por otros grupos criminales. Y ese sí es un motivo real de preocupación. El informe *Agúzate ¡Qué nos están matando!* elaborado por Somos Defensores, Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de DDHH, registró un total de 51 asesinatos a líderes sociales y defensores de los DDHH entre enero y junio de 2017, perpetrados por estos grupos criminales en diferentes puntos del país. Según la Fuerza Pública, en Colombia existen tres grupos principales, el Clan del Golfo, Los Puntilleros y Los Pelusos, pero las bandas están proliferando por todos los departamentos de Colombia, sustituyendo a las FARC en aquellos territorios en los que antes operaba la guerrilla.

En cualquier caso, aquí se quiere señalar que la zona visitada contaba con un fuerte despliegue de la Fuerza Pública, concretado en un perímetro de seguridad alrededor de la ZVTN que hace muy difícil la actuación de cualquiera de estos grupos contra la guerrilla y el personal allí destinado (7). Aunque en otras zonas veredales sí se han registrado amenazas y agresiones por parte de estos grupos hacia los guerrilleros y miembros de las comunidades, los delegados de FARC consultados en la sede local de Los Monos del MM&V y el propio Antonio Ospina, comandante de FARC en la ZVTN Carlos Perdomo, aseguraron no haber sufrido en la zona ninguna incidente con estas bandas.

Antes de iniciar el trayecto hacia la ZVTN Carlos Perdomo, se mantuvo una conversación con Johnny Arenas, delegado de FARC del MM&V en la sede local de Los Monos, acerca del dispositivo de seguridad que rodea a la ZVTN y la posibilidad real de llegar hasta allí sin tener complicaciones. Arenas repara en que la principal dificultad residiría en encontrar un retén de la Fuerza Pública, que mantiene un constante despliegue de efectivos durante prácticamente todo el camino de acceso a la ZVTN y no permite el paso a civiles. Arenas, sin embargo, no intenta disuadirme de mi propósito e incluso me da algunas indicaciones para entrar en la ZVTN (seguir el camino es bastante sencillo pero Arenas me advierte de que casi al final hay una bifurcación y que para llegar a Pueblo Nuevo, el lugar donde se encuentra la ZVTN, debemos girar a la derecha).

Cuando Gustavo (el conductor del vehículo) y yo nos adentramos en el camino que lleva a la ZVTN, comprobamos que Arenas no exageraba al hablar del dispositivo de seguridad. El trayecto es de unos 3 kilómetros (desde Caldon) y cada pocos metros se pueden ver soldados apostados en una curva o en los arcenes. Tuvimos suerte: ninguno de ellos nos

dio el alto y pudimos llegar a la ZVTN sin complicaciones (puede que los rasgos indígenas de Gustavo, por un lado, y la ranchera no demasiado ostentosa en la que viajábamos, por otro, expliquen en parte que no llamásemos la atención). Una vez en la ZVTN, se pregunta a Antonio Ospina por otro camino de regreso y éste recomienda la carretera que baja hacia Siberia, igual de estrecha y difícil que la primera, pero con menor presencia de militares (después se comprueba que es así: en ese trayecto hay soldados desplegados, pero no tantos como en el que se recorrió para subir). Es en el camino de regreso, sin embargo, cuando sí nos para la Fuerza Pública. Solicitan documentación y preguntan qué hacemos allí. Me identifico como periodista y respondo que venimos de mantener una entrevista con el MM&V en Caldon, omitiendo mi encuentro con Ospina en la ZVTN. Dispongo de carnet de prensa y de la acreditación tramitada por Naciones Unidas (aunque no autorización para trabajar como periodista en Colombia), pero los soldados sólo requieren mi pasaporte y la identificación de Gustavo. Apenas una ojeada a los documentos y nos dejan marchar. Finalmente llegamos a Siberia sin más impedimentos.

#### **2.4. Gestión de las entrevistas**

Las entrevistas con el profesor Alejandro J. López y el coronel Alejandro Rubiella comienzan a gestionarse desde España. La fecha de los encuentros acaba concretándose una vez en Colombia, debido a la agenda no cerrada del alumno, por una parte, y a los compromisos que el coronel Rubiella debía mantener como jefe del contingente español de observadores de Naciones Unidas, por otro.

Por mediación de López se consigue también el acceso al profesor Adolfo Álvarez, Director del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle en Cali, y al escritor Julián Malatesta. Rubiella, por su parte, media para la entrevista conjunta con los jefes de sede locales del MM&V Javier Benito y Gerardo Tovar. El coronel también va a facilitar el contacto para solicitar la entrevista con los miembros del MM&V en la sede local de Caldon. El resto de entrevistas que se incluyen en este trabajo (El comandante de FARC Antonio Ospina, Gustavo Burbono, Lorena y Nórida) se consiguieron ya sobre el terreno.

El primer contacto con Alejandro J. López se realiza vía e-mail el 21 de junio. El alumno había leído su primera novela (*Nadie es eterno*, 2012), relacionada con el asunto del

narcotráfico en su Tuluá natal, y se contacta con él tras constatar que el profesor ha estudiado a fondo el conflicto armado y después de comprobar que se encontrará en Cali durante el mes de julio. López responde el 26 de junio, da el sí a una entrevista personal y en el correo ya apunta la posibilidad de contactar con otros investigadores. Se acuerda con él hablar por teléfono una vez el alumno se encuentre en Colombia y es allí cuando López ya contacta y cierra las entrevistas con el profesor Adolfo Álvarez y el escritor Julián Malatesta. La entrevista con Julián Malatesta se realizó, pero finalmente no se incluyó en este trabajo. Malatesta, además de poeta, ensayista y profesor titular de Literatura de La Universidad del Valle, fue miembro de Unión Patriótica, el partido político fundado por las FARC durante los años 80, y en el tiempo concedido al alumno puso de manifiesto su amplio conocimiento sobre el conflicto armado. Sin embargo, se decide no incorporar la entrevista a este TFM por una razón: la mayor parte de la conversación se centra en cuestiones relacionadas con los orígenes de las FARC y se aleja de los contenidos abordados aquí.

El contacto con Alejandro Rubiella se hace posible gracias a la mediación del capitán de fragata Indalecio Núñez Quintero, analista en la sección J-9 (Influencia) del Mando de Operaciones (MOPS) del EMAD. Durante la planificación del viaje a Colombia el alumno se encuentra realizando prácticas de comunicación en el MOPS y a primeros de junio solicita a Núñez Quintero el enlace con el coronel. El primer contacto con Rubiella se realiza el 14 de junio vía e-mail y éste responde al día siguiente, accediendo a conceder la entrevista. Pocos días después se mantiene una conversación telefónica con el coronel y se pacta organizar un encuentro en Bogotá el miércoles 5 de julio, un día después de llegar a Colombia. Esa reunión se mantiene en la Sede Nacional del Mecanismo Tripartito de Monitorización y Verificación, ubicada en el Edificio Caprecom, Diagonal 44 68B-80 (Bogotá). Allí Rubiella facilita el enlace con el capitán de fragata Gustavo Castillo Lara, Coordinador de Comunicación Estratégica del MM&V, además de ratificar la entrevista personal con él, que se cerrará días después vía telefónica.

Además de las gestiones citadas, se valoró también la posibilidad de viajar a El Salado, municipio ubicado en el departamento de Bolívar, donde en el año 2000 se perpetró una de las masacres más cruentas del conflicto armado. Se contactó con colaboradores de Ayuda en Acción, organización que trabaja en ese municipio desde 2013 en labores de reconstrucción y ayuda humanitaria, para obtener información acerca de la situación en la zona, pero finalmente se decide desechar esa cobertura debido a problemas de

presupuesto y tiempo, por una parte, y a cuestiones relacionadas con el enfoque temático de este TFM, por otra.

### 3. Publicación del reportaje

Uno de los objetivos de este TFM consiste en la publicación en un medio del reportaje elaborado. El propósito presentaba varias dificultades. Primero, el acceso a los medios y la precariedad que vive el mundo del periodismo freelance. Si para el periodista que ya trabaja con cierta regularidad para alguna plataforma resulta arduo mantener las colaboraciones con ese medio, para aquellos que quieren abrirse camino por primera vez como periodista freelance el asunto se complica todavía más. En segundo lugar, las propias características del reportaje: no se trata de un producto atemporal y debía ser publicado antes de una fecha concreta (en principio el 1 de agosto, aunque por motivos que luego se explicarán ese plazo más tarde se ampliaría al 15 de agosto). Por último, la temática abordada: el proceso de dejación de armas de las FARC es un momento histórico para Colombia, y aunque el reportaje elaborado se centra en varios aspectos concretos de ese proceso, muchos medios no acaban de sentirse atraídos debido a la avalancha de informaciones que en los últimos meses se están procesando sobre el tema.

Antes de viajar se visitaron varias sedes de medios de comunicación en Madrid y sólo un medio, el diario *Público*, mostró cierto interés en la información que se ofrecía. Allí facilitan un correo de contacto y se invita al alumno a enviar el reportaje una vez redactado, pero se advierte de que ya cuentan con varios colaboradores en Colombia y que la publicación no se garantiza. Una vez redactado, el reportaje se envía, pero no se recibe respuesta. Comienzan entonces otra serie de contactos con diferentes medios, entre el 20 y el 31 de julio, y se obtienen todo tipo de respuestas. Fueron decenas de tentativas y, por motivos de espacio, aquí sólo se van a señalar algunas de esas interacciones.

El alumno había realizado prácticas de redacción en la sección de Sociedad y Cultura de *La Voz de Galicia* durante el verano de 2015 y ese es el segundo medio de comunicación con el que se contacta. Se remite el reportaje a la sección de Internacional, pero tampoco se recibe respuesta. Se ofrece entonces el reportaje a otros medios generalistas (*El Periódico*, *La Vanguardia*, *El Confidencial*, *Ctxt*, *La Marea*...) y sólo se recibe respuesta

de algunos de ellos. En *Ctxt*, por ejemplo, muestran interés en la información, pero descartan su publicación alegando una publicación reciente sobre el asunto abordado.

Finalmente se decide probar con publicaciones más pequeñas o especializadas. Se envía el reportaje a *Revista 5W*, a *La Directa* y a la revista digital *L'Endavant*. Las dos primeras responden ya en septiembre. Ambas lamentan no haber podido atenderme antes y coinciden en señalar que el periodo escogido para enviar el reportaje, justo días antes de las vacaciones en la redacción, no era el más adecuado para contactar con ellos. Ahí existe un fallo claro de planificación por parte del alumno: se debería haber realizado un periodo de consultas a medios meses antes. En *La Directa*, no obstante, me comunican que el producto les habría encajado, lamentan no haber llegado a tiempo para la publicación del reportaje y me invitan a seguir enviando informaciones.

La revista *L'Endavant* fue la única que dio el sí a la publicación del reportaje antes del 31 de julio, pero una vez enviada la información editada con fotografías, dejó de mantener contacto con el alumno. Se enviaron varios mensajes preguntando si existía algún problema, pero nunca se volvió a tener respuesta. Se siguió el volumen de publicaciones de la revista durante las siguientes semanas y se observó que no se volvió a publicar nada en el portal hasta septiembre: se quiere entender que entraron en periodo de vacaciones.

El reportaje elaborado tiene como finalidad explicar la situación, problemática y retos que afrontan las FARC en las diferentes ZVTN antes de su incorporación a la vida civil y, en principio, la fecha de esa incorporación estaba fijada en el 1 de agosto. Sin embargo, el 31 de julio la CSIVI (la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los acuerdos en Colombia) prolongó 15 días más el plazo para la finalización de las ZVTN, fijando el *deadline* para la publicación del reportaje en el 15 de agosto. Eso permitió al alumno seguir contactando con otros medios durante la primera semana de agosto.

Finalmente el reportaje se publicó el domingo 13 de agosto de 2017 en el portal digital *Descifrando la Guerra*, una web especializada en conflictos armados que también edita una revista digital cada dos meses. El reportaje elaborado también se publicará en el número 2 de la revista, que sale en octubre de 2017. A continuación se indica el enlace para leer el reportaje publicado en la web: <http://www.descifrandolaguerra.es/los-ultimos-dias-de-las-farc/>

## 4. Reportaje

### Los últimos días de las FARC

El 27 de junio los miembros de la guerrilla más antigua de América Latina entregaron sus fusiles. Ya no son guerrilleros, pero de momento tampoco son ciudadanos de pleno derecho: para su reincorporación a la vida civil aún tienen que esperar al 15 de agosto. Mientras tanto, la organización trabaja junto a Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia para finalizar el proceso de destrucción del armamento y ya se prepara en varias zonas veredales para dar el salto a la esfera política.



Una caseta con la inscripción “Vamos por la nueva Colombia” da la bienvenida a la ZVTN Carlos Perdomo. PABLO GRACIA

PABLO GRACIA

Bogotá / 2 de agosto de 2017

“La mayoría de nosotros ha pasado la mayor parte de su vida en la guerrilla, y estar en la guerrilla es muy diferente a estar en un ejército regular. No se trata solo de pertenecer a un ejército: esto es nuestra vida. Y ahora eso va a cambiar, pero nosotros estamos preparados para el cambio”. Quien habla es Antonio Ospina, comandante del Frente Jacobo Arenas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en la zona veredal Carlos Perdomo (Cauca), uno de los 26 puntos de transición a la normalidad en los que más de 7.000 guerrilleros de la organización esperan el inicio del plazo que les permita comenzar su reincorporación a la vida civil.

Junto a Antonio se encuentran en este campamento otros 437 guerrilleros, todos ya con la mirada puesta en el 15 de agosto, fecha en la que las Zonas Veredales de Transición y Normalización se convertirán en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. A partir de este momento, todos los miembros de las FARC serán ya ciudadanos de pleno derecho y podrán iniciar, entre otras cosas, su integración a la sociedad como actores políticos.

Colombia avanza hacia la paz. Ya no hay marcha atrás. El 27 de junio las FARC entregaron de forma oficial las armas, a excepción de unos pocos fusiles que servirán para garantizar la seguridad de los combatientes que se encuentran en los campamentos desde febrero de este año. El establecimiento de la guerrilla en esas zonas era el requisito previo para iniciar el proceso de dejación de armas, protocolo que constituye la primera parte del punto 3, denominado *Fin del conflicto*, del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno de Colombia y las FARC en noviembre de 2016. La segunda parte de ese punto se refiere a la reincorporación de la organización a la vida civil y garantiza al grupo 10 representantes fijos en el Congreso de la República durante dos periodos, siempre y cuando la guerrilla logre conformar un partido.

Y en esas están: la dirección de las FARC fijó la semana pasada en el 1 de septiembre la fecha de lanzamiento del nuevo movimiento político y, aunque todavía no hay un día definido, ya se habla de la celebración de un Congreso Fundacional para mediados de agosto.

La paz, por tanto, empieza mañana. No se trata solo de palabras, ni de gestos. Ni siquiera hablamos ya de firmas, ni de hojas de ruta. El acuerdo es real, y lo es porque existe voluntad de cumplimiento por ambas partes. Colombia está a un paso, 53 años después, de decir adiós al conflicto armado.

## **Hacia la reintegración a la vida civil**

A la zona veredal Carlos Perdomo se accede desde Caldon, localidad situada a 75 kilómetros de Popayán, capital del departamento del Cauca. Para llegar hasta allí hay que atravesar una carretera sin pavimentar (en Colombia dicen “destapada”) que a medida que avanza se estrecha cada vez más hasta convertirse, en los últimos tramos, en un camino solo apto para las motocicletas, los burros y las personas a pie. A ambos lados del camino, cada cierto tiempo, pueden verse soldados vigilando la zona. El uniforme que visten es tipo “desierto” y les diferencia del color verde oliva del Ejército Nacional. Son miembros de la Fuerza Pública, institución que se encarga de la vigilancia de las zonas veredales donde se encuentran las FARC.

Lo primero que uno ve al llegar a Los Monos, zona donde se ubica la ZVTN (Zona Veredal de Transición y Normalización) Carlos Perdomo, es una caseta con el nombre del campamento, el escudo de las FARC y una pintada que dice “Vamos por la nueva Colombia”. Una vez dentro, un campo de fútbol recibe al visitante y, justo detrás, aparecen decenas de casetas distribuidas en varias filas. Es el campamento San Antonio, uno de los dos que se han construido en la vereda.



Carretera de acceso a la Vereda de Los Monos, Caldonó (Cauca). PABLO GRACIA

En el campamento San Antonio viven 438 guerrilleros y, a diferencia de otros campamentos de otras zonas veredales, se encuentra prácticamente acabado. Santa Rosa es el otro asentamiento de Los Monos y a día de hoy no llega al 50% de su construcción. Una vez que esté finalizado, se distribuirá a los guerrilleros entre los dos emplazamientos.

El día a día de los guerrilleros está marcado por una serie de actividades rutinarias. Ya no se encuentran en conflicto, pero mantienen la disciplina de su etapa combatiente. Se levantan a las 4.50 de la mañana, desayunan y se ponen en marcha con distintas tareas. Una de esas actividades es la construcción de los campamentos. “Este campamento es el que va más avanzado: podemos decir ya que está a un 90% de su construcción”, explica Antonio, comandante de FARC y encargado de la logística de la zona veredal. “El otro va más retrasado: está a un 40% más o menos. En el acuerdo pone que deberían estar terminados en pocos días, pero el proceso va lento: hay otras veredas en las que tienen campamentos al 0%”, argumenta.

El resto del tiempo lo dedican a cocinar, practicar deporte, hacer guardias... Y a estudiar. En el campamento se cursan programas de bachillerato acelerado y de educación para adultos. La mayoría de los guerrilleros ha pasado la mayor parte de su vida combatiendo en zonas alejadas ya no solo de las ciudades, sino también de poblaciones rurales, y solo un 3% de la organización cuenta con estudios superiores, según un censo elaborado por la Universidad Nacional este mismo mes. El mismo informe indica que el 60% de los miembros de FARC, cuando llegue su reincorporación, quieren emplearse en actividades agropecuarias, pero a un 32% de ellos les gustaría dedicarse a dar clase en las veredas. Son conscientes de que la educación jugará un papel esencial en la nueva etapa que están a punto de iniciar y muchos ya intentan desde los mismos campamentos recuperar el tiempo perdido.



Campamento San Antonio en la ZVTN Carlos Perdomo. PABLO GRACIA

“Tenemos incluso diplomados”, cuenta Antonio, con un brillo de orgullo en su expresión. “Esta misma semana acabamos un curso con diez titulados en la Escuela Superior de Administración Pública. Y por las noches celebramos un espacio interno de estudio. El conflicto en Colombia tiene un origen, una historia y muchos tentáculos: la exclusión, el hambre, la violencia estructural... Y nosotros queremos que los nuestros sepan abordar ese problema desde la teoría. En estos momentos estudiamos las tesis y los documentos preparatorios del Congreso que fundará nuestro partido”. En el discurso de Antonio se aprecia calma y habilidad para la oratoria, fruto seguramente de su paso por la universidad, en Bogotá, hace ya muchos años. Él forma parte de ese 3% de las FARC con estudios superiores, porcentaje que está llamado a liderar el proyecto político de la organización.

El Secretariado de las FARC tiene intención de celebrar su Congreso Fundacional, el evento que certificará la creación del movimiento político, la segunda semana de agosto en Bogotá. El Congreso, en principio, estaba previsto para mayo de este año, pero la lentitud en el cumplimiento de los plazos del acuerdo de paz obligó a la organización a atrasarlo hasta agosto. “Los plazos en la dejación de armas se tuvieron que incumplir porque el Gobierno incumplió los plazos en la construcción de los campamentos. Hubo también otras cosas que el Gobierno incumplió, y ahora nosotros nos vemos obligados a retrasar nuestro propio programa”, señala Antonio.

Para esa asamblea, en cualquier caso, aún queda tiempo. El paso más inmediato en las zonas veredales es la transformación de los campamentos en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. De momento, todos los guerrilleros ya cuentan con el certificado expedido por Naciones Unidas que acredita la culminación de la dejación de armas individual y ahora a esperan al 15 de agosto para empezar a recibir las ayudas económicas que estipula el acuerdo para su reintegración. Cada miembro de FARC recibirá 2.000.000 COP (pesos colombianos) por desmovilizarse. 600 euros aproximadamente. Además, cada guerrillero cobrará 620.508 COP (186 euros) mensuales

durante 24 meses y se asignarán 8.000.000 COP (unos 2.400 euros) para aquellos que inicien proyectos productivos sostenibles. El acuerdo también incluye Seguridad Social (salud y pensión) mientras no exista un vínculo laboral.

### **Polarización: los acuerdos no contentan a todos**

La medida no ha gustado a muchos sectores de la sociedad colombiana. No entienden cómo se puede conceder 620.000 pesos, el 90% del salario mínimo en Colombia, a unas personas que llevan más de 50 años intercambiando tiros con el Estado. “Yo soy partidario del sí a la paz y del no a la guerrilla. La guerrilla dejó sus ideales hace años y ya no lucha por el pueblo, sino por sus propios intereses. Y ahora a los miembros de la guerrilla les van a dar 600.000 pesos, que es casi un salario mínimo”, expone Gustavo. Gustavo es hotelero de profesión y trabaja desde hace cuatro años como chófer en Cali (Valle del Cauca). Dice que su salario y el de su mujer les da para vivir, pero sabe que en Colombia muchos no tienen esa suerte. “Aquí el que es rico es *recontrarrico* y el que es pobre es *recontrapobre*. Y de eso algo de culpa también tiene la guerrilla, porque durante años ellos robaron muchas tierras”, sentencia. El discurso de Gustavo, a día de hoy, se repite con frecuencia en no pocos hogares de Colombia.

Antonio ha peleado durante meses en las negociaciones con el Gobierno para alcanzar esos logros y, obviamente, su opinión dista mucho de la de Gustavo. “Nosotros vamos a recibir durante dos años el 90% de un salario mínimo legal en Colombia”, argumenta. “Eso serían alrededor de 200 euros. No son incentivos: son condiciones apenas mínimas y normales para que nosotros podamos iniciar nuestros proyectos. Devolver a toda esta gente a la vida civil sin trabajo, sin casa, sin salud, eso sí que sería desastroso. Ahora con ese dinero nosotros vamos a conformar unas cooperativas: vamos a reunir todas las asignaciones individuales, que sumarían en este campamento unos 3.000 millones de pesos, y lo vamos a emplear en proyectos productivos”.

El proyecto de integración económica del que habla Antonio se llama ECOMUN y ya está conformado a nivel nacional. Falta su asentamiento en contextos locales y regionales, pero ese proceso ya ha comenzado. En el proyecto están involucrados algunos gobiernos de otros países y varias ONG, que colaboran con financiación para los planes agropecuarios, agroindustriales y de conservación ambiental elaborados por las FARC.

Un proyecto de esa envergadura, como es lógico, no se salva de dificultades. Existen dudas sobre su viabilidad y esa incertidumbre empieza por la situación de los propios campamentos. Muchas de las veredas no disponen de tierras suficientes y hacen imposible la implementación de proyectos productivos relacionados con el campo.

El coronel Alejandro Rubiella es el jefe del equipo de observadores españoles en la Misión de Naciones Unidas para los acuerdos de paz en Colombia y mantiene una comunicación periódica y fluida con los miembros de las FARC. Rubiella no ve claras las posibilidades de éxito de ECOMUN. “Hay un problema de base, porque esos campamentos no se construyen con espíritu de permanencia”, explica el coronel. “Ellos quieren construir unas cooperativas. Esto es fácil de decir, pero ahí hay una contradicción: todos quieren ser agricultores y, sin embargo, allí no tienen tierras. Además, están

asentados en una propiedad alquilada. Puede que el Gobierno compre esos terrenos algún día, pero de momento no los ha comprado”, argumenta.

Existe una complicación añadida: la propia geografía de Colombia, que dificulta la accesibilidad a los campamentos. La zona veredal Carlos Perdomo es un ejemplo de ello, pero no el único: varias ZVTN se encuentran en zonas selváticas y allí ni siquiera es posible llegar con un vehículo motorizado. “Uno se puede poner a producir en esos territorios pero, ¿cómo van a hacer para sacar los productos de allí? La distribución en esos caminos va a ser muy compleja. ¿No sería más lógico establecer la producción en otras zonas?”, plantea Rubiella.



Campamento de la sede local del Mecanismo Tripartito de Monitorización y Verificación en Caldoño. PABLO GRACIA

La cuestión agraria permea todo lo relacionado con la guerra. Es el problema que dio origen al conflicto y, no en vano, constituye el primer punto del Acuerdo Final. Y luego está el fenómeno del narcotráfico, apartado al que los acuerdos dedican el punto 4, relativo a la *solución del problema de las drogas ilícitas*. A finales de enero, el Gobierno puso en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Según la Fundación Ideas para la Paz, 76.000 familias ya han firmado el acuerdo y se beneficiarán de un proyecto cuyo fin es erradicar los cultivos ilegales mediante el desarrollo de programas productivos en sus territorios. Cada familia que sustituya sus cultivos de coca, marihuana o amapola, recibirá el primer año 24 millones de pesos colombianos (alrededor de 6.800 euros), una medida con la que el Gobierno se propone disminuir 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 2017.

La propuesta es ambiciosa, pero afronta un desafío mayúsculo: más allá de los subsidios que pueda ofrecer el Gobierno, ¿cómo se convence a un campesino de que deje de cultivar coca, un producto que le va a proporcionar siempre más beneficios que cualquier otro cultivo? Ese es el reto. Y, en principio, existe una alternativa: la lucha contra el narcotráfico no debería limitarse únicamente a la erradicación de cultivos, sino que

también debería facilitar la subsistencia de los actores implicados en este modelo económico mediante la transformación política (y estructural) de los territorios.

La clave está en la palabra “integral”. Que las siglas del plan incluyan ese término no es gratuito. Antonio lo explica así: “La integración no hace referencia únicamente a la parte económica. Sí, hay unos incentivos en plata: si usted cambia la coca por café, por maíz o por ganado, se le va a garantizar la sostenibilidad financiera hasta que su producto empiece a dar resultados. Pero, además, la palabra *integral* es importante porque se le debe garantizar a la gente otros servicios: educación, carreteras, electricidad, mejoras en la vivienda...”.

## **Gobierno, FARC y ONU, trabajando codo con codo**

Los obstáculos no son pocos y los actores implicados en el acuerdo en muchas ocasiones discrepan en algún capítulo de su implementación. Pero la paz está en marcha. Gobierno y FARC trabajan codo con codo para que así sea. Quizá el mejor ejemplo de esa colaboración sea el Mecanismo Tripartito de Monitorización y Verificación, el organismo encargado de supervisar el cumplimiento del cese al fuego y la dejación de armas de la guerrilla. Está conformado por delegados del Gobierno de Colombia, de las FARC y de observadores de Naciones Unidas, y dispone de una sede local en cada una de las zonas veredales donde se encuentran las FARC.

Y al Tripartito todavía le queda mucho trabajo por hacer. Cada miembro de las FARC ha dejado su fusil, pero el proceso de dejación de armas se enfoca a todo su arsenal y no finalizará hasta septiembre. La guerrilla ha facilitado un listado con la ubicación del material inestable que tiene almacenado en caletas distribuidas por todo el territorio del país. Allí las FARC guardan explosivos, munición, granadas de mano, y extraer ese material lleva su tiempo, porque con frecuencia esas caletas se encuentran situadas en lugares de difícil acceso.

“Hay caletas a las que solo se puede llegar después de seis horas en coche, ocho horas en burro y luego tres horas a pie”, asegura Javier Benito, comandante de la sede local del Mecanismo Tripartito en El Jordán, departamento de Tolima. “En la mayor parte de los casos, si el material se puede destruir en el sitio donde está, se destruye allí. Pero a veces hay que trasladarlo a un lugar más seguro y eso lleva más tiempo todavía”, concluye.

Javier es uno de los 14 militares españoles que participan como observadores en la Misión de Naciones Unidas en Colombia. En estos momentos su prioridad y la del Tripartito es trabajar en la extracción de caletas, pero desde hace pocos días cuentan con un nuevo cometido. El 10 de julio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 2366, que autoriza al contingente desplegado en Colombia a desarrollar una segunda misión con un objetivo muy específico: verificar la implementación de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final, relativos a la reincorporación política, económica y social de las FARC, y a las garantías de seguridad, no solo para la guerrilla, sino también para las comunidades afectadas.

Sobre el papel, la nueva misión de Naciones Unidas no comienza hasta el 26 de septiembre, pero en algunas sedes el trabajo de extracción y destrucción de caletas va

muy avanzado y allí el Tripartito ya ha comenzado a realizar labores relacionadas con la nueva resolución. “Teóricamente ambas misiones se solapan”, explica el coronel Rubiella. “Se ha acordado que se constituyan unos equipos mixtos, compuestos por un policía, un militar y dos civiles en cada sede local. Esos se van a dedicar a la reintegración de FARC, pero solo abordarán cometidos de la segunda misión si no hay caletas que extraer”.



El campamento del Mecanismo Tripartito se ubica en los terrenos del antiguo campo de fútbol de Caldoño. PABLO GRACIA

Fernando Burguillo, delegado español de Naciones Unidas en la sede del Tripartito en Caldoño (Cauca), confirma el solapamiento de ambas misiones: “Sí, en el caso particular del componente internacional ambas misiones coinciden en el tiempo. Ahora el Mecanismo de Monitoreo y Verificación participa en la devolución a Bogotá de las armas que FARC ha dejado y también en la destrucción de caletas. Y al mismo tiempo, el mismo personal va a trabajar en asegurar que toda la parte que tiene que ver con la reintegración de FARC y con su seguridad, arranca conforme a lo que está establecido en el acuerdo”.

Junto a Fernando, otras 52 personas conforman el contingente del Mecanismo Tripartito en la sede local de Los Monos, en Caldoño (Cauca). El campamento simboliza a la perfección la voluntad de las partes para acabar con el conflicto armado. Allí representantes de FARC, Gobierno de Colombia y Naciones Unidas colaboran a diario para verificar que los compromisos acordados se cumplan.

Todos los días un equipo de monitorización, formado por dos observadores internacionales, un delegado del Gobierno y otro de FARC, visita la zona veredal Carlos Perdomo, ubicada a 3 kilómetros de la sede, para comprobar la evolución de las obras en los campamentos, atender las solicitudes de los guerrilleros y examinar su estado de salud.

Sally Ojeda, capitán del Ejército de México, es la coordinadora de Naciones Unidas en la sede de Los Monos. Sustituye a Álvaro Torres, el coordinador titular que se encuentra de permiso. Su tono de voz es suave, sereno, acorde con su discurso conciliador. “Yo no veo conflicto aquí entre Gobierno y FARC”, cuenta Sally. “Cada uno puede hablar de su

experiencia, pero yo veo que aquí practican fútbol, conversan entre ellos... Antes vivíamos en una carpa todos juntos. Pegaditos. Ahora ya no dormimos en la misma carpa, pero seguimos compartiendo. Aquí hay diferencias de opiniones, como en cualquier otro grupo social, pero algo que vaya más allá yo nunca lo he visto”, asegura.

Johnny Arenas, delegado de FARC en la sede, se expresa en los mismos términos. “Para todo el mundo la intriga era esa. Había un conflicto, pero ninguno nos conocíamos personalmente. Nosotros estábamos en la parte rural y el Gobierno en la parte urbana. Nunca tratábamos unos con otros y ahora las cosas han cambiado. Por mi parte ha habido una liberación, y esa experiencia algunos todavía no la han tenido, porque muchos compañeros continúan en las zonas veredales”.

## **Las FARC, preocupadas por su seguridad**

Ahora, la principal preocupación de las FARC reside en que los puntos del acuerdo que se refieren a su seguridad se cumplan. Cinco excombatientes y diez familiares de miembros de la guerrilla han sido asesinados entre abril y julio de 2017. El fenómeno no es nuevo: la organización ya sufrió la persecución en masa de sus miembros cuando en 1985 fundaron Unión Patriótica, su primer intento de lucha a través de la vía política. En Colombia siempre hay quien está dispuesto a atentar contra aquellos que renuncian a las armas en favor del ejercicio político. Son grupos paramilitares y del narcotráfico que no quieren ni oír hablar de las propuestas de reciclaje y restitución que traen los acuerdos. El negocio sigue ahí y ellos quieren seguir ocupando su espacio.

El problema no afecta solo a la guerrilla. Según la Defensoría del Pueblo, en los primeros seis meses del año ya han sido asesinados más de 50 líderes sociales. En su mayoría son activistas que hacen campaña por la sustitución de cultivos ilícitos. Los acuerdos son claros: el Gobierno debe velar por la seguridad de los excombatientes con la creación de un sistema de escoltas mixto (compuesto por miembros de la Fuerza Pública y de las FARC) a cargo de la Unidad Nacional de Protección, pero también se ocupará de la seguridad de las comunidades y los líderes comunitarios.

“Aquí trabajamos con la mirada puesta en muchos frentes”, dice Alexander Flores, teniente de la Policía Nacional y delegado del Gobierno en la sede de Los Monos. “La misión de la Fuerza Pública es realizar operaciones conjuntas, con el propósito de ayudar a la Política Interior de Seguridad. Nuestra misión es proporcionar un mecanismo de seguridad tanto al componente de paz que se encuentra en este campamento como a los guerrilleros de las zonas veredales, y también a las comunidades aledañas”.

Johnny confía en el empeño del Gobierno. Lleva meses trabajando junto a ellos y sabe que persiguen un objetivo común. Pero Johnny no se engaña. Conoce su país y conoce las perversiones del conflicto. “El riesgo lo vamos a tener siempre, porque nosotros tenemos muchos enemigos. En Colombia hay acuerdos de paz, pero hay terceras personas que no están conformes con esto y seguirán amenazando por años y años”, advierte.



Miembros del Mecanismo Tripartito de Monitorización y Verificación en su sede de Los Monos (Caldono). PABLO GRACIA

## Un país más tranquilo

Son nuevos retos que debe afrontar el país, pero a pesar de esa violencia, a pesar de esos grupos que están sustituyendo a las FARC en algunos territorios, Colombia es hoy un estado más tranquilo. La polarización existe y hay muchos colombianos contrarios al acuerdo, pero poblaciones enteras celebran haberse librado del lastre que suponía la guerra. Ejército y FARC ya no luchan entre sí, y eso es algo que va más allá de posicionarse al lado de uno u otro bando.

Lorena y Nórida son hermanas. Regentan una tienda de empanadas, arepas y refrescos en Siberia, uno de los pueblos del departamento del Cauca más azotados por el conflicto, a pocos kilómetros de la vereda Carlos Perdomo. En 1998 las FARC mantuvieron allí un brutal enfrentamiento con la policía y el Ejército Nacional. El choque, que duró casi un día entero, se saldó con la destrucción de la iglesia, la estación de policía y más de veinte viviendas. Murieron varios guerrilleros y también algunos soldados y policías.

“Fue un ataque muy fuerte, que duró media tarde y una noche entera. Y al día siguiente uno se levantaba y veía los guerrilleros muertos... Uno ni siquiera podía pasar por los escombros de la iglesia. Y había tanques grandísimos del ejército. Era todo caótico”, recuerda Lorena.

Lorena y Nórida, como muchos otros habitantes de Siberia, huyeron del pueblo tras el ataque. Ellas regresaron a los pocos días, pero a día de hoy hay personas que siguen exiliadas. Tras aquello el pueblo quedó sin policía durante cinco años, bajo el mandato de las FARC. “Esos cinco años fueron años sin enfrentamientos, pero también con incertidumbre”, evoca Nórida. “Y luego vinieron los años de Uribe. Uribe golpeó mucho a la guerrilla. Trajo otra vez mucho movimiento, con soldados, helicópteros volando continuamente... Aquí hemos estado muchos años con miedo, pero ahora todo esto está más tranquilo”, concluye.

“Sí, la gente ya sale a distraerse. Hace poco más de un año aquí no se podía salir por la noche”, confirma Lorena.

Lorena y Nórída están hartas del conflicto. Ese sentimiento es el sentir de muchos colombianos. Y en Siberia, Bogotá o la vereda Carlos Perdomo la paz ya no es una quimera. El resultado del referéndum del año pasado, en el que el *no* a los acuerdos ganó por muy pocos votos al *sí*, dejó en evidencia la fragmentación que vive Colombia respecto a la negociación que Gobierno y FARC iniciaron en 2012, pero esa polarización no hace de los colombianos un pueblo adicto a la guerra. Allá donde la paz se intuye, donde se deja sentir, los colombianos lo celebran. Colombia sigue enfrentada, pero ya no quiere más combates.



Antonio Ospina, comandante de FARC en la Carlos Perdomo. PABLO GRACIA

Mientras tanto, en la Carlos Perdomo, Antonio Ospina se prepara para iniciar una nueva vida. Ya no es guerrillero, porque tiene un certificado de Naciones Unidas que así lo acredita, pero, de momento, tampoco es ciudadano de pleno derecho: aún deberá esperar al 15 de agosto para su reincorporación. Lo que no va a cambiar, en cualquier caso, es su lucha. “Nosotros no nos hemos reconciliado por haber llegado a un acuerdo. Para nosotros sigue siendo nuestra misión eliminar a la clase dominante. No estoy hablando de eliminarlos violentamente, de matarlos, sino de hacer que desaparezca en Colombia la clase que ha usurpado la riqueza que nos corresponde a todos. Esa es nuestra misión histórica, antes y después del acuerdo”. Puede que algún día lo consigan. Pero ya no será disparando.

## 5. Análisis de las cuestiones abordadas en el reportaje

El reportaje elaborado es un producto informativo con una finalidad concreta: explicar la situación en la que se encuentra el proceso de paz a pocos días de que la guerrilla de las FARC comience su reintegración a la vida civil y haga efectiva su renuncia a la lucha armada después de 53 años de conflicto. Así, este epígrafe se va a centrar en lo relativo al cumplimiento del punto 3 del Acuerdo Final, denominado *Fin del conflicto*, que regula el Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Aquí se van a señalar los incidentes y problemas que, tras la recopilación de información a través de diferentes fuentes y la propia cobertura sobre el terreno, el alumno ha identificado a la hora de dar cumplimiento a ese punto 3 del Acuerdo Final. Asimismo, se delimitarán algunos de los retos que los miembros de la guerrilla deberán afrontar una vez finalice su estancia en las Zonas Veredales de Transición a la Normalidad donde se encuentran desplegados desde febrero de 2016.

El acuerdo suscrito por FARC y Gobierno Nacional el 24 de noviembre de 2016 establece en su punto 3 el establecimiento de 26 Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) que “tienen como objetivo garantizar el CFHBD y la DA, e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses, y el tránsito a la legalidad”. En virtud del acuerdo, se debía formar un organismo, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de Naciones Unidas, encargado de “dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes”.

Para el cumplimiento de lo pactado se establece un calendario de 180 días en el que se llevaría a cabo el proceso de dejación de todas las armas en poder de los más de 7.000 guerrilleros de FARC y que culminaría con la finalización de las ZVTN y la extracción, por parte de Naciones Unidas, de la totalidad del armamento (el material no se limita únicamente a los fusiles en manos de los guerrilleros: incluye también las caletas donde la organización tiene almacenado instrumental bélico a lo largo de todo el territorio de Colombia). Ese calendario se inicia el 1 de diciembre de 2016 con el denominado *Día D* y, en principio, se fija con el siguiente cronograma:

*Día D+1:* la Fuerza Pública reorganiza un dispositivo de tropas para facilitar el desplazamiento de las FARC a las ZVTN.

*Día D+5:* las FARC inician el desplazamiento a las ZVTN con su armamento individual.

*Día D+60:* almacenamiento del armamento de acompañamiento, granadas y municiones en contenedores bajo control exclusivo de Naciones Unidas.

*Día D+7 - Día D+60:* en ese periodo correspondería la destrucción del armamento inestable (Tatucos, cilindros y minas).

*Día D+90:* registro, identificación, recolección y almacenamiento del 30 % de las armas.

*Día D+120:* recolección y almacenamiento en los contenedores del siguiente 30 % de las armas (60 % del total).

*Día D+150:* recolección y almacenamiento en los contenedores del 40 % restante de las armas (100 %).

*Día D+180:* finalización de las ZVTN y extracción de todo el armamento.

La fecha de finalización del proceso, por tanto, se fija en el 1 de junio de 2017, día que coincide con el *D+180* marcado en el Acuerdo Final. A finales de enero de 2017 los diferentes bloques y columnas de las FARC inician el traslado desde distintas posiciones de Colombia a las 26 ZVTN delimitadas por los acuerdos para comenzar su concentración. Sin embargo, los plazos iniciales van a incumplirse por una serie de circunstancias. A continuación se detallan en distintos bloques esas y otras complicaciones, y se reparará también en los retos más relevantes que deberán afrontar las FARC una vez finalizado el proceso de cese al fuego, de hostilidades y dejación de armas.

### **5.1. Incumplimiento de los plazos establecidos en el punto 3**

El lunes 29 de mayo el presidente Juan Manuel Santos anunciaba una modificación en el plazo inicial establecido para la dejación de armas y también un aplazamiento para la transformación de la ZVTN en Espacios Territoriales de Capacitación y la

reincorporación de las FARC a la vida civil. Se fijaba así la dejación de armas definitiva para 20 días después de lo acordado inicialmente (se pasaba del 1 al 20 de junio) y se aplazaba 60 días la fecha para la finalización de las ZVTN (se establece una nueva línea de tiempo en el 1 de agosto). A la postre, tampoco se cumplirían esos nuevos plazos.

El principal motivo se debió a la demora en las obras de los campamentos de las diferentes zonas veredales. Mientras el Gobierno anunciaba en varios medios de comunicación colombianos que la mayoría de los campamentos ya se encontraban por encima del 70 % de su construcción, los informes semanales de la misión de Naciones Unidas hablaban de campamentos que a principios de junio aún no se habían comenzado a construir. A ese problema se sumaba la falta de contenedores (lugares designados para depositar el armamento) en muchas de las ZVTN, circunstancia que no permitía la dejación de armas de los guerrilleros. Se trata de un problema logístico que aún persistía cuando el alumno viaja a Colombia en julio y que concretamente afecta a la ZVTN visitada. En la sede local de Los Monos hablan de un campamento casi acabado, el campamento San Antonio, pero determinan en un 40 % el estado de la construcción del otro campamento: Santa Rosa.

El segundo motivo que condiciona el cumplimiento de los plazos es la situación de los más de 750 presos de FARC que, en virtud de la Ley de Amnistía contemplada en el Acuerdo Final, debían haber salido de las cárceles colombianas después de hacerse efectiva la dejación de armas, dejación que finalmente se concretó el 26 de junio. Se produce una dilación a la hora de abordar ese apartado, e incluso algunos jueces contrarios al acuerdo se niegan a aplicar la Ley de Amnistía, razón por la que gran parte de los comandantes de FARC en las ZVTN deciden estancar el proceso reteniendo información acerca de la ubicación de las caletas (8). Javier Benito, jefe de la sede local del MM&V en El Jordán (Tolima) lo explica así: “La dejación de armas ha sido una moneda de cambio. Cualquier avance que no se produzca en los términos establecidos, siempre paraliza el proceso. Las FARC están muy preocupadas por la seguridad y los presos, y ahora la construcción de los campamentos no es su prioridad. Pero la Justicia, como en cualquier país, funciona a su ritmo”. En los mismos términos se expresa Gerardo Tovar, jefe de la sede local del MM&V en El Yará (Meta): “Hay sedes que, debido a la relación con el comandante de FARC, han avanzado mucho más que otras. Las que había en Villavicencio, en Meta, estaban todas fatal. Si no hay buena relación, esto no avanza”.

La dejación de armas se completó finalmente el lunes 26 de junio, con un balance de 7.132 armas individuales depositadas en los contenedores de Naciones Unidas. El proceso de extracción del armamento se inició según el segundo plazo acordado, el 1 de agosto, pero el día 30 de julio la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) se vio obligada a retrasar 15 días más (hasta el 15 de agosto) la finalización de ese proceso de extracción y la transformación de las ZVTN en Zonas de Capacitación y Reincorporación, es decir, la incorporación de la guerrilla a la vida civil.

## **5.2. Extracción de caletas**

El plazo inicial para acabar con la extracción de caletas se estableció en el 1 de septiembre, pero todas las fuentes consultadas por el alumno antes de la finalización de ese plazo coincidieron en la imposibilidad de cumplirlo. Así, se tuvo que realizar una ampliación del tiempo estimado en un principio y la operación se dio por terminada 15 días después delo previsto, el 15 de septiembre. En el proceso participaron 450 observadores internacionales de Naciones Unidas, más de 100 componentes de las FARC y alrededor de 500 miembros de UNIPPEP.

La lentitud del proceso se debió, sobre todo, a la difícil accesibilidad de las zonas donde se encontraban ubicadas las caletas. En total se recorrieron alrededor de 40.000 kilómetros, tanto por vía terrestre (120 movimientos) como fluvial (20 desplazamientos), lo que da cuenta de la magnitud de la empresa. Finalmente se desmantelaron 750 caletas con armamento inestable, de las 998 que había reportado FARC al principio de la misión.

Además de las complicaciones relativas a la accesibilidad, la destrucción de ese material presentó otros impedimentos. En primer lugar, las trabas ya citadas anteriormente: las FARC retuvieron información cuando observaban que el Gobierno no cumplía con otras partes del acuerdo (la demora en la construcción de los campamentos y la aplicación de la Ley de Amnistía). Y segundo: la imposibilidad de encontrar algunas de las caletas debido a la muerte o desaparición del miembro de FARC que conocía su ubicación. “Nosotros somos una nueva generación de FARC”, explica Johnny Arenas, delegado de FARC en la sede local del MM&V en Caldon. “No podemos asegurar la ubicación del 100 % de las caletas, pero no es porque nosotros no queramos, sino porque la persona que conocía las coordenadas ya no está. Pero FARC tiene la voluntad de localizarlas”.

El balance del material recopilado una vez finalizada la misión, según el informe de Naciones Unidas del día 15 de septiembre, es el siguiente: 1.238 armas identificadas, 488.489 municiones de diferente calibre, 26.489 kilos de explosivos, 4.277 granadas de mano, 2.647 minas antipersonal, 31.868 iniciadores-estopines y 1.767 municiones de mortero. El 26 de septiembre es la fecha fijada para que Naciones Unidas entregue ese armamento y comiencen a construirse tres monumentos (uno en Nueva York, otro en La Habana y un tercero en Bogotá) con parte de las armas, tal y como está estipulado en los acuerdos de paz.

### 5.3. Disidentes

Un número importante de guerrilleros de FARC han ido abandonando la organización a lo largo del proceso de paz. A mediados de julio, el coronel Alejandro Rubiella toma como referencia los datos manejados por Naciones Unidas y cifra el número de disidentes de FARC en 385. Sin embargo, en una publicación del 12 de septiembre el diario *El colombiano* contabiliza sólo 400 ex miembros de FARC integrados en diferentes grupos criminales en varias regiones de Colombia (sobre todo en el sur del país: Nariño, Cauca, Meta, Guaviare...), lo que sugiere que la cifra total, si se sumasen los disidentes que no se han unido a otras bandas, se sitúa por encima de esos dígitos. A falta de datos de organismos oficiales, un artículo del 16 de septiembre de la *Fundación Semana* establece el número total de disidencias en “480 enemigos del proceso de paz distribuidos en 41 municipios, de los 242 donde operaban las FARC”.

La mayoría de esas disidencias tienen su origen en el rechazo a los acuerdos de paz y en la voluntad del disidente de continuar con un estilo de vida vinculado a la criminalidad. La salida es la incorporación a otros grupos armados o bien la creación de estructuras formadas íntegramente por miembros de la guerrilla con colaboraciones puntuales con otras organizaciones criminales. Eduardo Álvarez, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), identifica en *El colombiano* esas deserciones en dos grupos: “Nosotros decimos que estas disidencias están divididas en dos partes, una de ellas está en el norte del Cauca, con el Frente 6, y en Nariño, donde hay guerrilleros que ahora se hacen llamar *Guerrillas Unidas del Pacífico*, y otras del Frente 29”.

En la ZVTN visitada, en Los Monos, se produjo una de esas deserciones vinculadas a bandas criminales. Antonio Ospina, comandante de FARC en la ZVTN Carlos Perdomo,

habla de un adolescente que dejó la zona y se unió a un grupo de atracadores. “A ese muchacho lo mataron cuando estaba en un atraco”, recuerda Ospina. “Lo mató la policía, en la carretera central que va de Cali a Popayán. Pero no hemos tenido más casos graves, como en otras zonas, de gente que se asocia con otros grupos”, concluye.

Sin embargo, no todas las disidencias se relacionan necesariamente con la unión a otras estructuras, y algunas ni siquiera se vinculan a la no aceptación del proceso de paz. Existen casos particulares alejados del contexto estrictamente político. Javier Benito ejemplifica esta cuestión con su experiencia en la sede local del MM&V en El Jordán: “En mi vereda ha habido 13 desertores, de los cuales 8 eran niñas menores de 23 años. Niñas desencantadas, desilusionadas, incluso con problemas de desamor y cosas así. O sea que en este caso no era una cuestión de principios ni de ideología”.

#### **5.4. Violaciones de los acuerdos**

El proceso de cese al fuego y de hostilidades no sufrió peligro de fractura en ningún momento y, salvo incidentes puntuales, se cumplió bajo las reglas pactadas. No obstante, los informes SÍTREP de la Misión Política de Naciones Unidas consultados por el alumno comunican altercados, contratiempos e incluso algunos asesinatos y agresiones graves.

Las violaciones graves al cese al fuego consistieron en varios homicidios, ataques de grupos armados y abusos sexuales y violaciones perpetradas contra menores de edad. Sirvan como ejemplo el abuso sexual sufrido por parte de una niña a manos de un integrante del Ejército Nacional (el 28 de diciembre de 2016), los ataques llevados a cabo por miembros de FARC en la región de Caquetá (10 de enero de 2017) o los 23 asesinatos de miembros de FARC y familiares de FARC en lo que llevamos de 2017. Tanto la Fuerza Pública como las FARC incurrieron también en violaciones graves de los acuerdos en varias ocasiones al portar armas dentro de las Zonas de Seguridad delimitadas dentro de las ZVTN.

Las violaciones leves fueron mucho más frecuentes y las infracciones mucho más variadas: acceso de civiles y periodistas en decenas de ZVTN (La Guajira, La Reforma, Los Monos, etc.), incumplimiento de las tareas del MM&V durante la celebración de los actos conmemorativos de los 53 años de FARC (junio de 2017), errores en la elaboración de los listados del personal de FARC...

## **5.5. Retos**

Las FARC dejaron de ser oficialmente un grupo armado el 15 de agosto de 2017. A partir de ese momento, las ZVTN en las que se encontraban desde febrero pasan a convertirse en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Comienza así una etapa marcada por un objetivo específico: la reintegración política, social y económica de los ex guerrilleros en la sociedad civil. Para este cometido, Naciones Unidas aprueba el 10 de julio de 2017 la Resolución 2366 autorizando una segunda misión en Colombia, que empezará su andadura a partir del 26 de septiembre de 2017. A continuación se señalan cuáles son los principales desafíos que deberán afrontar las FARC en esta nueva era.

El primero de los retos es el de la reintegración política. El Congreso Fundacional que debía dar lugar a la creación del partido político de las FARC tenía como fecha inicial el mes de abril, pero debido a los retrasos en la implementación de los acuerdos (demoras que se han detallado con anterioridad) ese cónclave no pudo celebrarse hasta cuatro meses después. El Congreso, por lo tanto, tuvo finalmente lugar en Bogotá entre el 27 y el 31 de agosto de 2017. Allí los ex guerrilleros decidieron el nombre del nuevo partido y definieron las propuestas del programa con el que participarán en las elecciones de 2018.

Los acuerdos de La Habana garantizan a las FARC diez representantes fijos, cinco en el Senado y otros cinco en la Cámara, independientemente del resultado que cosechen en los comicios. No obstante, el principal desafío para la organización reside en la necesidad de superar en las urnas ese número de curules con el que ya cuentan de antemano. La idea es sencilla: no sumar escaños a los que ya tienen concedidos por ley deslegitimaría en gran medida ese nuevo proyecto político. El coronel Rubiella lo resume de la siguiente manera: “Ellos tienen garantizados diez curules y si el día de las elecciones consiguen once, quiere decir que los diez curules no se los han regalado. Pero si se quedan en diez, la gente va a decir: no os ha votado ni dios”.

Otro de los asuntos abordados en el Congreso fue el del nombre del nuevo partido. A nivel interno, en las FARC coexiste un sector ortodoxo, defensor a ultranza de las teorías marxistas que dieron origen a la organización, y otro realista, partidario de introducir matices a ese discurso original. Y en ese sentido la denominación del nuevo partido juega un factor clave. Continuar con las mismas siglas, las de FARC, enviaría un mensaje de continuidad a la sociedad colombiana, una sociedad que ya de por sí se muestra escéptica

ante el proceso de paz (el referéndum celebrado el 2 de octubre de 2016 se decantó por el *no* a los acuerdos por sólo 50.000 votos, revelando una profunda polarización en la opinión pública del país). Finalmente en el Congreso se decidió cambiar el nombre de la organización pero manteniendo las siglas: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Queda por ver en las urnas la conveniencia de esa decisión. Mientras tanto, no son pocos los ciudadanos que en las redes sociales ya critican abiertamente esa elección. Preguntado por este debate, el profesor Adolfo Álvarez, Director del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle (Cali), respondía así: “El problema está en ese sector ortodoxo que plantea un partido con una perspectiva marxista. Pablo Catatumbo, comandante del Bloque Sur, ya dijo que eso era un suicidio político. Es que la Unión Patriótica ya introducía matices al discurso marxista”.

En principio, no parece existir riesgo de que el nuevo partido se centre únicamente en la cuestión agraria, cuestión que dio origen al grupo en los años 60, para perder de vista otras problemáticas que urgen a Colombia. Las líneas programáticas aprobadas en agosto así lo atestiguan: lucha contra la desigualdad, protección del medio ambiente, regeneración democrática a nivel institucional, instauración de un nuevo sistema de salud a nivel estatal... Antonio Ospina lo aclara: “El campo de acción nuestro, como guerrilla, ha sido el campo por obvias razones. Pero yo operé como guerrillero en la ciudad y es ahí donde está la mayor parte de la población. Nosotros esperamos construir un proyecto con la mayoría de Colombia”.

Todas estas cuestiones se relacionan con el segundo de los desafíos: el que atañe a la reintegración social. Según un sondeo de Gallup difundido el 30 de agosto, el nuevo partido político contaba con una imagen favorable del 12 %, dos puntos porcentuales más que la valoración obtenida por “los partidos políticos tradicionales”. En cualquier caso, las reacciones registradas tras la celebración del Congreso Fundacional ponen de manifiesto que existe un sector muy importante de la sociedad colombiana que es hostil a la nueva formación.

Y luego está el asunto de la reintegración económica, apartado estrechamente ligado al de la reintegración social. En virtud de los acuerdos, a partir del 15 de agosto cada guerrillero comenzó a percibir 2 millones COP (alrededor de 600 euros) por desmovilizarse, otros 8 millones COP (unos 2.400 euros) para aquellos que inicien un proyecto productivo sostenible y 620.500 COP (unos 186 euros) mensuales durante 24

meses. Además, tendrán derecho a Seguridad Social (salud y pensión) durante 24 meses aquellos que no acrediten ningún vínculo laboral. Sin embargo, el Secretariado de FARC decidió que esas cantidades se ingresaran en un fondo común que será gestionado de forma comunitaria. Es así como nace ECOMUN (Economías Sociales del Común), la primera cooperativa de las FARC-EP y principal alternativa económica de la organización para el postconflicto.

Desde el 15 de agosto más de 4.000 ex guerrilleros vienen recibiendo cursos de economía solidaria con el objetivo de conformar al menos 52 cooperativas en los 26 Espacios de Capacitación y Reincorporación repartidos por toda Colombia. Las primeras cooperativas se enfocarán a la producción de alimentos, pero la idea es que ese modelo económico se amplíe poco a poco hacia otros sectores: proyectos agropecuarios, agroindustriales, textiles, de recuperación y conservación ambiental...

La empresa no está exenta de dificultades. En algunos campamentos ya se registraron tensiones cuando algunos guerrilleros conservaron el salario recibido mientras otros lo habían depositado en el fondo común. El principal problema de ECOMUN, de todos modos, es otro: la difícil ubicación de las zonas donde se están empezando a implementar esos proyectos, que impide en gran medida la distribución de los productos elaborados, y, sobre todo, la falta de tierras para llevar a cabo esos trabajos. Los Espacios de Capacitación y Reincorporación donde se encuentran las FARC son terrenos alquilados por el Gobierno de Colombia y, de momento, no son propiedad de los ex combatientes. La futura viabilidad de ECOMUN, por tanto, depende del acceso a la propiedad de aquellos que trabajan en las cooperativas.

La medida de las ayudas económicas recibidas por los miembros de FARC no se ha librado de la polémica en Colombia. Gran parte de la población, la mayoría sectores cercanos a Uribe, aún no entiende que personas que han estado involucradas en crímenes durante tantos años ahora reciban un importe que casi alcanza el salario mínimo del país. Es una postura cargada de contradicciones: durante la presidencia de Uribe también se concedió ayudas a guerrilleros por su desmovilización y en muchas ocasiones esas cuantías superaban las actuales (9).

En lo referente a la reintegración económica, el segundo apartado a tener en cuenta es el del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito). El

Acuerdo Final incluye el PNIS en el punto 4 (*Solución del Problema de las Drogas Ilícitas*) y se enfoca a apoyar la transición a la legalidad de los campesinos dedicados a los cultivos ilícitos, a través de asignaciones económicas a sus familias. Cada familia que se comprometa con el plan, recibirá el primer año 24.400.000 COP (alrededor de 6.800 euros) y el segundo año 11.600.000 (unos 3.300 euros). No sólo eso. El programa incluye el término *integral* y hace referencia al compromiso del Gobierno de favorecer el desarrollo de las comunidades mediante la inversión en diferentes sectores e infraestructuras.

Según el informe *¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? Principales avances, desafíos y propuestas para hacerles frente* publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en julio de 2017, el Gobierno de Colombia debería erradicar cada día, con fines de sustitución, 330 hectáreas de cultivos si quiere alcanzar la meta establecida en los acuerdos: sustituir en 2017 50.000 hectáreas de coca, marihuana y amapola.

En el Acuerdo Final se concreta que la responsabilidad de implementar el programa recae sobre el Gobierno, pero también contempla la participación activa de las FARC en el proceso de sustitución. Aplicando el texto, las FARC se comprometen a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y a poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

Ese compromiso se concreta con la conformación de unos comités enfocados a la sustitución integral de cultivos, dotados de una estructura nacional, además de órganos regionales y locales. Los comités están formados por personal de Gobierno y FARC. Antonio Ospina resume su funcionamiento: “El proceso de sustitución se va a hacer concertado con las comunidades y para eso están los comités. Si, por ejemplo, en nuestra vereda vamos a implementar el programa, entonces se realiza una reunión con los cultivadores de coca, marihuana o amapola que haya en esta vereda. A esa reunión también debe asistir el comité local y el comité regional, conformados por FARC y Gobierno, que presentan cada uno una propuesta de sustitución, y la propuesta final que salga debe ser construida por las tres partes: Gobierno, FARC y cultivadores.”

El principal reto que afronta el PNIS se encuentra en la ocupación del espacio dejado por las FARC por otros grupos armados que se están haciendo con el control de los antiguos negocios ilícitos de la guerrilla. Así, en las regiones del Catatumbo, El Chocó, Argelia y El Tambo encontramos al ELN, que por una parte negocia con el Gobierno una salida pacífica al conflicto y por otra continúa participando de negocios criminales. También obstaculizan el programa las propias disidencias de las FARC, que en regiones como Guaviare y Nariño mantienen una actividad de intimidación contra las familias que se han acogido al PNIS. Por último, la acción de los grupos armados posdesmovilización, con el Clan del Golfo a la cabeza, organización que extiende sus tentáculos por diferentes departamentos del país.

Este quizá sea el mayor de los desafíos que amenazan el proceso de paz: la prolongación del conflicto a través de nuevos actores, los ya citados grupos posdesmovilización y otras guerrillas. Se ha hablado aquí del ELN y el *Clan del Golfo* (también conocido como AGC: *Autodefensas Gaitanistas de Colombia*), pero estas organizaciones criminales se expanden a un ritmo vertiginoso por todo el territorio colombiano y cada día son más las bandas nacidas en las zonas donde hasta hace poco operaban las FARC. El informe *Siete regiones sin las FARC, ¿siete problemas más?*, publicado por la FIP en marzo de 2017, delimita siete áreas donde el reacomodo y la persistencia en actividades criminales de estos grupos son especialmente marcados: El Chocó, Cauca, Tumaco (departamento de Nariño), Bajo Cauca (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca), Eje Llanos Orientales-Orinoquía (fundamentalmente en los departamentos de Meta, Valpiés y Guaviare) y Catatumbo (Norte de Santander). Así, a la violencia mantenida por el ELN y el *Clan del Golfo*, se suman otros grupos como *Los Puntilleros* (Bajo Cauca), *Los Rastrojos* (Catatumbo), *La Empresa* (Buenaventura) o *Águilas Negras* (Tumaco y Cauca, sobre todo).

La violencia de estos grupos va dirigida en gran medida contra líderes sociales y otros agentes defensores de DDHH que apoyan programas de sustitución de cultivos y la implementación de las medidas pactadas en los acuerdos de paz (la Defensoría del Pueblo contabiliza 52 homicidios de líderes comunitarios hasta julio de 2017), pero las FARC son el segundo colectivo que más ha sufrido la brutalidad de estos grupos, con 23 miembros y familiares asesinados hasta el 15 de agosto de 2017, y esa ha sido quizá su principal preocupación durante la aplicación de la hoja de ruta del Acuerdo Final en lo que llevamos de 2017.

Para hacer frente a todos estos retos, Naciones Unidas aprobó una nueva misión en Colombia, que entrará en vigor el 26 de septiembre (10). La misión se encargará de verificar el cumplimiento de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final, relativos a la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus intereses y al Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. En lo referente al punto 3.4, cobrarán especial relevancia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el proyecto de ley que permite que ex combatientes de FARC se vinculen a ese organismo para ejercer como escoltas de los jefes de la guerrilla.

En este apartado se han señalado los principales frentes abiertos relativos al punto 3, *Fin del Conflicto*, del Acuerdo Final. Sin embargo, los retos a afrontar en el futuro inmediato por Gobierno y FARC no acaban ahí. Queda mucho camino por recorrer, sobre todo en lo que atañe a los capítulos de la *Reforma Rural Integral* y *Víctimas del Conflicto*, puntos 1 y 5 del Acuerdo Final que no se abordan aquí, y que regulan algunos de los asuntos más espinosos del proceso de paz, como es el caso de la restitución de tierras o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

## 6. Entrevistas

### **Entrevista 1: Antonio Ospina**

**Cargo/interés: Comandante del Frente *Jacobo Arenas* de las FARC.**

**Lugar de la entrevista: Campamento San Antonio, Zona Veredal Carlos Perdomo (Pueblo Nuevo, Cauca).**

**Fecha: Sábado 15 de julio de 2017.**

Descripción: La entrevista no está concertada de antemano debido a las dificultades obvias que presentaba la accesibilidad al entrevistado. Se decide intentar entrar en la ZVTN el mismo día que se visita la sede local del Mecanismo Tripartito de Verificación y Monitorización en Los Monos (Caldono, Cauca). Se comunica la intención de acceder

a la ZVTN a varios miembros del Tripartito y estos me advierten de las dificultades para llegar hasta allí, debido fundamentalmente a la constante presencia del Ejército en la carretera de acceso. No obstante, en ningún momento intentan disuadirme. Una vez en el campamento, me identifico como periodista ante un grupo de guerrilleros de la entrada y solicito hablar con alguien al mando. Me dicen que espere y alrededor de 10 minutos más tarde aparece Ospina. La entrevista se realiza en una de las casetas cercanas a la entrada del campamento y Ospina no pone obstáculos al uso de la grabadora. Una vez acabada, se me permite realizar un recorrido por el lugar para tomar fotografías.

**Pregunta:** Me gustaría empezar con el día a día del campamento. ¿Qué es lo que ustedes hacen aquí un día normal? ¿Y cómo va a cambiar eso a partir de agosto?

**Antonio Ospina:** El día a día hoy es, comparado con el día a día de cuando estábamos en la situación más intensa de la confrontación, muy diferente. Hay unas actividades que son muy rutinarias, que se mantienen. Muy temprano se levantan quienes estén encargados de preparar los alimentos, hacen el desayuno y el resto del personal nos levantamos a las 4.50 de la mañana para iniciar diferentes actividades. Ahora una parte de esas actividades es el trabajo de construcción. Nosotros aquí somos 438 combatientes en proceso de reincorporación. Este campamento es para 200. Ahora se están construyendo dos campamentos: este y un campamento que se alcanza a ver desde aquí, que tiene capacidad para 238. Este campamento es el que va más avanzado: podemos decir ya que está a un 90 % de su construcción. El otro va más retrasado: está a un 40 % más o menos. El plazo para que se terminen estos campamentos en teoría es el 1 de agosto, pero quedan pocos días para esas fechas y aún no están terminadas las zonas veredales. No sólo aquí: también pasa en otras zonas. En otras partes están peor: aquí por lo menos podemos decir que uno de los dos campamentos ya lo tenemos casi terminado. En otras partes están en 0 %.

**P:** ¿0 %? Entonces, ¿Ahí ni siquiera se puede dormir?

**A.O.:** No, claro. La construcción de los campamentos es la fase más básica de la implementación del acuerdo. Nosotros ya finalizamos la dejación de las armas y hemos cumplido con todo lo que nos corresponde. Ayer justo estábamos aquí destruyendo munición junto con la ONU, obviamente, porque el proceso se hace conjunto. Ya el armamento nuestro está en manos de la ONU. Queda sólo el armamento que es para

seguridad, que el 1 de agosto desaparece también. A partir de ahí quedamos sin una sola arma. Ya para el 1 de agosto, por ejemplo, debe estar promulgada la amnistía, el indulto para todos nuestros presos, y ya seremos población civil, aunque ya somos prácticamente población civil.

**P:** Ya todos los combatientes tienen su certificado...

**A.O.:** Ya todos tenemos el certificado entregado por la ONU que garantiza que nosotros ya hicimos dejación de armas. Tenemos otro documento que es la acreditación del Gobierno que contiene una especie de acta de compromiso para no volver a usar las armas contra el Estado.

**P:** El proceso de extracción de caletas se está demorando más...

**A.O.:** Aunque ya se viene haciendo. Aquí ya se han extraído algunas. En la mayoría de casos, donde se puede hacer destrucción en el sitio donde está, se hace. Lo que se extrae de las caletas es material de guerra: explosivos, fusiles, munición, granadas... Cuando no se puede destruir en el sitio se traslada a un sitio seguro lo más cercano posible y se destruye. Muchas veces para trasladar explosivos es complicado. Cuanto menos se manipule mucho mejor.

**P:** ¿Quedan muchas caletas o se han extraído ya la mayoría?

**A.O.:** No se han extraído la mayoría, pero se va adelantando el proceso. Para el 1 de agosto seguramente no vamos a terminar de extraer todas las caletas a nivel nacional. Eso tiene otro plazo más.

**P:** Quería preguntarle por los incentivos que recibirán los combatientes, ¿qué se le va a dar a cada guerrillero a partir del 1 de agosto?

**A.O.:** Sí, a ver. Yo no lo llamaría incentivos. Hay un acuerdo en el que pactamos unas condiciones mínimas, y yo creo que son demasiado mínimas, para que nosotros podamos hacer el tránsito a la vida civil. Por ejemplo, la mayoría de nosotros llevamos la mayoría de nuestra vida en la guerrilla y estar en la guerrilla es muy diferente a estar en un ejército regular. No se trata sólo de pertenecer a un ejército: esto es nuestra vida. Y ahora eso va a cambiar, pero nosotros estamos preparados para el cambio.

A la guerrilla le debemos todo. La mayoría de nosotros, lo que sabe, lo ha aprendido aquí. Aquí nos han dado la comida, la ropa, la salud... Entonces nosotros no tenemos nada.

Ahora que se acabó la guerra y se acabaron las FARC, yo no tengo ninguna casa para dónde ir. Y la mayoría de los combatientes están en la misma situación. Entonces no son incentivos: son condiciones apenas mínimas y normales para que nosotros podamos hacer ese tránsito, porque nosotros somos un ejército con profundas convicciones, hayamos obrado equivocadamente o no, y hemos actuado de acuerdo a ellas. Devolver a toda esta gente a la vida civil sin trabajo, sin casa, sin salud, eso sería desastroso. Eso sería peor que continuar en guerra, porque derivaría en una violencia sin contenido político.

Entonces nosotros en términos de salud estamos en el proceso de afiliación a un sistema de salud. Y, compañero; yo te digo que es mejor no tener afiliación a una EPS, que tenerla. Si yo no tengo EPS, sé que me tengo que morir en mi casa. Si tengo EPS me toca morir me dando vueltas, entre hospitales y haciendo filas. Eso no sirve. Sin embargo, nosotros sabemos que entramos en un sistema legal y hay que entrar en las reglas del sistema legal. Pero nosotros vamos a seguir luchando contra eso. Nuestro proyecto político sigue siendo el mismo proyecto político. Vamos a seguir luchando por ese proyecto sin las armas, con formas de lucha civiles y legales.

Una de las pruebas de que hay que transformar este sistema y este país es precisamente el sistema de salud público. Nosotros nos vamos a afiliar a ese sistema, pero eso no sirve para nada.

Vamos también a recibir durante dos años el 90 % de un salario mínimo legal en Colombia. Eso para los que no consigamos trabajo, a partir del 1 de agosto. Eso, en euros, serían como 200 euros.

**P:** Hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. Muchos dicen: ¿cómo se le va a dar tanto dinero a esta gente, que ha matado y ha secuestrado?

**A.O.:** Dentro del acuerdo a eso se le llama la renta básica. Es el 90 % del salario mínimo. El salario mínimo son 770.000 pesos. Entonces se nos van a dar unos 600.000 pesos por dos años si uno no tiene contrato. Esto fue muy peleado por nosotros, para darnos un tiempo para que empiecen a funcionar los proyectos productivos que vamos a implementar.

**P:** A eso me refería cuando hablaba de incentivos. Creo que está estipulado, y aquí el término “incentivo” sí se ajusta más, que los guerrilleros reciban un importe si consiguen implementar proyectos productivos.

**A.O.:** Sí, lo que está estipulado es que a partir del 1 de agosto nosotros podemos disponer para proyectos productivos o de vivienda, no pueden ser los dos (sólo uno de los dos), de 8 millones de pesos por persona. Pero yo, que no tengo nada, con 8 millones de pesos no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que nosotros esperamos hacer? Nosotros vamos a reunir todo ese dinero, y en eso ya estamos trabajando, y conformar una organización económica. Porque uno solo con 8 millones de pesos lo único que puede hacer es comprar unos paquetes de dulces y venderlos tal vez.

Esa organización económica ya la conformamos a nivel nacional. Falta conformarla a niveles locales. Entonces ya desde la semana que viene vamos a empezar a conformar cooperativas con toda la gente nuestra y gente también de las comunidades, para que esas cantidades reunidas nos permitan hacer proyectos más importantes. Aquí, por ejemplo, somos 438, entonces así tendríamos unos 3.000 millones de pesos para proyectos productivos, Además hemos hablado con organizaciones internacionales y con gobiernos de otros países que han apoyado el proceso, para que nos ayuden a financiar proyectos colectivos.

Si llegáramos a juntar 6.000 ó 10.000 millones de pesos eso nos permitiría la posibilidad de conformar un proyecto para que por lo menos la gente trabaje y pueda ir creciendo. En las próximas semanas vamos a trabajar duro en la consolidación de las cooperativas y en la elaboración de los proyectos. Las ONG y los gobiernos de los que hablaba antes nos van a financiar proyectos de recuperación y conservación ambiental, y proyectos agropecuarios y agroindustriales.

**P:** ¿Qué papel tendrán las FARC en el PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos)? ¿Jugarán un papel activo?

**A.O.:** Sí, las FARC toman papel directo. Se conforman unos comités para la sustitución integral de cultivos. Esos comités tienen una figura nacional, figuras regionales y figuras locales. Esos comités están conformados por el Gobierno y por las FARC.

El proceso de sustitución se va a hacer concertado con las comunidades y para eso están los comités. Si, por ejemplo, en esta vereda vamos a implementar el programa, entonces se realiza una reunión con los cultivadores de coca, marihuana y amapola que haya en esta vereda. A esa reunión también debe asistir el comité local y el comité regional, conformados por FARC y Gobierno. Entonces FARC y Gobierno presentan cada uno una propuesta de sustitución de cultivos, y la propuesta final que salga de ahí debe ser

construida por las 3 partes: Gobierno, FARC y cultivadores. Todo esto tiene que tener base en el acuerdo, claro, tampoco puede ser algo que sobrepase los presupuestos.

El Gobierno ha estado haciendo algo con muy mala intención. Nosotros nos concentramos en estas zonas veredales y dejamos los territorios donde siempre hemos ejercido control. Y en algunos de esos territorios hay cultivos de coca, marihuana o amapola, que son de la gente y los mantiene porque no tiene otra forma de sobrevivir.

**P:** El PNIS intenta acabar con esta problemática a través de una serie de subsidios, pero el cultivo de coca siempre va a ser más rentable que cualquier otro cultivo y que esos subsidios, ¿cómo se convence a un campesino para que no plante coca y siembre otra cosa?

**A.O.:** Sí, claro. El acuerdo está pensado así. El Programa incluye el término “integral”. Eso no hace referencia únicamente a la parte económica. Hay unos incentivos en plata: si usted cambia la coca por café, por ganado, se le va a garantizar la sostenibilidad financiera, hasta que su producto empieza a dar resultados se le paga una mensualidad y se le brinda asistencia técnica, todo lo que tenga que ver con lo productivo. Pero, además, la palabra “integral” es importante porque se le debe garantizar a la gente otros servicios: educación, carreteras, electricidad, mejoras en la vivienda...

Por eso los programas integrales van más allá de algunas propuestas que hace el Gobierno. No es sólo cambiar la coca por café, más un incentivo económico. La sustitución debe ser integral. Si eso no se garantiza, los cultivadores van a volver a cultivar coca. El punto del acuerdo para la solución de drogas ilícitas contempla tres partes. Una es la de la sustitución de cultivos como tal. Un cultivador dista mucho de ser un narcotraficante. Un cultivador es el eslabón más débil de la cadena. Un cultivador es una persona normal que incluso pasa necesidades. Donde nosotros hemos estado, una de las cosas que hemos hecho es proteger a los campesinos para que no sean abusados por el narcotraficante.

El acuerdo contempla otra parte relacionada con el problema del consumo de drogas. Hay que tratar este problema como un problema de salud pública.

Y también contempla una tercera parte que son las medidas para empezar a solucionar el problema del narcotráfico.

Y yo se lo voy a resumir así: mientras que no haya un compromiso y sincero, no hipócrita, de las potencias industriales del mundo, donde están la mayor parte de los consumidores,

el problema no se va a solucionar. Mientras haya demanda, habrá quien lo produzca. Mientras Estados Unidos y Europa no se comprometan a solucionar el problema del consumo allá, aquí se va a seguir produciendo. Y esperamos que ese problema deje de descargarse sobre los cultivadores, que no tienen la culpa del problema.

Nosotros estamos seguros de que hay que tomar medidas más de fondo, pasando incluso por la legalización. La legalización no solucionaría el problema del todo, pero sí empezaría a solucionar el problema de la violencia generada por el narcotráfico.

**P:** ¿Estaría el conjunto de la sociedad colombiana dispuesta a abrazar la legalización? ¿Es ese un imaginario que exista actualmente?

**A.O.:** No, no es un imaginario que exista. La gente es muy hipócrita. Lo que llaman opinión pública es una cosa creada, no es una opinión propia. Para afrontar este problema hay que empezar a trabajar para crear el ambiente propicio para la legalización. El control que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, es muy estricto. Aquí no hay consumidores de drogas, porque además eso tiene problemas graves para la salud física y mental. Pero, aun así, nosotros creemos que hay que legalizarlo para superar el problema.

**P:** Quería preguntarle también por el asunto de la seguridad. Ustedes ya han sufrido violencia por parte de nuevos grupos que están apareciendo. Estos grupos también están atacando a campesinos y líderes sociales. ¿Qué están haciendo estos líderes sociales y campesinos para afrontar el problema? ¿Colaboran entre ellos o hay fricciones? Y, sobre todo, ¿qué está haciendo el Gobierno para luchar contra estos grupos?

**A.O.:** Sí, nosotros llegamos a un acuerdo muy importante, pero el acuerdo está en papel en estos momentos. Sabemos que va a ser difícil lograr que el Gobierno cumpla con todo.

La parte que más nos preocupa del acuerdo tiene que ver con eso: con las medidas que se acordaron para empezar a superar la violencia estructural, de la que se aprovechan muchos grupos criminales.

El motivo de la violencia en Colombia tiene un origen, una historia y muchos tentáculos: el hambre, la desigualdad, la exclusión, la falta de educación, la falta de que el Estado garantice los derechos básicos más fundamentales... El principal problema es que el Estado, y otros grupos, usan las armas y la violencia como principales medidas para hacer política.

Si no se supera ese problema, no se va a superar el conflicto armado. Nosotros podemos hacer dejación de armas, pero sin solucionar eso el conflicto no acabará. En el acuerdo hay un punto particular sobre medidas de seguridad y medidas para superar el paramilitarismo o las organizaciones que sean sus sucesoras (porque el Gobierno no reconoce que sigue habiendo paramilitares). En el punto de víctimas, también se incluyen medidas en ese sentido. Hay un plan piloto de medidas de seguridad, no solo para nosotros sino también para cualquier persona que quiera empezar a hacer política. Estos planes piloto se tienen que empezar a desarrollar en Tumaco y en Buenaventura. Eso ya está aprobado y debería estar andando, pero se ha demorado.

El Gobierno va muy lento en el cumplimiento de los acuerdos y eso es algo que a nosotros nos preocupa. Nosotros, de momento, esperamos que permanecer unidos nos garantice la seguridad. En este momento, salir al público sería exponerse a que empiecen a matarnos a todos.

**P:** Ya han sufrido ustedes agresiones y asesinatos...

**A.O.:** Ya han matado a guerrilleros y familiares de guerrilleros. Esperamos que a partir del acuerdo se pueda construir la paz, pero por haber firmado el acuerdo no ha desaparecido la violencia en Colombia. Yo sé que a partir de agosto soy civil, pero yo no voy a mi casa. Es peligroso, y que me vean allá es poner en riesgo a mi familia. Es mejor esperar a que la situación mejore y se implemente lo que está estipulado.

**P:** ¿Por qué se están incumpliendo los plazos del acuerdo?

**A.O.:** Los plazos en la dejación de armas se tuvieron que incumplir porque el Gobierno incumplió los plazos en la construcción de los campamentos. Hubo otras cosas que el Gobierno incumplió, pero lo fundamental fue eso. Para la dejación de armas se deben construir dentro de los campamentos unos sitios especiales con cercados y con sistema de iluminación, con contenedores, con sistema de seguridad electrónico, y nada de eso se había construido. Todavía hay muchos campamentos en los que se ha hecho dejación de armas pero el armamento se ha depositado en un sitio que no es lo que se acordó. El armamento se dejó en cajones y carpas. Y eso es inseguro. Tener en un cajón un montón de fusiles es problemático.

**P:** Le quería preguntar por su proyecto político, ¿corren ustedes el riesgo de centrarse demasiado en la cuestión agraria, que es la razón que está en el origen de las FARC, y perder de vista otras problemáticas que azotan a Colombia?

**A.O.:** No, no. Nuestro proyecto político no se centra únicamente en la cuestión agraria. El campo de acción nuestro, como guerrilla, ha sido el campo por obvias razones, pero nosotros estamos desplegados en todas las ciudades de Colombia también. Yo, por ejemplo, soy de ciudad y tuve contacto con las FARC en la universidad. Y algunos años operé en la ciudad, como guerrillero urbano. Nosotros esperamos construir un proyecto con la mayoría de Colombia, y la mayor parte de los colombianos está en las ciudades. Nosotros no vamos a abandonar el campo, porque en el campo tenemos una base muy sólida, pero nosotros vamos a buscar trabajo en las ciudades porque ahí es donde está la mayor concentración de población.

**P:** Supongo que habrá de todo, pero, ¿cuáles son las aspiraciones laborales de los guerrilleros? ¿Qué profesión predomina en esta vereda, por ejemplo?

**A.O.:** Usted hablaba al principio del día a día... Nosotros estamos desarrollando procesos de formación. No hace ni una semana que se graduó el primer lote de muchachos y muchachas como bachilleres. Y esperamos que esta gente pueda ingresar a la universidad.

En general, nosotros vamos a implementar los proyectos de los que hablaba antes y vamos a intentar sacarlos adelante. Las aspiraciones individuales son muy variadas: unos irán a la universidad, otros trabajarán con sus familias en el campo, algunos esperan desarrollar formación técnica y tecnológica...

**P:** Hábleme de la Unidad Nacional de Protección, ¿en qué nivel está el proceso de incorporación de los guerrilleros a esa unidad?

**A.O.:** Sí, eso está andando. El primer lote de 300 muchachos y muchachas de nosotros está haciendo el curso con una empresa de seguridad privada de escoltas. Es un curso técnico, porque los muchachos que hemos seleccionado ya tienen formación militar táctica y entonces ellos están recibiendo la otra parte de la capacitación. En una semana terminan los primeros y entonces entran los otros. Van a ser tres etapas y a final de años vamos a tener 1.200 muchachos y muchachas en los esquemas de seguridad nuestros. Los primeros 2 años van a ser escoltas del Estado, bajo mandato de la UNP, pero asignados a

nosotros. A partir de los 2 años esperamos conformar una empresa de seguridad privada para que brinde ese servicio fuera de las FARC.

**P:** Quería preguntarle sobre el referéndum, ¿qué falla en una sociedad que tiene la oportunidad de acabar con la mayor lacra de su historia reciente y, sin embargo, dice no a la paz? Porque se puede estar de acuerdo con ustedes o no, pero decir no a la paz es otra cosa.

**A.O:** Sí, obviamente la paz es un propósito común. No hay que estar de lado del Gobierno o de las FARC para estar de acuerdo con la paz. En ese anhelo nos encontramos todos. Pero esto tiene que ver con un problema histórico que hay en Colombia. En Colombia el principal problema que se tiene que solucionar es la violencia del Estado, el terrorismo de Estado. El Estado no sólo ha masacrado, exiliado y encarcelado gente, sino que ese ejercicio sistemático por parte del Estado nos ha mantenido a los pobres y a los trabajadores excluidos de la actividad política nacional. Entonces el pueblo colombiano no cree en el sistema político, y aún menos en el sistema electoral.

En la campaña del plebiscito se mencionaron muchas mentiras, como esa de que se nos iba a pagar mucha plata a los guerrilleros. Manipulaban a la gente, por ejemplo, diciendo que el contenido del acuerdo está cargado de ideología de género. Y eso es falso, pero en un país profundamente católico eso tiene su importancia. Por ejemplo, llegaron a decir que se les iba a quitar las pensiones a los jubilados para pagar a los guerrilleros. Todo cosas absurdas, pero en Colombia hay mucha ignorancia, una ignorancia impuesta, y todo eso cala. Una cantidad de medidas difundidas por aquellos que tienen medios para difundirlas.

Otra parte que hay que revisar son los resultados: son 12 millones de votos, divididos, porque el *no* ganó pero ganó sólo por 50.000 votos. Son 6 millones de votos por el *no* y en Colombia somos casi 36 millones de votantes potenciales. Con este resultado no se puede decir: Colombia no quiere la paz. Lo que pasa es que el pueblo colombiano no participa en los procesos electorales porque no cree en el sistema.

Una de las cosas que esperamos nosotros que empiece a cambiar después del acuerdo es el apartado de la participación política. El acuerdo establece unas garantías para participar en política y nosotros esperamos poder desarrollar un ejercicio pedagógico en conjunto con otras fuerzas sociales y que nos permita llegar a ese 60 % de votantes que nunca votan porque no creen en el sistema electoral.

**P:** ¿Cree usted que tienen fallos los acuerdos? ¿Hay algún apartado que se podría haber redactado mejor?

**A.O.:** Necesariamente tienen fallos, sí. Sería muy absurdo decir que eso es perfecto. Además porque es un acuerdo entre dos partes que han estado enfrentadas durante más de 50 años. Y nosotros no nos hemos reconciliado por haber hecho un acuerdo. Para nosotros sigue siendo nuestra misión eliminar a la clase dominante. No estoy hablando de eliminarlos violentamente, de matarlos, sino de hacer que desaparezca en Colombia la gente que ha usurpado la riqueza que nos corresponde a todos, Esa es nuestra misión histórica, antes y después del acuerdo.

Llegar a un acuerdo entre dos partes tan disímiles es muy difícil y seguramente el acuerdo tiene muchos problemas, pero estamos seguros de que es el mejor acuerdo al que podíamos llegar. Si se aplica y se implementa va a garantizar que se empiecen a solucionar las fallas estructurales que hay en Colombia.

**P:** Hay jueces que se están negando a aplicar la Ley de Amnistía. Y hay organizaciones, como Human Rights Watch, que denuncian que la Jurisdicción Especial para la Paz no castigará a altos cargos de las FARC que cometieron crímenes de lesa humanidad.

**A.O.:** Eso es un juego propagandístico que no tiene asiento en la realidad. El acuerdo no promulga impunidad. Tanto es así que pasó los estándares internacionales del Protocolo de Roma, que es muy estricto. La Corte Penal Internacional dio el visto bueno al componente de Justicia del acuerdo, Fue depositado el acuerdo completo en Berna y se dio el visto bueno.

Eso es un juego propagandístico de aquellos que no están de acuerdo con las FARC, pero que tampoco están de acuerdo con la paz. La guerra es un negocio muy lucrativo y hay sectores poderosos que se hicieron ricos a cuenta de la guerra, como Uribe. Uribe no es de las familias tradicionalmente de la clase dominante colombiana. Uribe y su familia se hicieron con grandes extensiones de tierras a cuenta de masacres y destierros, y han mantenido sus privilegios con la guerra. A ellos les interesa retroceder en los acuerdos y mantener un estado de violencia.

**P:** ¿Cómo van a influir los acuerdos en las próximas elecciones? ¿Existe la posibilidad de que aparezca un nuevo gobierno que dé marcha atrás en lo acordado?

**A.O.:** Bueno, el acuerdo necesariamente va a influir. Es lo más importante que ha pasado en la Historia reciente del país. Nosotros estamos trabajando para lograr que el próximo gobierno implemente todos los puntos. Aunque podría ser posible que llegue a la presidencia alguien que no quiera cumplir con lo pactado en La Habana. Hay unas garantías. El acuerdo tiene blindaje jurídico y la ley está aprobada. En este momento, es parte del cuerpo constitucional colombiano. Pero si llegase un gobierno de ese tipo, podría poner muchas trabas y habría dificultades.

**P:** Ha habido desertores. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ha habido alguno en esta zona veredal?

**A.O.:** Tuvimos un caso. Fue un muchacho que se fue de aquí y estaba andando con una banda de atracadores. A ese muchacho lo mataron cuando estaba en un atraco. Lo mató la policía en la carretera central que va de Cali a Popayán. Pero no hemos tenido más casos graves, como en otras zonas, de gente que se asocia con otros grupos. El índice de desertores, en cualquier caso, es mínimo. Tenemos un proceso de formación interno y los guerrilleros están muy motivados por la paz.

**P:** ¿Qué actividades se hacen a diario en el campamento?

**A.O.:** Aquí se hacen las actividades normales que siempre se hacían: cocinar, pagar guardia, siempre tiene que haber seguridad las 24 horas...

**P:** Se les permite tener un mínimo de armas para guardar el campamento...

**A.O.:** Sí, un mínimo. Para la seguridad. Además de eso hemos estado trabajando en la construcción de los campamentos. También estamos en proceso de formación, hoy sábado no, pero hay gente que cursa programas de bachillerato, de educación para adultos... Hay también diplomados. Esta semana se ha acabado un curso con 10 diplomados de la Escuela de Administración Pública. Con la ESAP.

Y por las noches celebramos un espacio interno de estudio. En estos momentos estudiamos las tesis y los documentos preparatorios del Congreso que fundará nuestro partido. El Congreso se va a realizar en la segunda quincena de agosto y nos estamos preparando para esa discusión.

**P:** ¿Cómo es la comunicación con la sede del Mecanismo Tripartito de Monitorización? ¿Es fluida?

**A.O.:** Es diaria. Tenemos 10 delegados y delegadas allí. Es una comunicación permanente. A diario viene una comisión para revisar cómo van las obras, cómo estamos de salud... Todos los días vienen aquí y luego van a las posiciones del Ejército que hay alrededor, porque aquí hay una franja exterior en la que no puede haber ni guerrilla, ni población civil, ni policía. La Fuerza Pública y los miembros del Tripartito vigilan esas posiciones. ¿Ustedes por dónde entraron?

**P:** Hemos subido desde Caldonó.

**A.O.:** Ah, bien. Pues ellos visitan todos los días a los muchachos del Ejército que ustedes han visto por el camino.

**P:** ¿Se siente seguro?

**A.O.:** Pues es parte del acuerdo. Para nosotros la seguridad no es la policía. Ese es un dicho colombiano. (Risas)

**P:** ¿Y qué están haciendo con el tema del desminado? ¿Eso ya lo terminaron?

**A.O.:** Pues mire, compañero, eso de las minas es más mito que realidad. Las minas las hemos utilizado y también lo ha hecho el Ejército. Y hay situaciones de algunos territorios complicados, donde hay que hacer un proceso de descontaminación. Pero, por ejemplo, nosotros aquí formamos la columna *Jacobo Arenas* y la zona donde operábamos es una zona muy poblada. Nosotros nunca usamos minas automáticas. La categoría de minas antipersonal implica minas que se usan contra personas, pero no necesariamente tiene que ser una bomba que cuando la pise uno se detone. Las que nosotros usamos eran de detonación controlada: es decir, usted tenía que accionarla para que se detone.

Aquí, por ejemplo, hay varios minados y todos los tenemos con coordenadas bien ubicadas. Eso ya está en manos de la ONU y se ha empezado ya el proceso de desminado humanitario. Yo le garantizo que los campos minados que tenemos no van a matar a nadie, porque tiene que ir alguien a accionarlos con un mecanismo especial. Aunque yo asumo que, en algunas regiones, esas otras minas se han usado también. Por parte nuestra se creó una fundación formada por guerrilleros que tiene gente en la zona para trabajar en desminado. Se llama Humanicemos DH y se encarga de la descontaminación de los territorios, no sólo de minas, sino también de material de guerra abandonado.

Pero nosotros no somos los únicos que hemos usado minas. El Ejército también las usó. Es que la guerra es la guerra, hermano. La guerra es lo más inhumano que hay y hay

situaciones en las que un niño puede encontrar munición sin detonar y detonarla. Y logra descontaminar el gran campo de combate que es Colombia va a llevarnos muchísimos años.

**P:** Muchas gracias por todo. Por mi parte, nada más. Suerte con el proceso, porque parece que, en cualquier caso, todo está saliendo adelante. Ha habido aplazamientos, pero todo va saliendo.

**A.O.:** Sí, hay dificultades normales, pero todo avanza. Y esperamos que... El obstáculo más difícil son las elecciones del próximo año. Y aunque allí llegue el mismo Uribe, nosotros vamos a seguir trabajando por la implementación. En eso vamos a estar.

## **Entrevista 2: Sally Ojeda, Fernando Burguillo, Johnny Arenas y Alexander Flores (miembros del Mecanismo Tripartito de Verificación y Monitorización de Naciones Unidas en su sede local de Caldoño, Cauca)**

**Cargo/interés:** Sally Ojeda es capitán del Ejército de México y representante del Coordinador de la sede de Caldoño (Álvaro Torres), Fernando Burguillo es delegado español de Naciones Unidas en el Tripartito, Johnny Arenas es guerrillero de FARC-EP y delegado de la organización en el Tripartito y Alexander Flores es Teniente de la Policía Nacional y delegado del Gobierno de Colombia para el Tripartito.

**Lugar de la entrevista:** Sede Local del Mecanismo Tripartito de Monitorización y Verificación (MM&V) en la Vereda de La Venta (Caldoño, Cauca).

**Fecha:** Sábado 15 de julio de 2017.

Descripción: La entrevista se solicita vía e-mail el 7 de julio al capitán de fragata del Ejército de México Gustavo Castillo Lara, que ostenta el cargo de ‘Vocero, Coordinador de Comunicación Estratégica y Coordinador de Articulación en la sociedad civil del MM&V’ en la Misión de Naciones Unidas en Colombia. Se me concede permiso y recibo la acreditación para realizar la entrevista el día 13 de julio, dos días antes de la fecha del

encuentro. La reunión tiene lugar en una de las tiendas del campamento de la sede local de Naciones Unidas. Me reciben allí, además de los cargos citados, Leider Patiño (delegado de FARC-EP para el Tripartito) y Christian Franco (Teniente de la Fuerza Aérea Colombiana y delegado del Gobierno de Colombia en el Tripartito), pero ninguno de los dos interviene durante la conversación. El Tripartito no pone trabas al uso de la grabadora. La entrevista tiene un formato de mesa redonda: el autor de este trabajo va haciendo preguntas y los miembros del MM&V contestan en función de su cargo y su relación con aquello que se pregunta. Sally Ojeda, coordinadora en funciones de la Sede Local, comienza la charla realizando una presentación en Power Point con la que explica el funcionamiento de la Sede.

**Sally Ojeda:** El acuerdo final tiene 6 puntos. El primero: la reforma agraria integral; el segundo: la participación política; el tercer punto (denominado *Fin del conflicto*): relacionado con el desarme y la integración a la vida civil y el cese al fuego; el cuarto, que habla de la solución a las drogas ilícitas; el punto cinco, que habla sobre las víctimas, la reparación y la no repetición, y el punto seis: sobre la implementación, verificación y refrendación del acuerdo final.

En enero de 2016, el Gobierno Nacional, junto con delegados de las FARC-EP, pidió a Naciones Unidas que participara en este proceso de paz. Naciones Unidas participa principalmente en dos puntos importantes: el cese al fuego y la dejación de armas. Durante la realización de este trabajo en la sede, en esta zona del Cauca, no hemos tenido ningún evento de violación de las reglas que rigen el cese al fuego y el fin de las hostilidades. Y la dejación de armas se terminó el 27 de junio de este año. Los miembros de FARC-EP ya entregaron todas sus armas.

Ahora le voy a explicar lo referente al personal que conforma esta sede del Mecanismo Tripartito. Actualmente tenemos a 10 delegados de Gobierno Nacional, tenemos a 9 delegados de FARC-EP, tenemos a 12 observadores internacionales, de los cuales tenemos a dos españoles, una persona de Guatemala, una de Ecuador, dos de Argentina, una de Costa Rica, una de Cuba, dos de Paraguay y una mexicana.

Tenemos también a 18 personas de UNIPEP. UNIPEP es el grupo que se encarga de blindarnos protección. Y tenemos un grupo de atención médica conformado por un médico, una enfermera y dos paramédicos, que son los que se encargan de dar atención

médica en caso de urgencia y también de brindar atención a los campamentos de las FARC, inclusive a la población aledaña a los campamentos.

En este campamento estamos 53 personas en total, 45 varones y 8 mujeres. Este es el mapa de Colombia: aquí se encuentra la Vereda de La Venta, donde tenemos esta sede de Los Monos (Ojeda me señala la zona en una fotografía-satélite).

**Pregunta:** ¿A cuánto queda la zona veredal (ZVTN) donde se encuentran las FARC desde aquí?

**S.O.:** La zona veredal queda a 3 kilómetros de aquí.

**Fernando Burguillo:** ¿En el espacio o en el tiempo? (Risas)

**S.O.:** La parte más larga son 18 kilómetros. Como el camino es un camino “destapado”, más o menos se tardan 30 ó 40 minutos. La parte más corta son unos 3 kilómetros, pero el camino es más abrupto y se tardan también unos 30 ó 35 minutos.

Aquí le enseño la ubicación geográfica (señala a la pantalla): la Sede de Los Monos pertenece a una sede regional, que es la Sede de Popayán, capital del departamento del Cauca, a unos 80 kilómetros de Caldoño.

**P:** ¿Cómo es la comunicación que tienen ustedes con la ZVTN?

**S.O.:** Es diaria. Todos los días hacemos actividades de monitoreo a la ZVTN. Todos los días sale un equipo con componentes de observadores, Gobierno y FARC-EP.

**F.B.:** Hay actividades específicas de la organización con sociedad civil, y ahí se incluye contacto directo con la comunidad o con representantes. Esto se hace todos los días.

**P:** Uno de los problemas que están teniendo es que están accediendo a la ZVTN periodistas, estudiantes y otros miembros de la sociedad civil, ¿prohíbe oficialmente el MM&V el acceso a la ZVTN?

**S.O.:** Según los acuerdos, no puede haber presencia de civiles, periodistas o estudiantes dentro del campamento de las FARC. Sin embargo, la zona veredal puede ser transitable. Transitar por la zona veredal no implica una violación del acuerdo. La violación se comete cuando se ingresa a los campamentos. Allá en los campamentos hay una zona de recepción, de información, que es la zona donde pueden llegar, y se puede establecer ahí contacto, pero sólo hasta esa zona. A los campamentos los acuerdos lo prohíben.

**F.B.:** Hay una cuestión importante y es que nosotros, el Tripartito, no regulamos el tráfico en la zona veredal. El acuerdo se tiene que cumplir y nosotros tenemos que verificar que se cumpla. Y si alguien lo está incumpliendo se reporta, pero nosotros ni aprobamos ni prohibimos el acceso. Todo el mundo debe conocer el acuerdo de paz y lo debe cumplir.

**S.O.:** Bueno, ahora le voy a explicar cómo están conformados los equipos de monitorización. Cada equipo está formado por 2 observadores internacionales, 1 delegado de Gobierno y 1 delegado de FARC-EP. Es una patrulla que sale a monitorear, a verificar, a observar todo lo que pasa en la zona veredal. Todos los días se conforma un equipo distinto para esta actividad.

Sobre todo, nosotros estamos aquí para verificar que se cumplan los compromisos acordados por el Gobierno Nacional y FARC-EP. Los dos puntos más importantes para este Mecanismo son: el cese al fuego de hostilidades bilaterales y verificar que las reglas que rigen ese cese al fuego se cumplen. Otro punto fundamental para nosotros es dirimir las controversias que pueden originarse entre los diferentes miembros del acuerdo. Si hubiese alguna violación al acuerdo tendríamos que constatarlo, registrarlo e informar a la sede regional y, en última instancia, a la sede nacional.

**P:** ¿Se ha producido en algún momento alguna violación de los acuerdos? ¿Aunque sea leve?

**S.O.:** Sí, por ejemplo, como comentábamos antes, ha habido presencia de estudiantes en la ZVTN, y eso constituye una violación leve.

**F.B.:** Hay una categorización de incumplimientos y violaciones, dejando ya el término “violación” para casos muy graves. Incumplimientos, como menciona la capitán, sí ha habido, pero menores. Nunca ha habido un incidente que haya afectado seriamente al desarrollo de la misión.

**S.O.:** Una violación grave podría ser, por ejemplo, que alguna de las partes hubiera entrado en conflicto. Lo cual no ha sucedido.

(Ojeda comienza a enumerar los compromisos a los que han llegado Gobierno Nacional y FARC, y va citando las acciones que cada uno de los organismos tiene prohibido realizar. Luego me muestra imágenes de la visita del presidente Santos y el expresidente francés Hollande a la sede, en enero de 2016. Al acabar, deja paso a Alexander Flores, Teniente de la Policía Nacional, encargado de explicar el apartado de la seguridad)

**Alexander Flores:** La misión de la Fuerza Pública es realizar operaciones conjuntas, con el propósito de ayudar a la Política Interior de Seguridad. Nuestra misión es proporcionar un mecanismo de seguridad tanto al componente de paz que se encuentra en este campamento como a las zonas veredales, así como al personal del Mecanismo Tripartito de Monitorización y Verificación. Se trata de hacer frente a las amenazas que puedan aparecer, así como de todo tipo de cosas que puedan influir en el funcionamiento normal del trabajo que aquí se está haciendo.

El uniforme que llevamos es tipo “desierto” y eso nos diferencia del personal del Ejército Nacional. Nuestra disposición en el terreno es de la siguiente manera: hacemos una especie de cerco alrededor de la zona de seguridad. La zona de seguridad es 1 km a partir de la finalización de la zona veredal. Es un personal que protege la zona y que impide cualquier tipo de violación de los acuerdos. Como medida de precaución, además, el Ejército está manejando 1 km adicional.

También está UNIPEP, que ofrece seguridad concretamente al Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Y tenemos otro personal, que también está por fuera de la zona de seguridad que comentaba antes, que es el personal de carabineros, que también se encarga de prestar seguridad y de estar pendiente de todo lo que pueda ocurrir en la zona.

(Flores enumera todos los requisitos de seguridad que están obligados a cumplir tanto el Gobierno Nacional como las FARC. Me muestra también imágenes del perímetro que establece la Fuerza Pública, de la ZVTN, del campamento San Antonio...)

**P:** ¿En qué situación se encuentra la construcción de los campamentos? Los últimos informes de ONU dicen que aparecen rezagados frente a la construcción de otros campamentos en otras zonas veredales...

**F.B.:** En esta zona hay dos campamentos: San Antonio y Santa Rosa. San Antonio, que ya está habitado por una parte importante de FARC-EP, se encuentra ya en la fase última de detalle. Santa Rosa sí que lleva un poco de retraso, pero está avanzando a buen ritmo, y en la última evaluación que hicimos estaba ya en un 35-40 % de avance. Los integrantes de FARC-EP estaban viviendo en un campamento provisional cercano al campamento de San Antonio. A medida que se ha ido acabando el trabajo en el campamento San Antonio, han empezado a moverse al campamento nuevo. Una vez que Santa Rosa esté finalizado, se les distribuirá entre los dos campamentos.

(Burguillo me muestra más imágenes, ahora relativas a la segunda misión de ONU)

**F.B.:** Esta es la segunda misión ONU. Se aprobó hace cinco días. El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2366, que es la tercera resolución ONU relativa al proceso de paz, que autoriza a una segunda misión con un objetivo muy específico, y que ya se encuentra fuera de lo que era el Mecanismo de Monitorización y Verificación. Desde este momento, la fase de cese al fuego de hostilidades se encuentra concluida, y a partir del 26 de septiembre la segunda misión tendría el objetivo de verificar la implementación, por parte de las dos partes, de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final, que son los relativos a la reincorporación política, económica y social de FARC y la implementación de garantías de seguridad personal y colectiva, no sólo para FARC, sino también para las comunidades en las áreas afectadas. Yo creo que este es un punto importante, no se trata sólo de asegurar que se cumplan los compromisos de seguridad con FARC-EP, sino también con las comunidades y los líderes comunitarios. En este caso específico de Los Monos, por ejemplo, es la única zona veredal que está en un resguardo indígena. Entonces se presta mucha atención a toda la parte de liderazgo indígena.

La segunda misión también va a seguir muy de cerca todo el planteamiento de reintegración de FARC. Por una parte la reintegración política y asegurar que pueden hacer su campaña de cara a unas elecciones. También asegurar su integración económica, que el proyecto cooperativo de FARC, que se llama ECOMÚN, que aparece también en el acuerdo de paz en el punto 3.2, se lleve a cabo.

Hay un periodo transitorio, que es en el que estamos ahora, en el que el Consejo de Seguridad le pide al Representante Especial del Secretario General que en 45 días presente un detalle mayor de la misión, en términos de alcance y en términos de personal, que coincide si te fijas con el 26 de septiembre, para que ya antes de que termine esta primera misión el Consejo de Seguridad apruebe el despliegue necesario. Todas las misiones tienen un número máximo de personal que se les asigna y esta misión no va a ser distinta.

**P:** Entonces, de alguna manera, la primera y la segunda misión se solapan...

**F.B.:** Sí, en el caso particular del componente internacional sí se solapan. Ahora mismo el componente internacional está participando en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y en labores de dejación de armas. En este punto ya se incluye la devolución de todas las armas que FARC ha dejado, que se trasladan a Bogotá, y por otra parte

trabajos en las caletas, en la destrucción de caletas. Y al mismo tiempo, el mismo personal va a trabajar en asegurar que toda la parte que tiene que ver con reintegración política y social de FARC y de las comunidades, arranca conforme a lo que está establecido en el acuerdo.

**P:** Pero el 1 de agosto las ZVTN pasan a convertirse en Zonas de Capacitación, ¿cuál va a ser el cambio que se va a producir?

**F.B.:** El Tripartito, a día de hoy, tiene su duración hasta septiembre. Evidentemente entre el 1 de agosto y el 26 de septiembre el Mecanismo va a seguir haciendo el mismo trabajo, sea ZVTN o Zona de Capacitación. La diferencia sustancial está en que, a partir del 1 de agosto, se retira todo el dispositivo de seguridad que hay en torno a la zona veredal, por lo que la Fuerza Pública puede ingresar y las FARC pueden salir de la zona con total libertad. Ya no hay esa limitación física que había antes y comienza un segundo momento.

**P:** ¿En qué momento podrán las FARC empezar a constituirse como agrupación política?

**Johnny Arenas:** El tiempo definido como tal no lo tenemos, porque esto ha tenido etapas en las que nosotros hemos fechado algo y al final no se ha cumplido. Por ejemplo, la dejación de armas, que tenía una fecha que era el 1 de junio. En este caso, para empezar a ejercer la política, no se ha programado aún un acto protocolario. Sin embargo, el Gobierno Nacional nos autoriza a 10 miembros de FARC a salir a algunas veredas a socializar y a realizar pedagogía de paz, y ahí nosotros ya estamos demostrando movimiento.

**P:** Ahora que ustedes han dejado las armas, ¿Cuál es el riesgo que tienen de sufrir una agresión? ¿Temen por su integridad?

**J.A.:** Claro, el riesgo lo seguimos corriendo, igual que cuando estábamos en el ámbito militar. Desde el primer momento que entramos en las FARC, sabíamos del riesgo para la integridad física de uno. Y más ahora que vamos a ejercer política sin armas. En este momento, la única seguridad con la que contamos es la que va a blindar el Gobierno Nacional por medio de la capacitación que está organizando. Una parte va a ser personal nuestro, que ya se está capacitando con la Unidad Nacional de Protección y proporcionar seguridad a las personas que van a ejercer ese tipo de actividades políticas.

Pero el riesgo lo vamos a tener siempre, porque nosotros tenemos muchos enemigos. En Colombia hay acuerdos de paz, pero hay terceras personas que no están conformes con todo esto y van queriendo dañar ese proceso, incluso asesinando a alguno de nuestros líderes.

**P:** Ya ha habido, desde que comenzaron las negociaciones, asesinatos de miembros de FARC...

**J.A.:** Sí, claro. Ha pasado con compañeros que han estado presos, han salido de las cárceles y se han presentado en las zonas veredales a las que ellos corresponden. Entonces al acudir a ver a sus familias en zonas cercanas, han sido asesinados. De estos tenemos tres casos ya. Han ido a sus casos y allá los han matado.

**P:** ¿Qué grupos son los autores de estas muertes? ¿Paramilitares?

**J.A.:** No sabemos. No tenemos identificados a esta o a otra organización. Nadie se pronuncia sobre eso.

**P:** ¿Ha habido aquí en Los Monos alguna interacción con alguno de estos grupos? ¿Alguna agresión? ¿Alguna amenaza?

**J.A.:** No, aquí en Los Monos no.

**P:** Pero ha habido zonas veredales en las que sí han tenido problemas con estos grupos...

**J.A.:** Sí, sobre todo en los casos que le digo: cuando en una ZVTN se ha pedido permiso para ir a ver a la familia y en el trayecto a su pueblo los han agredido.

**P:** ¿Qué estructura tienen estos grupos? ¿Qué grupos son estos? ¿Águilas Negras? ¿Clan del Golfo?

(Arenas comienza a contestar la pregunta, pero de repente el Teniente Flores le interrumpe)

**A.F.:** Pues la verdad es que no estamos autorizados a referirnos a esos temas. En el documento que nos envió la Conducción Nacional dice que usted viene aquí a recabar información relativa al proceso de dejación de armas y a la segunda misión ONU.

(Flores saca de su bolsillo el teléfono móvil, busca el documento y comienza a leer lo que allí está escrito. Es cierto, el documento que me acredita a realizar esta entrevista limita mis preguntas a cinco o seis cuestiones concretas)

**P:** Bien, no hay problema. Otra pregunta: ¿Hay fricciones entre los miembros del Tripartito? ¿O ha trasladado alguna queja algún miembro de FARC hacia Gobierno, o Gobierno a FARC, o FARC a observadores de Naciones Unidas...?

**S.O.:** Pues en lo particular, yo cuando llegue aquí desde el principio vi que ellos han interactuado, se han relacionado. Yo no veo conflicto aquí entre Gobierno y FARC. Cada uno puede contar su experiencia, pero yo veo que aquí practican fútbol, platican entre ellos... Antes vivíamos en una carpa todos juntos. Pegaditos. Ahorita ya no dormimos en la misma carpa pero seguimos compartiendo. Aquí hay diferencias de opiniones, como en cualquier otro grupo social, pero algo que vaya más allá yo nunca lo he visto. No sé si alguien de Gobierno o de FARC quiere decir algo...

**J.A.:** Claro, para todo el mundo la intriga era esa. Había un conflicto pero ninguno nos conocíamos personalmente. Nosotros estábamos en la parte rural y ellos en la parte urbana. Nunca tratábamos unos con otros. Pero ahora las cosas han cambiado. Todo se ve diferente. Por mi parte ha habido una liberación. Ha sido una experiencia bien elegante y esa experiencia algunos todavía no la han tenido, porque muchos compañeros continúan en las zonas veredales. Y tampoco ha tenido la experiencia la mayoría del personal de la Fuerza Pública. Y ha sido una experiencia positiva.

**P:** ¿Cuál ha sido el motivo de la demora del proceso de dejación de armas? ¿Se demorarán también los plazos iniciales para la extracción de caletas?

**S.O.:** Yo creo que la dificultad con las caletas tiene que ver con la constitución geográfica del país, que es muy extenso y tiene zonas muy selváticas. Eso es lo que ha dificultado esas tareas. Sin embargo, se está trabajando bien.

**P:** ¿Cómo se puede tener la seguridad de que ustedes, las FARC, están siendo totalmente sinceros con lo referente a la ubicación de las caletas y en los bienes que ustedes declaran?

**J.A.:** Para eso hay una comisión creada por las mismas FARC. Eso está acordado entre Gobierno y FARC. La comisión es la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final) y la sede está en Bogotá. Ellos están recolectando ese censo a nivel nacional. El problema es que había personas que eran las únicas que conocían la ubicación de algunas caletas, y esas personas ya no están. Ahora estamos nosotros, pero antes había otras personas en las FARC. Nosotros somos una nueva generación. Entonces no podemos asegurar la ubicación del 100 % de las caletas,

pero no es que nosotros no queramos, sino que la persona que conocía las coordenadas ya no está. Pero en nosotros está toda la voluntad de localizarlas.

**P:** ¿Qué se va a hacer con los bienes declarados por las FARC?

**F.B.:** Inicialmente va a la reparación de las víctimas. Hay un concepto que se llama “Extinción de dominio”: FARC entrega sus bienes, en función a un inventario que han elaborado para el Mecanismo, y lo que plantea el acuerdo es que se dedique a la reparación de víctimas. Irá para toda la responsabilidad patrimonial que pudiera surgir con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

**P:** La comunidad indígena cedió tierras para el establecimiento de las FARC en estos campamentos. Quería saber si están cursando alguna queja, o si las expectativas que tenían eran otras.

**F.B.:** Lo que se hizo primero con los resguardos indígenas fue una consulta previa. Antes de tomar la decisión de instalar los campamentos se habló con los 6 resguardos indígenas del municipio de Caldon. Ellos dieron su aceptación. Hasta ahora todo está funcionando y hay elementos que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el tema de víveres frescos. En vez de traerlos de fuera, se están comprando dentro de la zona a productores locales, lo cual genera un beneficio para los resguardos indígenas. Es un proceso humano y ahora, con dos campamentos nuevos, van a tener que aprender a convivir. A día de hoy no ha habido ningún incidente grave entre FARC y los resguardos indígenas. De hecho, FARC tiene contacto directo con los gobernadores de los resguardos indígenas y hasta donde conocemos la relación es cordial. Obviamente hay que tener en cuenta esa particularidad respecto a otras zonas veredales: aquí hay una autoridad indígena. Eso requiere una articulación mayor, no sólo con la alcaldía, sino también con los cabildos indígenas.

**P:** El acuerdo incluye también un plan de zonificación ambiental...

**F.B.:** El acuerdo incluye elementos de recuperación ambiental, pero todavía estamos en un punto anterior a que se desarrolle ese apartado. Pero sí, se va a trabajar en la mitigación del impacto que suponen estos asentamientos.

**Entrevista 3: Alejandro Rubiella, Javier Benito y Gerardo Tovar (observadores españoles de Naciones Unidas en la misión de Colombia)**

**Cargo/interés:** El coronel Alejandro Rubiella es el jefe del contingente de observadores españoles de Naciones Unidas en Colombia, Javier Benito es jefe de la sede local del MM&V en El Jordán (departamento de Tolima) y Gerardo Tovar es jefe de la sede local del MM&V en El Yarí (departamento de Meta).

**Lugar de la entrevista:** Residencia del coronel Rubiella en Bogotá.

**Fecha:** Domingo 16 de julio de 2017.

Descripción: El coronel Rubiella da el visto bueno a una entrevista personal en una respuesta a un e-mail enviado desde Madrid el 9 de junio de 2017. El primer encuentro con Rubiella se produce el 5 de julio en la Sede Nacional del MM&V de Naciones Unidas en Bogotá. En esa reunión solicito a Rubiella realizar la entrevista después de mi visita a Caldon, con objeto de poder contrastar posteriormente ese trabajo sobre el terreno con el jefe de contingente. Rubiella accede. Días después recibo una llamada de Rubiella en la que me ofrece la posibilidad de entrevistar también a Benito y Tovar, jefes de sedes locales en diferentes departamentos, y sugiere un encuentro en su residencia de Bogotá el 16 de julio, el mismo día que el autor de este trabajo regresa de Cali a Bogotá. La entrevista se desarrolla a modo de mesa redonda y se registra con grabadora. La primera parte de la entrevista aborda varios apartados del proceso de paz. La última parte se centra en la segunda misión de Naciones Unidas en Colombia.

**Pregunta:** Yo quería empezar preguntándoles por el desarrollo de la primera misión ONU, la relativa al proceso de dejación de armas, ¿en qué estado se encuentra el procedimiento de extracción de caletas?

**Javier Benito:** Bien. Yo le voy a hablar de mi sede, porque el desarrollo de la misión va en función de las sedes. Mi sede ahora mismo está en operación de caletas de 9 días en el Valle del Cauca. Tienen que extraer 32 caletas. Mi sede tiene 153 caletas en total. Están en 3 departamentos: Tolima, Huila y Valle del Cauca. Han empezado en Valle del Cauca,

que es el que más lejos está. Allí tienen previsto hacer 32 estos 9 días. Lo demás está todo hecho: la dejación de armas se cumplió con lo que estaba previsto, el 100 % salvo el armamento que se quedan por seguridad, la destrucción del material inestable del campamento...

**P:** Se está solapando la primera misión con la segunda...

**Alejandro Rubiella:** Teóricamente sí. Se ha ordenado que se constituyan unos equipos mixtos, un policía, un militar y dos civiles en cada sede local, que esos van a hacer reintegración. Estos equipos están constituidos, pero trabajan si no hay caletas que hacer. La prioridad son las caletas. Si en una sede se acaba con las caletas, entonces se empieza con la reintegración de los guerrilleros. Esto viene marcado por la resolución del Consejo de Seguridad sobre la segunda misión, para que este cometido sea suave.

Nosotros, de todos modos, ahora estamos muy recargados de trabajo. Hay sedes que tienen 150 o más caletas, pero hay sedes que tienen 4 ó 5. Es decir, hay sedes que ya han terminado prácticamente con las caletas, pero si hay que hacer 100 ó 150 caletas, nosotros aún no estamos para el proceso de reintegración.

**Gerardo Tovar:** La prioridad ahora es acabar con las caletas, porque hay un tiempo que han marcado y no estamos seguros de que se pueda cumplir.

**A.R.:** Hay que tener en cuenta que no se han extraído más caletas porque en unos casos se tenía información, pero en otros no. Dijeron que había 948 caletas, pero a fecha de hoy solo tenemos información de 600. También se demoran los plazos por cuestiones económicas: extraer caletas no es fácil.

**J.B.:** Hay caletas a las que hay que ir 6 horas en coche, luego 8 horas en burro y luego 3 horas a pie.

**G.T.:** Luego ha habido muchas pausas también. Ha habido momentos en que FARC ha dicho: “Hasta que no se me conceda esto, yo no avanzo nada en lo otro”. El Gobierno ha tardado mucho en todo el tema logístico y en la JEP. Entonces ahí FARC ha dicho: “Hasta que Gobierno no cumpla, yo retengo aquí toda la información”.

**J.B.:** La dejación de armas ha sido una moneda de cambio.

**G.T.:** Hay sedes que, debido a la relación con el comandante de FARC, han avanzado mucho más que otras. Las que había en Villavicencio, en Meta, estaban todas fatal. La relación era muy mala entre Gobierno, FARC y Tripartito.

**P:** Que se hayan retrasado los plazos, ¿es sólo debido a esto?

**J.B.:** Es todo moneda de cambio. Cualquier avance que no se produzca en los términos que FARC creen, siempre paraliza la dejación de armas. Ellos están muy preocupados por la seguridad y los presos. La construcción de los campamentos no es ahora mismo su prioridad. Pero la Justicia, como en cualquier país, funciona a su ritmo. Por mucho que diga el presidente, los jueces son independientes, entonces eso lleva un proceso lento.

**P:** Sí, y está habiendo incluso algún juez que se está negando a aplicar la Ley de Amnistía...

**A.R.:** Lo que hizo Santos es saltarse a los jueces y aplicar directamente. No deja de ser una cacicada. Están saliendo presos, pero no han salido todos. Ellos son muy solidarios con su gente.

**G.T.:** Luego se sabía que hay situaciones especiales de presos, relacionadas con delitos comunes recientes, que ellos quieren meter en el mismo saco del conflicto. Entonces, claro, es un juez el que tiene que dirimir esto. ¿Hay mil y pico presos que tienen que salir tal día? Pues no. Cada caso es individual y lo tiene que valor un juez. Y eso va a llevar mucho tiempo. Con carácter general, va a haber una amnistía, pero ahí no entran delitos comunes.

**A.R.:** Igual han matado a uno pero para matar a ese han robado un coche o han reventado una puerta, o lo que sea...

(Rubiella me enseña en el ordenador una foto de guerrilleros en el municipio de La Guajira recibiendo a un convoy de presos liberados. “Los reciben como héroes”, me dice. “Para ellos los presos son importantísimos. Pasa lo mismo que en España con ETA”, concluye.)

**J.B.:** Los meses pasan y ellos se tienen que presentar a las elecciones. Tienen que hacer su Congreso Fundacional y eso los apremia.

**A.R.:** En ese sentido será un partido al estilo de Podemos. Ellos quieren crear un partido nuevo que no se llamará FARC, seguramente. Y juegan a contrarreloj, porque a ellos les gustaría presentarse en las próximas elecciones.

**P:** Y aún no tienen un plazo fijado para la celebración de ese Congreso...

**J.B.:** Claro. Ellos ya lo retrasaron. Teóricamente tenía que haber sido en abril, creo. Lo retrasaron a agosto, pero mucho más no pueden retrasarlo porque las elecciones son el año que viene.

**G.T.:** Tienen que hacer su campaña y eso lleva tiempo.

**P:** ¿Hay ya movimiento en las zonas veredales en ese sentido? Porque se supone que hasta el 1 de agosto no pueden realizar actividades políticas.

**J.B.:** Sí, en La Elvira, por ejemplo, ya están haciendo cosas...

(Rubiella me enseña un spot para televisión de las FARC en el ordenador, mientras me dice: “El lema suyo es *Paz con Justicia Social*. Mira lo que están haciendo”. El anuncio muestra a un recién nacido en una incubadora, conectado a una máquina, mientras se oyen de fondo los gritos de su madre llorando, quejándose porque “no lo operaron de urgencia”. “¡Qué injusticia más grande, dios mío!”, grita la madre. El anuncio es duro, pero apela al morbo de forma explícita.)

**P:** Juega mucho con el morbo. En España ese anuncio no funcionaría. Cantaría demasiado.

**G.T.:** Claro, pero aquí no. Aquí funciona.

**A.R.:** Esto es muy importante. Ellos lo que quieren es ganar las elecciones, bueno, no ganarán las elecciones, pero ellos tienen garantizados 10 curules, que son 10 escaños en las elecciones. Y yo siempre digo lo mismo: si el día de las elecciones consiguen 11, quiere decir que los 10 curules no se los han regalado. Pero si se quedan en 10, la gente dirá: “No os ha votado ni dios”.

**P:** ¿Qué creen ustedes que va a pasar con las FARC en las elecciones?

**A.R.:** Es muy difícil. En Colombia, si uno ve estadísticas, las FARC están muy desprestigiadas, excepto en zonas determinadas. Aquí el 70-80 % de la gente no los quiere ni ver. Nosotros, hasta hace un mes, no pudimos alquilar la sede regional de Medellín,

porque nadie nos la quería alquilar. Sabían que iba a ir allí el representante de las FARC del MM&V y no querían. Ahora, si tú hablas con alguien de Caquetá, por ejemplo, la cosa cambia, porque todos los guerrilleros son de ahí.

**J.B.:** Donde estoy yo es en Marquetalia. Allí llevan 53 años. Aquello es su territorio. Todo el mundo es *fariano*.

**G.T.:** En El Yarí igual. Salen los guerrilleros del campamento y saludan a todo el mundo como conocidos, familiares, etc.

**P:** Allí la incidencia de los grupos que están ocupando el territorio dejado por las FARC es mínima entonces...

**G.T.:** No. Lo que pasa es que no sabemos muy bien la cifra exacta de disidentes de FARC. Se sabe los que se han reintegrado, pero no los que no lo han hecho.

**J.B.:** En mi vereda no ha habido ningún altercado con grupos. Son FARC, FARC y FARC.

**G.T.:** En El Yarí sí ha habido muchos desertores.

**A.R.:** A nivel nacional sí están controlados los disidentes. Son 385, algo así. Hay que diferenciar entre los que han expulsado ellos y los que han desertado, que son más o menos un 5 %. Un 5 % de los 7.000 guerrilleros, más los milicianos, que son unos 2.000. Que no está mal. Luego están los que se fueron antes. Por ejemplo, los que secuestraron al funcionario de ONU en Guaviare. Y estos han tenido secuestrado a aquel para que no los bombardeen. Al final lo han soltado.

**P:** ¿Y estos desertores qué están haciendo? ¿Se están uniendo a otros grupos? ¿Al ELN?

**A.R.:** No, se están yendo a su casa.

**J.B.:** Lo que pasa es que tienen muy pocas salidas. Normalmente son gente que tiene órdenes de captura y no tienen papeles. En el caso de mi vereda, la mayoría se han acogido al programa de reincorporación del Ejército. Ellos desertaban y se arrimaban al Ejército, porque un tío que está en la clandestinidad está prácticamente muerto, porque no tiene manera de hacerse legal, a no ser que sea con el proceso de paz o con el programa de reincorporación del Ejército.

En mi vereda ha habido 13 desertores, de los cuales 8 eran niñas menores de 23 años. Niñas desencantadas, desilusionadas, incluso con problemas de desamor y cosas así. O sea que en este caso no era una cuestión de principios ni de ideologías.

**P:** Antes hablábamos del aspecto político, ¿se van a centrar fundamentalmente las FARC en la cuestión agraria? ¿O incluirán firmemente en su programa otras problemáticas?

**A.R.:** El otro día salió una estadística muy interesante que hablaba del perfil de los miembros de las FARC. Se hizo una encuesta al personal de los campamentos y salió que la mayoría provienen de la agricultura y que la mayoría quieren seguir en la agricultura. Pero yo hablo mucho con ellos y son conscientes de que necesitan presencia en las ciudades. El anuncio que te he enseñado antes, por ejemplo, va dirigido a la gente de estrato 1 y estrato 2 de las grandes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena...

**J.B.:** Ten en cuenta que el 50 % de la población vive en Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá.

**A.R.:** Claro. Entonces ellos no quieren ser un partido agrario. Luego en la encuesta se ve que los líderes alcanzan el liderazgo porque realmente tienen ese liderazgo, pero la mayoría de los guerrilleros de base poco pueden contribuir al partido, porque saben leer y escribir, pero su formación no va mucho más allá.

**G.T.:** La estructura de partido la componen los comandantes y los cabecillas. El resto de guerrilleros no tienen un oficio, porque han estado toda su vida en guerra. Esta gente va a tener que buscarse un futuro y lo más seguro es que su salida esté en el campo.

**A.R.:** Ahí viene el siguiente problema. Los guerrilleros están en los campamentos, donde tú estuviste ayer. Entonces esos campamentos parece que se construyen con espíritu de permanencia. Ellos quieren que esos campamentos sean un proyecto de futuro y para ello quieren constituir unas cooperativas. Esto es muy bonito de decir, pero hay una contradicción: todos quieren ser agricultores, pero allí no tienen tierras. Además, están asentados en una propiedad alquilada. Puede que el Gobierno compre esos terrenos algún día, pero de momento el Gobierno no los ha comprado. Y luego los campamentos están en unos sitios inaccesibles: tú lo has visto, has estado allí, si tú pones allí una fábrica, ¿cómo vas a hacer para sacar los productos de allí? La distribución por esos caminos va a ser muy compleja. ¿No será más lógico tener la fábrica en Caldon? ¿O al lado de la carretera nacional de Cali a Popayán? Entonces, ¿de qué va a vivir esta gente? Ahora van

a cobrar como el paro durante 2 años y un dinero para que puedan implementar procesos productivos.

**P:** Pero, entonces, si les dan dinero para procesos productivos, el acuerdo sí permite que ellos puedan estar cultivando ahí...

**A.R.:** ¿En qué tierras? No, no tienen tierras.

**P:** Si no tienen esos medios, ¿entonces para qué se conceden 8 millones de pesos a cada uno para proyectos?

**A.R.:** Claro, porque no tiene por qué ser ahí. Además, en vez de cultivar, pueden ponerse a hacer pantalones o zapatos, por ejemplo.

**J.B.:** También el Gobierno en el capítulo 1 pone 11 millones de hectáreas, propiedad de Colombia, precisamente para los campesinos sin tierra. Pero esos 11 millones pueden estar en cualquier sitio.

**G.T.:** El asunto de las tierras es complicado. Hay muchos propietarios a los que FARC robó tierras y los expulsaron de allí o los mataron directamente. Y FARC puso allí a gente de su entorno para que explotara esas tierras. A mi sede han venido dos de esos expropietarios para preguntar qué pasaba con sus tierras, que cuándo se las iban a devolver.

**J.B.:** Claro, pero es muy complicado porque el que lleva ya años allí y ha hecho mejoras, también tiene derecho a la tierra. El tema de víctimas y el de la Agencia de Restitución de Tierras son los puntos más críticos de los acuerdos.

**G.T.:** Es un *chicharrón* que el Gobierno no sabe cómo solucionar.

**P:** ¿Qué es un *chicharrón*?

**J.B.:** Un marrón. (Risas)

**G.T.:** FARC presume mucho de haber desarrollado las zonas abandonadas por el Estado. Hicieron caminos, puentes... Todo eso a base de impuestos cobrados a propietarios, las famosas *vacunas*. Son extorsiones, pero ellos lo llaman impuestos. Su punto de vista es que se vieron obligados a eso porque allí el Gobierno no intervenía.

**J.B.:** Es complicado. Pero el acuerdo es un paso importante, porque de momento no se dan plomo.

**P:** ¿Qué fallos le ven al acuerdo?

**J.B.:** Yo ninguno. Si se implementa, ninguno.

**G.T.:** El problema está en el dinero. ¿Quién va a pagar todo esto?

**J.B.:** Hombre, el acuerdo es a 30 años. Se supone que la dotación presupuestaria debería estar.

**A.R.:** El Gobierno supone que, como habrá más paz, entonces se producirá un desarrollo económico. Sin embargo, Colombia ahora está en una pequeña crisis económica. Ahora está en crecimiento 0, prácticamente.

**J.B.:** Pero los acuerdos, en la letra, son buenos.

**P:** Está habiendo polémica en lo relativo a la JEP. Hay organizaciones, como HRW, que se están quejando porque dicen que altos cargos de las FARC no van a cumplir condena por delitos de lesa humanidad.

**G.T.:** Hay gente que está a favor y gente que está en contra, pero la amnistía está aprobada. Poca gente en Colombia se escapa de haber tenido un muerto en su familia o, por lo menos, un conocido.

**A.R.:** Perdonad que os corte. Estoy mirando el PIB de Colombia y en el año 2011, por ejemplo, creció el 6'8 %. Ahora crece alrededor del 2 %.

**G.T.:** Claro, pero con la inflación que tiene Colombia, lo del crecimiento importa menos. Pero para valorar esto ya están los economistas.

**J.B.:** Además, los acuerdos no solamente deben ser implementados con el dinero del Estado, sino también con dinero que tiene que surgir de las propias FARC.

**P:** ¿Todo el dinero proveniente de los bienes de las FARC irá en su totalidad a la reparación de las víctimas?

**J.B.:** 100 % para acuerdos. Fundamentalmente víctimas y restitución de tierras.

**P:** ¿Cómo se tiene seguridad de que el listado de bienes redactado por las FARC es sincero? ¿O con el de las caletas?

**J.B.:** En mi zona yo no tengo ninguna sospecha de que ellos hayan ocultado caletas. Ellos han estado muy preocupados con este tema. Vamos a ver, si se muere el caletero, con él muere la caleta. Eso no se puede evitar.

**G.T.:** Es una cuestión de voluntad. Ellos voluntariamente han suscrito el acuerdo. A mí, personalmente, lo que no me gusta es que el Gobierno haya renunciado a conocer todo el tema del armamento. Si es un acuerdo transparente, por qué no tiene acceso a todo esto. Aunque es un tema gubernamental: yo entiendo que para llegar a un acuerdo hay que renunciar a muchas cosas.

**J.B.:** En cualquier caso, llevaban 53 años dándose plomo de verdad. Hay que atraer a todos aquellos contrarios a los acuerdos. Y ahí tienen que actuar todos los partidos políticos, aunque Uribe no esté por la labor. Uribe se equivoca.

**P:** ¿Cómo influirán los acuerdos en las elecciones?

**G.T.:** La sociedad está polarizada, pero como en todos los países. ¿En España cuántas elecciones hemos necesitado para formar gobierno? El Brexit 50 %, Estados Unidos, las elecciones, al 50 %...

**A.R.:** Votó muy poca gente, de todos modos. Aquí el sistema está hecho para que la gente pobre no vote.

**P:** La participación fue del 37 %, pero aquí me decían que eso es lo normal...

**A.R.:** Está pensado para que los pobres no voten. Hay que registrarse antes. Las FARC siempre han pedido que se modifique el sistema electoral. Para ellos un ejemplo es el sistema electoral de Ecuador. Allí el voto es obligatorio. Aquí pasa lo contrario: para votar hay que registrarse. Aquí hay mucha gente desplazada y eso es un problema. Y luego hay gente que no ha votado nunca o no sabe cómo se vota. Y luego la gente con mayor formación sí que lo tiene bastante claro, pero en las zonas donde están ellos (las FARC), que son favorables a las FARC, allí no vota nadie.

**P:** En cualquier caso, si hubiese ganado el *sí* por la mínima estaríamos en la misma situación.

**G.T.:** Tenía que haberse estipulado un margen superior: es *sí* o es *no* consiguiendo un porcentaje suficiente. Una cosa tan importante no puede decidirse por un puñadito de votos.

**J.B.:** Las élites viven en Cali, en Bogotá, en Medellín y en Cartagena. Allí se deciden las cosas. El sector rural está abandonado y la política se mide allí. Aquí hace falta una reforma agraria, independientemente de que sea un problema de FARC o no. En Europa esa reforma se hizo en el siglo XIX. En ese sentido, los acuerdos acometen esa reforma por primera vez.

**P:** ¿Qué papel van a jugar las FARC en el PNIS? ¿Será un papel activo?

**J.B.:** Deberían tenerlo. Ellos son los primeros que abogaron por la erradicación de cultivos ilícitos y la sustitución. Es el capítulo 4 y ahí juega un papel activo FARC.

**G.T.:** Yo he hablado con ellos de esto y ellos lo consideran de una manera totalmente diferente a nosotros. Para ellos esta es la única actividad que da beneficios a los agricultores. Ellos plantean que eso es lo que da de vivir al campesino. Yo he discutido mucho con ellos.

**P:** Aquí en Colombia el índice de consumo de cocaína no es muy grande.

**A.R.:** Sí, pero está incrementándose. Aquí hay un problema con el bazuco. Eso genera una dependencia casi inmediata. Los consumidores parecen zombis. Hay muchos: sobre todo en el extrarradio de las grandes ciudades.

**J.B.:** Bueno, el capítulo 4 obliga a FARC a una implicación en ese tema.

**P:** Cultivar café o yuca va a ser siempre infinitamente menos rentable que cultivar coca. Por muchos subsidios que ofrezca el Gobierno, ¿cómo se convence a un campesino para que deje de sembrar coca?

**J.B.:** El acuerdo es muy avanzado en ese sentido. Trata al campesino como alguien que tiene que ganarse la vida y al que consume lo trata como a un enfermo, que debe ser tratado por la Seguridad Social. El programa intenta combatir el narcotráfico. Si tú consigues acabar con el tráfico, entonces el campesino dejará de cultivar. Y hay proyectos relacionados con el biocombustible muy interesantes.

Y luego hay que hablar de concienciación también. Es verdad que se ha creado una sociedad de campesinado que gana plata sin prácticamente hacer nada y es complicado, porque combatir la vaguería es jodido. Pero hay que hacer programas de educación y concienciación. No van a dar resultado mañana pero hay que apostar por eso.

**G.T.:** Es complicado, porque los narcotraficantes tienen mucho poder para convencer a cualquiera. En Afganistán, por ejemplo, obligaban a los cultivadores a sembrar, y si no los mataban. Ya no es el beneficio del agricultor, sino la presión del narcotraficante. De momento, basta con que les den 3 millones de pesos todos los meses para que cultiven eso. Si cultivan yuca o plátano, además lo tienen que transportar por caminos difícilísimos. Con la coca se evitan eso.

**J.B.:** Al final no es eso. Al final es que si el Estado no fuera un Estado que no llega a todos los rincones de Colombia, si la policía no fuese una policía corrupta que llega a todos los rincones de Colombia, si la política no fuera una política corrupta...

**A.R.:** Si es que las plantaciones se ven por todo el interior del país. Además el proceso de recolección de coca es muy sencillo: quitas las hojas y luego vuelven a crecer. No hay que hacer nada más. La planta se muere cuando lleva varios años creciendo.

**P:** ¿Y también es sencilla de plantar?

**A.R.:** Claro. Cualquier terreno lo puedes aprovechar. Es una planta muy dura, que aguanta cualquier condición. Es un problema de corrupción institucional. Es que los campos se ven.

**P:** Uno, en pleno siglo XXI, ya no se puede excusar en la geografía y difícil accesibilidad del país. Hay sistemas informáticos que permiten identificar esos cultivos.

**J.B.:** Por eso es un problema de corrupción. Si tú implementas un programa de sustitución y los cultivadores no se acogen a ese programa, entonces deberías encerrarlos. Pero aquí un cultivador sigue produciendo y no pasa nada. La gente se pregunta: ¿Cómo va un campesino a dejar de cultivar una cosa que vale 1.000 para cultivar otra que vale 100? Pues muy sencillo: porque esa es la ley. Pero es que el Estado mira para otro lado. Lo que hay que hacer es que el Estado llegue a toda la población.

**A.R.:** Por ejemplo, en la zona en la que tú estuviste ayer, en Caldon, en esas montañas hay zonas donde el Estado no entraba hasta hace poco. Hay que aprender de la Historia: en España, por ejemplo, se creó la Guardia Civil para luchar contra el bandolerismo. Un sistema serio de fuerzas de seguridad para actuar en un terreno concreto. Pues eso es lo que falta aquí en Colombia. Y luego en esa zona también tiene potestad la jurisdicción indígena. La Guardia Indígena castiga con su propia ley a los delincuentes con azotes

públicos. Y el Gobierno permite eso. La Constitución, en ese sentido, dificulta el control del Estado.

Luego también te dicen que la policía tiene 200.000 hombres, pero muchos son deservicio militar, los llaman bachilleres. Al final el Estado colombiano está creado sobre una base de unos grupos que se han enriquecido y que además desprecian su propio país. Aquí, por ejemplo, el servicio militar es obligatorio, excepto para el que paga. Eso es legal. La gente de estrato 5 y 6 no ha hecho la mili nunca. A todos se les llena la boca con la patria, pero ninguno se ha puesto unas botas. Los que han muerto en la guerra son los de los estratos 1 y 2. ¿Cómo es posible que una guerrilla de 15.000 hombres pudiera tener controlado el país? Pues porque al soldado, al final, le preguntaban: “oye, macho, ¿tú por qué luchas?”. Es que las FARC llegaron a estar aquí mismo, en Bogotá. Lanzaban morteros desde esa montaña de ahí. Y el Estado, con toda su fuerza, con 45 millones de habitantes, no era capaz de echarles.

**J.B.:** Lo primero que tiene que hacer el Estado es tener control sobre el territorio. Es que en España nadie se plantea ponerse a plantar cientos y cientos de hectáreas de marihuana, porque si te pillan vas a la cárcel. Es que no se puede plantar y punto. Es muy sencillo.

**G.T.:** Es que aquí está hasta aceptado. Hay hasta una asociación de cocaleros.

**J.B.:** En la zona donde yo estoy, las FARC nunca han admitido cultivos ni de coca, ni de marihuana, ni de amapola. Y la verdad es que no hay nada. Ahí se dedican al café. No les hace falta otra cosa.

**G.T.:** Donde estoy yo es al revés. Allí dicen que no se puede consentir que venga el Ejército a erradicar cultivos.

**P:** ¿Lo dicen así de explícito?

**G.T.:** Así de explícito. Que al agricultor le están quitando su cultivo, que con quien hay que acabar es con el narcotraficante que vive en Estados Unidos.

**J.B.:** En mi zona de lo que se quejan es de que hay delincuencia: de que se roban motos, de que a uno le roban una vaca... Y ahí se reclama la justicia de FARC. Al marihuanero se le advierte una o dos veces, y a la tercera se le pega un tiro en la cabeza. Es decir, lo que el pueblo quiere es justicia. Está acostumbrado a eso. Da miedo cuando hablas con ellos, porque ellos dicen: “Cuando estaba FARC esto no pasaba, aquí las puertas estaban abiertas y nunca pasaba nada”.

**A.R.:** Son sociedades muy violentas.

**P:** Es una cuestión cultural.

**J.B.:** En el tiempo que he estado aquí, en un pueblo de 2.500 habitantes, han matado a 10 personas. A machete. Ellos se sientan, toman unos tragos y llega un momento en el que se dan machete. Es una cultura muy violenta.

**G.T.:** Aquí la violencia es el primer paso del cabreo. En España la familia discute en Nochebuena. Pues aquí eso se traduce en muertos.

**P:** Es curioso, porque luego también es un pueblo muy educado, con un uso del lenguaje exquisito y muy cordial en las distancias cortas. Y, sin embargo, también tienen esa faceta violenta. Puede que ambas cosas estén conectadas de alguna manera.

**J.B.:** Imagino que lo habrás leído, pero tienes que releer *Cien años de soledad*. Yo lo leí al cuarto mes de estar aquí y entendí mucho mejor a la sociedad colombiana. Colombia es eso: *Cien años de soledad*. Explicarle a la gente que el Estado de Derecho no puede permitir cierta justicia sin una garantía de inocencia o no parece obvio, pero aquí hay que decírselo a la gente. Es complicado que el comandante de las FARC pueda decidir quién vive o muere en un asunto judicial. Y eso lo reclama el pueblo.

**G.T.:** Sólo tenían derecho a vivir los que estaban de acuerdo con el sistema. Los demás ya podían irse: tenían las horas contadas. Por eso ha habido tantos desplazados.

**A.R.:** Aquí en Bogotá son más de 9 millones de habitantes, pero en los años 60 eran sólo un millón. Aquí muchos *farianos* de los campamentos acabarán viviendo como estrato 1 en barriadas, malviviendo. Y esto seguirá creciendo.

**J.B.:** Hay mucho contraste. En mi zona veredal hay un estilo de vida medieval. La gente sigue yendo en burro, lo que sale en TV de Juan Valdés es así: las cargas las llevan los burros y no hay un solo km asfaltado. A Marquetalia solamente se puede acceder en bestia o andando. Nada que ver con Bogotá.

**P:** Acabo de leer *A lomo de mula*, de Alfredo Molano, y ahí se explica todo esto muy bien.

**J.B.:** Hay gente en el Chocó que aún se gana la vida transportando cosas. Ellos, no sus burros. Y un jornal de café, de sol a sol, a lo mejor son 20.000 pesos al día.

**A.R.:** Y una señora de la limpieza, aquí en Bogotá, no cobra más de 45.000 pesos al día. O sea que en Popayán puede cobrar 30.000 pesos. Y se tira todo el día trabajando. Entonces hay una gente que vive muy bien gracias a esto. Para las élites es bueno que siga viniendo gente en masa a las ciudades, porque esa gente hará cualquier cosa por ganar 30.000 pesos. Y también puede dedicarse a matar gente, claro, por eso hay tanta delincuencia.

**P:** Bueno, yo también quería preguntarles por la nueva misión ONU, ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuál será su objetivo?

**A.R.:** De la nueva misión oficialmente no se sabe nada (risas). La resolución ONU dice que el último día de la misión actual es el 25 de septiembre y que el 26 será el primero de la nueva. Eso ya está marcado, pero da 45 días desde el día de la publicación de la resolución para que la misión planifique y se organice para desarrollar su trabajo. Ahora estamos en esa fase de planificación. El diseño no nos corresponde a nosotros, al contingente de observadores internacionales. Hay otro contingente que es el que dirige.

Entonces esta misión es una misión política: no es una misión de paz. El Peace Keeping Operations es el órgano de Naciones Unidas que lleva las misiones de establecimiento de paz, que son misiones con Fuerza y con Ejército. Como las que hay en Líbano, en Congo o en la RCA. Pero esta misión, aunque sea una misión de paz, se ha querido que sea una misión política. Porque Colombia no quiere aparentar que es un Estado con carencias estructurales. ¿Por qué nosotros no vamos de uniforme? A nosotros eso nos dificulta el trabajo. Ir desarmados y de paisano no es una buena idea. Ahí tenemos un problema. El DPA, el Departamento de Asuntos Públicos de ONU, quiere hacer una misión política, les preocupa el aspecto de la reintegración del personal de las FARC, pero si miras la resolución de ONU verás que la nueva misión tiene dos funciones: una es esa y la otra es seguridad.

Entonces, ¿qué les preocupa a las FARC? Les preocupa su seguridad. Porque la Historia nos dice que lo que pasó con el M-19 es que se desmovilizó y luego se cargaron a muchos combatientes. Las FARC tienen miedo de que, una vez que esté la cosa más relajada, aparezcan en uno de esos campamentos un grupo de *gaitanistas* o de lo que sea y entren a saco, y se carguen a la mitad. Pero el DPA evalúa que lo más importante es la reintegración y entonces quiere que haya menos militares en la misión. Y quiere hacerlo con equipos móviles y no a la manera fija actual. Entonces no está claro cómo se va hacer.

Para alrededor del 10 de agosto esperamos tener la nueva plantilla. Ahora somos 450 observadores, pero a partir de agosto seremos menos. Hay un plan para sacar gente y que la misión 1 se adapte a la misión 2.

**P:** ¿Y el plazo de la misión? Inicialmente es de 12 meses, pero, ¿es probable que se alargue?

**A.R.:** Sí, hay muy pocas misiones ONU que hayan terminado: nunca terminan (risas). Entonces sorprendió que esta partiese inicialmente con solo un año de duración. Lo que pasa es que la participación presupuestaria de Estados Unidos en Naciones Unidas está en entredicho. Si esto se confirma, la forma de vida de mucha gente se caería, porque los funcionarios de ONU tienen unos sueldos extraordinarios, unas pensiones fantásticas... Y nosotros para ellos somos mano de obra barata. A la ONU le cuesta lo mismo un sargento que un coronel, porque ellos pagan una especie de dietas, y no se paga esa dieta en función de cargos. Cada uno de nosotros, cada miembro militar, les cuesta dos mil y pico dólares, mientras que un funcionario les cuesta unos 10.000 dólares, más la pensión, más el colegio de los niños... Naciones Unidas tiene ese problema económico. Es la misión de la incertidumbre, y todo eso afecta a los plazos, que van cambiando continuamente.

**P:** ¿Cuál es el costo de la segunda misión?

**A.R.:** Van a presentar un presupuesto y, si lo aprueban, bien. Digamos que están haciendo la carta de los reyes magos: voy a pedirlo todo y si me traen todos los juguetes pues muy bien. En España no se trabaja así. Allí te dan un presupuesto y con eso tú te adaptas, y si te falta algo luego puedes convencer para que te lo den. El viernes estuvimos hablando de esto y el costo es la estructura logística. Los campamentos que tú has visto no son de Naciones Unidas. Esas tiendas son de un organismo que se llama Fondo Paz, que es una institución del Gobierno de Colombia. Y ahí los países ponen dinero.

**J.B.:** La UE pone una pasta.

**A.R.:** Pero ese Fondo Paz acaba cuando acaba la zona veredal. Y no está claro qué va a pasar con esos campamentos. Ahí hay civiles trabajando. ¿A esos quién los va a pagar? ¿Se hará cargo la ONU? Y esas tiendas son alquiladas. Además no son tiendas adecuadas para vivir, porque son tiendas para eventos.

**G.T.:** Hubo un campamento que se lo llevó el viento. Tres veces. Se quedaron sin nada.

**A.R.:** Y ahora Naciones Unidas quiere que poco a poco vaya desapareciendo la estructura militar. Si esa estructura militar desaparece, entonces habrá un civil tomando decisiones en un contexto militar. ¿Qué pasa si alguien muere en alguno de esos campamentos? Hay muchos países que no van a aceptar ese cambio. Aquí, al principio, en la misión, había un grupo de países cerrado con la CELAC, Argentina... Cuando empezó a hacer falta más gente se incluyó a España, a Portugal, ahora hay 4 suecos, 2 rusos, un inglés... Pero estamos un poco fuera. A veces no cuentan con nosotros. Tú ves celos de España como potencia.

Y puede darse el caso de que no haya países de habla hispana suficiente para colocarse aquí. Es que esta es la única misión ONU de la Historia que no ha sido en inglés o en francés. Es en español y necesita hispanoparlantes. Pueden traer a paquistaníes o nepalíes, pero, si para nosotros ya es difícil comprender la sociedad colombiana, imagínate para alguien que no habla español. Queda muy poco, y estamos en un momento apasionante, porque todo cambia continuamente. Ya estamos proponiendo los informes de fin de misión. El 25 de septiembre se acabó: quedan dos meses. Y el 1 de septiembre ya se acaba la dejación de armas.

**P:** Una última pregunta. ¿El proceso de destrucción de armas se ha iniciado ya?

**G.T.:** Todavía no.

**J.B.:** Eso es lo último.

**A.R.:** El día 1 de agosto deberían estar las armas (que ahora están en los contenedores) fuera de los campamentos. La última semana de julio se empiezan a mover los contenedores a una sede en un polígono industrial, comandado por un español, a 20 kilómetros de Bogotá. Ahí se volverá a contar todo y se clasificará, y se iniciará la destrucción de todo el armamento junto en esa sede. Esto se puede prolongar en el tiempo, hasta diciembre incluso.

**G.T.:** Y luego se harán las esculturas con las armas. Serán tres: una en Nueva York, otra en La Habana y otra en Bogotá. Lo que falta por saber es el tamaño de esos monumentos.

## **Entrevista 4: Alejandro José López**

**Cargo/interés:** Alejandro José López es Doctor en Literatura y Medios de Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2004 y 2008 dirigió la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle (Cali). Es profesor asociado de la Universidad del Valle, además de escritor, realizador e investigador. Ha publicado varios ensayos, cuentos y una novela. También ha dirigido diferentes proyectos audiovisuales relacionados con el conflicto armado.

**Lugar de la entrevista:** Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle (Cali).

**Fecha:** Jueves 13 de julio de 2017.

Descripción: La entrevista con Alejandro J. López se solicita el 21 de junio vía e-mail. El profesor contesta el día 26 de junio con un e-mail en el que no sólo da el visto bueno para una entrevista personal con él, sino que también se ofrece a ponerme en contacto con otros investigadores. Una vez en Colombia, se cierra la entrevista por teléfono el martes 11 de julio, un día antes de mi viaje a Cali y dos días antes de la fecha del encuentro. La reunión tiene lugar en una de las mesas de la cafetería de la Facultad de Humanidades y se permite el uso de grabadora. La entrevista se desmarca del carácter técnico de las anteriores y se centra en los aspectos sociológicos y políticos de las negociaciones del acuerdo de paz.

**Pregunta:** Empecemos identificando a las partes. ¿Cuáles son las fuerzas políticas que confluyen alrededor del conflicto?

**Alejandro J. López:** Bueno, aquí hay una derecha terrateniente, que es la que representa Uribe, y una derecha más empresarial, de grandes propietarios, que es la que representa Santos. Y hay otro sector que tiene alianzas con la extrema derecha, pero son un brazo armado, que son los paramilitares.

**P:** ¿Cómo es el paramilitarismo de ahora? ¿Su estructura es igual que la de las desaparecidas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)?

**A.L.:** Ha cambiado mucho. El paramilitarismo surge como una respuesta de los grandes terratenientes a la incapacidad del Estado para combatir la insurgencia. Es un combate muy difícil porque es un combate irregular: es una guerra de guerrillas, no son batallas abiertas. Entonces el paramilitarismo empieza con unos aparatos institucionales, que los creó Álvaro Uribe Vélez, que se llamaban las *Convivir*, que eran cooperativas de seguridad ciudadana, pagadas por terratenientes, y que fueron la base de lo que luego fueron los comandos paramilitares.

Con los paramilitares llegamos al concepto de “guerra degradada”. En algún momento, Carlos Castaño (líder de las AUC) habló abiertamente de su estrategia militar, que es horrorosa, pero la tenía tan clara que la formulaba con palabras comprensibles para todos. Se trata de la táctica de “vaciarle el agua al pez”. Tenemos una población en un determinado sector del país y en la parte de atrás hay una cordillera con un grupo guerrillero. Pues bien, ese grupo puede subsistir en esa zona porque se surte de lo que en esa población se vende: comida, servicios... Entonces los paramilitares llegaban y encontraban allí una población de 1.000 ó 2.000 personas. Como no los podían matar a todos, acudían a la forma más cruel y eficaz de la pedagogía: el escarmiento. Acusaban de colaboración con la guerrilla a aquellos que tenían graneros, a los vendedores de comida, y realizaban una masacre pública con la crueldad más absoluta, torturándoles delante de todo el pueblo. Basta con que maten a 5 o a 6 de la manera más cruenta para que el resto del pueblo salga despavorido de la zona.

Esto se hizo en Colombia como práctica paramilitar de manera sistemática. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Carlos Castaño. “Hay que vaciarle el agua al pez”. Esto te habla de una guerra degradada a dinámicas infames, porque fueron muchos los pueblos que sufrieron esta estrategia.

**P:** Y se hizo con connivencia del Gobierno. En El Salado, por ejemplo, estuvieron varios días torturando y matando. Es imposible que eso no lo conozca la autoridad.

**A.L.:** Efectivamente. Claro que sí. Hay mandos militares procesados debido a esa omisión. Insisto: es muy importante señalar los orígenes atroces de todos los bandos, porque lo que resulta sospechoso es cuando alguien habla enfáticamente de los crímenes de uno de los bandos y evita los otros. Las llamadas “pescas milagrosas” de la guerrilla, por ejemplo, eran una verdadera infamia. Hacer un retén en una carretera para raptar empresarios o los secuestros masivos, de los cuales los más grandes se produjeron en

Cali. El precio de esas *cagadas*, por usar una expresión muy colombiana, lo pagó el país entero. Eso fue lo que fortaleció el proyecto político de Uribe. La gente quería que a la guerrilla se la combatiese como fuera y votaron a Uribe. Lo votaron dos veces.

Todos los crímenes de guerra fueron infames. Los de los paramilitares y los de la guerrilla. Y los del Ejército. Por poner un ejemplo: los “falsos positivos”. Se premia a los militares por bajas del enemigo y resulta que se iban a zonas rurales, se robaban 20 muchachos y les ponían encima un uniforme camuflado para hacerles pasar como guerrilleros muertos y tener prebendas por eso. Son casi 60 años de guerra y en ese tiempo pasa de todo.

**P:** Existe un doble rasero. Parece que gran parte de la población colombiana condena fácilmente las atrocidades de la guerrilla y, sin embargo, tenemos cifras que dicen que en términos de desapariciones y homicidios los principales culpables son los paramilitares, y la sociedad colombiana no utiliza el mismo criterio a la hora de juzgar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay mucho rencor hacia la guerrilla porque fue lo que apareció primero?

**A.L.:** No, hay muchos factores. Uno de ellos, quizá el más importante, es el rol de los medios de comunicación en la construcción de los imaginarios colectivos. Los noticieros de Colombia todo el rato muestran los crímenes de uno de los bandos y pasan de largo por los de los otros, o hacen una exhibición menos evidente de ellos. Y ya hay una buena parte de Colombia que empezó a cansarse, aunque no toda, insisto, porque hay gente que usufructa el conflicto.

Colombia, en cualquier caso, tiene la desgracia del narcotráfico, que le va como anillo al dedo al conflicto. Es que el lucro que genera el narcotráfico no lo genera ningún otro negocio en el mundo, ni el petróleo, ni el oro. Y su basamento es la política absurda de la prohibición. Cuanto más lo prohíban, más caro va a ser. Si tú tienes hoy aquí 1 kilo de cocaína, que te vale 3 millones de pesos y en Madrid te vale 300 millones de pesos, siempre va a haber negocio.

**P:** El PNIS ofrece subsidios a aquellos que dejen el cultivo de coca, pero siguen siendo cantidades insignificantes si lo comparamos con el beneficio de plantar coca, ¿cómo se convence a un campesino que lleva toda la vida cultivando coca para que deje de hacerlo?

**A.L.:** No se le convence. Es imposible convencerlo, como no sea dándole otras dinámicas, otras alternativas económicas.

**P:** Pero desde el punto de vista económico no se puede competir con el narcotráfico. El Estado tendrá que dar incentivos que no sean económicos.

**A.L.:** Hay un caso que es el de los Tratados de Libre Comercio que se firmaron con Estados Unidos y con otros países. Aquí los productores agrícolas reciben subsidios del Estado y, por tanto, no están compitiendo en la lógica del libre mercado, porque si están subsidiados pueden vender esos productos a unos costes inferiores a la producción misma. Entonces, un arrocero colombiano no te puede vender el kilo de arroz al precio que lo vende un arrocero norteamericano. Eso es trampa. Entonces el arrocero, o el agricultor, el que sea, pueden trabajar a pérdida. No hay que igualar el precio de la coca, lo único que hay que hacer es permitirle al campesino que viva dignamente, y eso es lo que no se está garantizando.

Esa es una de las grandes tragedias de Colombia. Y la estigmatización. ¿Cómo se van a mover esas cantidades ingentes de dinero en Estados Unidos si no hay europeos y norteamericanos en la cadena de distribución? Siempre se habla de los colombianos. Hay una estigmatización ridícula, que implica jugar al avestruz. Y no me estoy desviando del tema: el conflicto colombiano no hubiera alcanzado la degradación a la que llegó si no hubiese aparecido ese mecanismo de financiación. Para todos los bandos, además, porque todos se lucraron de ello.

**P:** La estigmatización llega a unos niveles... En España, por ejemplo, uno oye “Medellín” y sólo le viene a la cabeza el narcotráfico, la cocaína y Pablo Escobar.

**A.L.:** Yo viví en Madrid cinco años y a mí me daba un poco de risa. Porque yo soy colombiano, pero no narcotraficante. Yo le decía a mucha gente que no todos los españoles sois toreros, ¿no?

Mientras se siga jugando al avestruz con el negocio de la cocaína, éste no desaparecerá. Un producto que además no paga impuestos... Las drogas y las sustancias psicoactivas han existido durante toda la Historia de la Humanidad y lo que sucede hoy en día, simplemente, es que ahora mucha gente se lucra de ello. Es un problema atávico, pero ese problema no lleva la marca Colombia o la marca Ecuador.

**P:** Es un problema de dinero. El político que no quiere legalizar la producción no lo hace por principios morales, precisamente.

**A.L.:** Ahora que dices eso te voy a decir algo. Hay zonas del país donde se demostró que los enemigos acérrimos estaban trabajando en conjunto cuidando cultivos de coca. Había paramilitares y guerrilleros aliados para sostener un laboratorio de cocaína. El dinero, el lucro y el crimen no tienen color político, ni ideología.

Aquí, en cualquier caso, seguimos mirando con esperanza la posibilidad de que el conflicto por lo menos se desescale. Algunos lo tenemos claro: no puede haber una perspectiva ingenua con la negociación de paz. Los problemas de Colombia no van a acabar por una negociación, pero sí nos va a permitir orientar nuestros esfuerzos a enfrentar problemas que no han sido enfrentados a lo largo de la Historia: el problema de la propiedad, el problema de las oportunidades... ¿Por qué el narcotráfico tiene una acogida tan grande? En Colombia el trabajo honrado no vale nada y a los jóvenes de las zonas marginales tú les propones un negocio como este y obviamente escogen esa opción.

Que se desescale el conflicto es esperanzador, pero no podemos mirar de manera ingenua la negociación, como si fuese una especie de varita mágica que fuese a resolverlo todo. Que podamos, por ejemplo, bajarle el presupuesto a la compra de armas y que podamos liberar inversión pública para educación, salud y generación de empleo, va a ser extraordinario. Y esto hay que decírselo a la gente, porque los enemigos de la negociación dicen “no hay que seguir, hay que matarles” y eso no es racional.

**P:** Desde los partidarios del *no* hay todo tipo de argumentos. Ayer leía un artículo del IEEE (Instituto de Estudios Estratégicos) que dejaba caer que en 2012 las FARC estaban acabadas, que no tenían salida militar, que casi el 100 % de sus líderes estaban exiliados en países como Cuba. ¿Es esto cierto? ¿O se dice para deslegitimar el proceso de paz?

**A.L.:** Dos cosas quiero decir al respecto. Una: una manera de cubrir periodísticamente el conflicto fue retirando el trasfondo político que tenía. En Colombia se nos informó durante décadas de los hechos desde una perspectiva estrictamente militar, como si no hubiera detrás de toda guerra una esencia política. Esa despolitización le ha hecho mucho daño al enfoque de la negociación.

Dos: la falsa ilusión de que alguno de los bandos podía ganar la guerra es también negativa para la negociación. Los comentarios de barra de bar, como ustedes dicen en España, nunca son positivos. En cualquier conflicto armado, como uno de los bandos tenga una selva en la retaguardia, píllale si puedes. Y en Colombia no tenemos una selva: tenemos dos. Las cuestiones geoestratégicas impiden que Colombia pueda tener una

salida militar del conflicto. En cualquier caso, creo que los bandos se han fortalecido. El negocio del narcotráfico está ahí y la zona liberada por las FARC ahora es zona tomada por las BACRIM.

**P:** Durante las últimas semanas no paramos de leer en la prensa que han crecido los cultivos ilícitos en un porcentaje amplio respecto a años anteriores...

**A.L.:** Y la perspectiva siempre es una perspectiva mecanicista: la solución para muchos es fumigar. Pero cuando fumigas, luego no puedes sembrar alimentos. Yo quiero incidir de nuevo en el tratamiento errático que se le da al fenómeno del narcotráfico.

**P:** Muchos sectores colombianos hablan del Plan Colombia en términos positivos, hablan de sus virtudes...

**A.L.:** Siempre bendecirán la mano que les da de comer, ¿no? Colombia tiene una gran cantidad de problemas por resolver: la desigualdad, la violencia estructural, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la educación, el desprestigiado sistema de salud... Pero muchos de nosotros nos aferramos a abrazar y respaldar los acuerdos de paz. Quienes actuamos así, y nos comprometemos, lo hacemos esencialmente con la ilusión de que nuestro hijos y nuestros nietos vivan en un país menos malo. Y está claro que negociar construye un país menos malo.

Quería decir una cosa más: en 1998 tuve la oportunidad de conocer las comunidades de paz por un trabajo que estaba haciendo como documentalista en ese momento. Las comunidades de paz fueron poblaciones que fueron masacradas por paramilitares. Eran comunidades que hablaban de la resistencia activa y se negaban a coger arma, se trata de un concepto de paz activo. Se negaron a ser parte de ninguno de los bandos y por eso fueron sacrificadas. Yo creo que la vida de esas personas debe ser honrada hoy. Los que tenemos confianza en la actual negociación somos los continuadores de aquellos líderes comunitarios.

Muchos hoy nos negamos a ser parte de ninguno de los bandos y, más allá de los iconos de las palomas blancas, lo que queremos es que nuestros hijos vivan en un país distinto. Es el principio de neutralidad activa, esa es la bandera que defendían aquellos líderes. Y creo que ese concepto vale la pena retomarlo ahora, casi 20 años después.

## **Entrevista 5: Adolfo Álvarez Rodríguez**

**Cargo/interés:** Adolfo Álvarez es Director del Programa Institucional de Paz en la Universidad del Valle (Cali). Es también economista egresado en la misma universidad, con especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Bolonia (Italia).

**Lugar de la entrevista:** Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle (Cali).

**Fecha:** Jueves 13 de julio de 2017.

Descripción: Adolfo Álvarez accede a la entrevista por mediación del profesor Alejandro José López. Alejandro J. López informa a Adolfo Álvarez de mi viaje a Cali el 11 de julio y éste accede a conceder una entrevista el mismo día en que está concertado el encuentro con López. La reunión tiene lugar en la cafetería de la Facultad de Humanidades. Como Director del Programa Institucional de Paz, el profesor Álvarez encierra un vasto conocimiento acerca de la aplicación e implementación del Acuerdo Final entre Gobierno Nacional y FARC. La mayor parte de la entrevista gira en torno a los apartados más polémicos de esa negociación.

**Pregunta:** ¿Cómo se están viviendo los acuerdos de paz en la calle?

**Adolfo Álvarez:** La mayoría de la gente está de acuerdo o estaba de acuerdo con la negociación como salida política. Hay un cansancio por el conflicto. El problema es que las FARC son un actor más del conflicto, no son el principal victimario. Pero en el imaginario de la gente son el principal victimario, sobre todo porque cometieron actos más atroces. Ellos al principio de la negociación no reconocieron nada, pero han ido cambiando su discurso y sus intenciones. Ahora ya reconocen que han sido causantes de muchas víctimas, pero ellos siguen instalados en que también han sido víctimas.

El punto clave reside en que la guerra se degradó: las FARC cometieron muchas *cagadas*. Ese es uno de los temas más complejos. Usar el secuestro sistemáticamente, asesinar a un grupo de diputados... Ellos son agentes del imaginario y obviamente los medios de comunicación trabajaron también en eso, pero ellos con sus errores aportaron. Lo que es

sorprendente es que la gente pueda acabar justificando más la violencia paramilitar que la guerrillera. Por ejemplo, en el tema de los desaparecidos, Colombia tiene más desaparecidos que Chile. Son como 50.000 desaparecidos y la gente tiene miedo a asumir que la mayor parte los han causado los paramilitares.

**P:** No sólo los desaparecidos. Las investigaciones sobre asesinatos también apuntan en su mayoría a los paramilitares.

**A.A.:** Tú tienes que clasificar las víctimas, los desplazados, los muertos... 22.000 muertos. Desaparecidos: 50.000. Hay un documento que tienes que consultar: se llama *¡Basta ya!*

**P:** Lo tengo. Es de los primeros documentos que consulté para abordar este trabajo.

**A.A.:** *¡Basta ya!* es una radiografía perfecta del conflicto. Hay también un informe del PNUD que se llama *Conflicto: callejón con salida*, del año 2003. Es viejo pero es interesante porque ubica históricamente el conflicto. Repasa la colonización, el tema agrario, el tema de las drogas...

La degradación del conflicto, de alguna manera, se está cobrando en esta fase, porque la gente tiene una imagen de lo que pasó, pero es una de las versiones. La polarización tiene mucho que ver con eso. Y luego hay un elemento muy político, y es que el conflicto ha sido muy funcional. Una discusión a la que tiene que hacer frente la insurgencia es que el conflicto no produjo más igualdad.

**P:** Y esa violencia estructural continúa creciendo.

**A.A.:** No, pero más allá de la violencia estructural, lo que pasa es que el conflicto fue muy funcional para un proyecto político de derechas. El conflicto fortaleció una visión autoritaria de la política. Uribe representa a un sector de propietarios cercanos al narcotráfico y, sin embargo, no se desgasta con nada.

**P:** ¿Veremos en el futuro un Gobierno que dé marcha atrás con los acuerdos?

**A.A.:** No, no lo creo, porque en realidad la derecha quiere también liderar este proceso, y liderarlo para qué: para protegerse. Qué les preocupa: que la JEP lleve a los tribunales a militares y a civiles que fueron agentes del conflicto. Ese es el tema central, y el segundo es el tema de tierras.

**P:** Hábleme del papel de las FARC en el PNIS...

**A.A.:** Es un programa negociado y las FARC tienen mucho que ver en la sustitución de cultivos. El problema es que en los territorios hay también grupos de narcotráfico y hay tensiones fuertes ahí.

**P:** Precisamente por esto está habiendo un repunte de asesinatos de líderes sociales que se han mostrado a favor de la sustitución de cultivos.

**A.A.:** En términos generales todo responde a una disputa por el territorio. El problema es la fragilidad del sistema. A mí me han comentado miembros de la Fuerza Pública que ofrecen a los comandantes del narcotráfico 50 millones de pesos mensuales y a los muchachos rasos 3 millones de pesos para que el negocio siga.

Y el proyecto de reinserción, que se usó mucho políticamente durante el plebiscito, que les iban a pagar un millón de pesos a los guerrilleros, y los medios de comunicación no pararon de atacar con eso. Para que vea las contradicciones que hay. Ahora lo cierto es que se está ofreciendo a los paramilitares más de lo que le han ofrecido a la guerrilla.

Lo que queda claro es que las FARC no tienen reverso: la decisión política es clarísima. Y saben que muchos van a ser sacrificados.

**P:** En las negociaciones con el M-19, por ejemplo, la guerrilla tuvo una cuota muy alta de sacrificios y de vidas humanas, especialmente de comandantes cuya seguridad nunca pudo ser garantizada, ¿qué perspectivas cree usted que pueden tener ahora las FARC en términos de seguridad?

**A.A.:** Ese es uno de los puntos que tuvo más discusión en la mesa. El Gobierno está implicado en eso. Hay un trabajo de Juan Pablo Lederach sobre el tema del Instituto Kroc. Ellos han hecho el seguimiento como a 40 procesos de paz en el mundo y dicen que este es uno de los más complejos. Son sólo 6 puntos, pero en realidad son 300 acciones distintas. El Estado tiene que cumplir con 300 acciones.

**P:** ¿Qué ejemplos de desarme en otros países se han tomado como referentes? Leí que las FARC tenían especial interés en que se tomara como referencia el proceso de Irlanda del Norte.

**A.A.:** Sí, de Irlanda. Allí hay que entender la lógica de los actores. Un actor que considera que no lo derrotaron, no entrega las armas. De ahí que las FARC se agarren al concepto de “dejación” y no de “entrega”. Como el IRA en Irlanda del Norte. Eso ha sido muy explotado políticamente. Hay sectores que dicen que eso es una farsa.

Con este tema se explica la fuerza que tienen las imágenes, los imaginarios. Mire, este conflicto no es racional. Yo le estoy hablando desde la racionalidad, pero para el ciudadano medio el conflicto es pasión. Nosotros tuvimos una violencia mucho más degradada que la del conflicto que empezó en los años 60. Fue *La Violencia* de los años 40 y 50. Hubo 200.000 muertos y al final hubo un pacto político entre liberales y conservadores, el Frente Nacional, con el que no hubo un solo procesado. Hubo también gente que perdió sus tierras y no se las devolvieron. Pero en la memoria colectiva eso ya no está. Los que hemos estudiado, o los que por tradición familiar aún les cuentan que a su abuelo o a su papá lo mataron durante *La Violencia*, no hemos conseguido construir ninguna memoria ni relato. Y eso es parte del problema.

El cine y la literatura están haciendo cosas interesantes en ese sentido. Yo mismo estoy preparando un ciclo de cine sobre el conflicto en la Universidad para el curso que viene. Hay un set de películas que dicen mucho: *El silencio de los fusiles*, *Golpe de estadio*, *La sargento Matacho*...

**P:** ¿Cómo ha abordado el cine el conflicto? ¿Ha habido, por ejemplo, mucha autocensura?

**A.A.:** No, no crea. El problema se ha debido más a la propia limitación de la producción. Ha habido películas muy al estilo colombiano que combinan mito y realidad, y ese humor negro que nosotros tenemos, como en *Golpe de estadio*. Hay una sobre la historia del conflicto que se llama *Cóndores no entierran todos los días*, basada en una novela y que aborda la violencia partidista de los años 50.

**P:** Quería preguntarle por las últimas campañas electorales, ¿han estado muy marcadas por la agenda de paz?

**A.A.:** Sí, la elección de Pastrana, por ejemplo. Pastrana se metió en un acuerdo con Manuel Marulanda, un golpe mediático impresionante. Ahí se vino la negociación del Caguán, un fracaso total.

**P:** ¿Qué es lo que falló con el Caguán? ¿O qué es en lo que se ha acertado ahora?

**A.A.:** El Caguán no tenía una agenda precisa. Había demasiados puntos, era caótico. No había un método. Era muy abierto y muy mediático, pero no había un protocolo de negociación. Los dos bandos, además, estaban envalentonados. Cada cual aspiraba a derrotar al otro. El Caguán alimentó el conflicto, lo degradó aún más. Fortaleció a un proyecto de derecha y catapultó a un líder que antes no existía: Uribe.

**P:** ¿Cómo van a influir los acuerdos en las elecciones de 2018?

**A.A.:** La campaña va a ser muy brava, porque el uribismo va a ir a emponzoñar la paz. Ya hubo uno que dijo “en Colombia vamos a hacer trizas los acuerdos”. Uno de los líderes del Centro Democrático. Lo dijo en un discurso oficial televisado. Y eso vende. Pero en realidad ellos no pueden descubrirse completamente. Entonces ya hay un escenario en el que ellos van a querer liderar el proceso, en el que intenten ajustar los acuerdos para luego decir: “los metimos en cintura”. No creo que tengan gasolina para dar marcha atrás en los acuerdos.

Van a basarse en ese discurso y en la lucha contra los altos impuestos. En eso se van a parecer a Trump: populismo de derechas. Lo que se ve en el panorama es el Centro Democrático y el uribismo por un lado. Vargas Lleras, otro candidato de la derecha. Y por el otro lado vamos a tener una coalición de centro izquierda donde van a estar los verdes, Navarro, Fajardo, Claudia López...

Y luego está el papel de los medios de comunicación. Y el de un nuevo actor: las redes sociales. Hoy los colombianos no leen periódicos, pero están pegados todo el día al celular. Y la derecha está muy implicada ahí, en mover las pasiones, en desprestigiar los acuerdos. Tienen poder y están muy organizados.

**P:** ¿Qué falta entonces en la sociedad colombiana? ¿Lectura? ¿Compromiso?

**A.A.:** Es un tema muy interesante. Uno de los principales damnificados de todos estos años es la cultura política. La crisis de los partidos ha creado un ciudadano que detesta la política y a sus dirigentes. Y que vota impulsivamente, movido por las pasiones. La clave es ver quien está organizado para capitalizar eso. El otro día hablaba con el profesor Luis Fernando Barón, que ha escrito un libro que se llama *Internet, guerra y paz en Colombia*. Él decía lo siguiente: la primavera árabe la hicieron jóvenes que habían recibido educación europea y que con las redes fueron capaces de iniciar un movimiento contra el autoritarismo. Pero, ¿quién capitalizó eso? No fueron ellos. Quienes lo capitalizaron fueron los fundamentalistas. La pregunta es: ¿quién va a capitalizar en Colombia el rugido que existe en las redes sociales?

**P:** El descontento que se produjo en Colombia, por ejemplo, por fenómenos como las “pescas milagrosas” fue capitalizado por Uribe en su día...

**A.A.:** Es que Colombia a veces es demasiado voluble y está llena de contradicciones. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos una encuesta y se le preguntó a la gente si aceptaría la participación política de la guerrilla. La mitad dijo que sí, pero a la hora de preguntar si votarían a algún candidato de las FARC, sólo el 15 % contestó afirmativamente. Y eso es mucho, porque eso quiere decir que las FARC podrían tener más representantes que los que participaron en la mesa de negociación de La Habana. No van a tener alcaldes, ni gobernadores, pero sí concejales. Y van a depender mucho de su propio discurso político: el problema es que hay un sector muy ortodoxo que está planteando que el partido que van a fundar tiene que ser un partido con perspectiva marxista. Pablo Catatumbo, el comandante del Bloque Sur, dijo que eso era un suicidio político. Hay un sector ortodoxo y otro realista. La Unión Patriótica ya introducía matices al discurso marxista.

**P:** A *Timochenko* se le criticó por su discurso en la primera ceremonia de negociación de paz. Se dijo que no fue claro a la hora de plantear una solicitud de perdón. ¿Han aprendido las FARC en ese sentido?

**A.A.:** No, es probable que algunos no hayan aprendido. Pero volviendo al tema del plebiscito, el resultado se debió, en primer lugar, a una campaña muy fuerte de la derecha y, en segundo lugar, a errores del Gobierno. Y también a errores de las FARC, porque no se movieron lo que debían haberse movido.

**P:** La participación en el referéndum fue del 37 %, ¿es ese un buen dato?

**A.A.:** En unas elecciones normales habitualmente vota el 38 o el 39 %. Máximo el 40 %. Pero votan las denominadas maquinarias. Es gente que va a votar en función del dictado de un patrón electoral. En el plebiscito votó el 37 % sin patrones. Par mí, es un voto de conciencia muy importante.

El principal damnificado en Colombia de estos últimos 30 años es la cultura política. Hay una franja de la sociedad a la que la política no le interesa, porque la identifican con la corrupción. El conflicto armado y la Historia del país acabaron despolitizando a la sociedad colombiana. Pero no toda la política es corrupción, y que un 37 % de la población se exprese libremente es esperanzador.

## **Entrevista 6: Gustavo Burbono**

**Cargo/interés:** Gustavo es hotelero de profesión, pero debido a necesidades económicas desde hace 4 años también trabaja como chófer en Cali.

**Lugar de la entrevista:** Interior del coche particular de Gustavo, durante el trayecto de Cali a Caldon.

**Fecha:** Sábado 15 de julio de 2017.

Descripción: La entrevista no se concierta previamente. Se realiza en el momento, previa solicitud al entrevistado, cuando el autor de este trabajo repara en que el sujeto puede aportar información relevante acerca del imaginario de la población caleña (y colombiana) hacia los acuerdos de paz y hacia la guerrilla. Debido a su profesión, Gustavo conversa casi a diario con sus clientes sobre el conflicto y el acuerdo entre Gobierno y FARC. Gustavo aporta, por tanto, no sólo una visión personal del asunto, sino también una idea aproximada de cuál es el clima de opinión al respecto en la ciudad de Cali. La entrevista se desarrolla durante el viaje de Cali a Caldon, donde me entrevistaré con el Mecanismo Tripartito y accederé al campamento de las FARC. Gustavo permite el uso de la grabadora.

**Pregunta:** ¿Usted se ha dedicado siempre a esto?

**Gustavo Burbono:** No, yo soy hotelero de profesión, pero lastimosamente en mi país la hotelería cambió demasiado. Cuando yo empecé en la hotelería era un lujo trabajar en hoteles. Ahora es un martirio. Un ejemplo: a un recepcionista lo contratan como recepcionista, pero no termina siendo recepcionista. Termina siendo contable, auxiliar de gerencia, auxiliar de cartera... Una infinidad de cargos asociados al puesto por el que lo nombraron, pero por el mismo salario.

**P:** ¿Cuál es el salario mínimo en Colombia?

**G.B.:** Está en unos 786.000 pesos.

**P:** Eso son poco más de 200 euros.

**G.B.:** Claro. Yo, por ejemplo, con esposa y cuatro hijos, con un salario mínimo me muero. No me alcanzaría ni para comer.

**P:** ¿Trabaja también su mujer?

**G.B.:** Claro. El trabajo de ella y el mío nos da para estar en una clase media. Ni muy arriba ni muy abajo. Clase media, media. Pero no queda un céntimo para ahorrar. Vivimos al día, como se dice.

**P:** Ustedes tienen suerte, porque Colombia es un país profundamente desigual...

**G.B.:** Total. Aquí el que es rico es *recontrarrico* y el que es pobre es *recontrapobre*.

**P:** Es un país muy enfrentado. Hay dos Colombias, ¿verdad?

**G.B.:** Exactamente. Totalmente dividido.

(Gustavo me explica que la zona por la que pasamos es una zona muy industrializada. Me dice que estamos cerca de Villarrica, sede de la planta central de la multinacional automovilística india Mahindra, planta que surte a toda Latinoamérica. Me dice que escogieron este punto porque es un punto muy comercial. A mí, cuando nombra Villarrica, me vienen a la mente las FARC: allí fue uno de sus primeros establecimientos antes de constituirse como organización)

**P:** Y en Cali, en general, ¿cómo se viven los acuerdos de paz? ¿La gente está conforme? ¿Qué sentimiento predomina?

**G.B.:** Lo que predomina es el sentimiento de que llegue la paz. Los ideales de la guerrilla se acabaron hace años. Dejó de ser una guerrilla que luchaba por el pueblo y se transformó en una narcoguerrilla que pelea por sus propios intereses. Todos queremos que eso se acabe.

**P:** En lo referente a la cuestión agraria, a la desigualdad... ¿No siguen las FARC defendiendo esos valores?

**G.B.:** Ya nadie le cree a la guerrilla. La guerrilla acabó con el campo. ¿Por qué? Por el desplazamiento forzado. Millones de personas han llegado a las grandes ciudades. Por la guerrilla y también por el Ejército. Aquí hay una vaina que se llama repatriación, que es entregar los territorios que han sido tomados por la guerrilla, que son miles de hectáreas.

Se los quitaron a los campesinos, gente que producía. Ahora el Gobierno se apoderó de todo eso y lo parceló. ¿Cómo va a reintegrarlo?

**P:** De esos desplazamientos, gran parte de los causantes son los paramilitares...

**G.B.:** Claro que sí. Mire, el ELN, los paramilitares, las FARC y las BACRIM. Todos son culpables. Los espacios que dejó la guerrilla los han tomado estos grupos.

**P:** ¿Qué grupos son esos? ¿Águilas Negras?

**G.B.:** Águilas Negras, los urabeños, los del Golfo... Y son fuertes.

**P:** Y aquí en Cali la cosa está ahora más calmada, pero aquí fue el famoso secuestro de los diputados.

**G.B.:** Sí, aquí también fue el secuestro de la María. Y el secuestro de los diputados. Eso fue terrible, al lado de la Gobernación de la ciudad. Los sacó de ahí un comando guerrillero y nadie se percató hasta que ya los habían llevado a la montaña. Yo he recogido varias veces en el aeropuerto a Sigfredo, al diputado que sobrevivió, aunque nunca he hablado con él del secuestro, porque es un tema complicado.

(Gustavo me explica que la zona por la que pasamos en este momento está repleta de cultivos de marihuana. Yo le digo lo que me contó Andrés, un taxista de Cali, que los cultivos se ven iluminados por la noche. Gustavo me cuenta que esta es una de las regiones del mundo que produce caña de azúcar durante todo el año. “Aquí no hay estaciones”, dice, “aquí solo tenemos una y bien buena”)

**P:** Aunque las FARC hayan dejado las armas, estos negocios seguirán siendo llevados por alguien, ¿cuál es la salida a esto? ¿Usted cree que debería legalizarse la producción?

**G.B.:** Sí, yo estoy de acuerdo en que se legalice. Ahí se acabaría todo. Por ejemplo, ¿Estados Unidos qué pelea? No pelea que su gente no sea drogadicta, sólo le interesan sus dólares. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Le hace lavado de activos, Es un negocio de la madre.

Para mí, ¿sabe qué dejan las FARC? Dejan una cultura. De violencia. Hay un lugar en Cali que se llama el Distrito de Aguablanca. Esa es una guarida de sicarios. Los grandes sicarios, los grandes secuestradores, allá se formaban. ¿Quién les daba ese armamento? La guerrilla. ¿Por qué? Para formarlos.

**P:** Pero antes de las FARC, ya había violencia en Colombia. Recuerde la época de *La Violencia* en los años 40.

**G.B.:** Ahí nacieron.

**P:** Nacieron un poco más tarde. En 1964.

**G.B.:** Exacto. Yo nací en el 63. Yo he vivido toda mi vida en el conflicto. Por eso cuando hubo el plebiscito, yo estaba emocionado. Yo dije: mi pueblo va a votar sí. Qué alegría, me dije, 50 años de guerra se van a acabar. Y nos decían: “va ganando el *sí*”. Y de repente: “ha ganado el *no*”. Ay, eso fue una hecatombe.

**P:** Claro, porque aquí mucha gente que votó por el *sí*, votó por la paz, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con la guerrilla.

**G.B.:** Exacto. Muchos queríamos el *sí* a la paz y el *no* a la guerrilla. Pero al final el Gobierno se montó un jeroglífico con los acuerdos.

**P:** ¿Qué fallos tienen los acuerdos? ¿La Justicia Transicional?

**G.B.:** Yo diría que lo que falla es ponerse de acuerdo (se ríe a carcajadas). Y también la Justicia Transicional. Y cerrar bien los puntos. Está la vaina de que el español que usamos en Colombia juega siempre con doble sentido.

**P:** ¿Se hace eso a propósito?

**G.B.:** Total. Es muy triste. Aquí hay un dicho muy claro que dice “la ley se hizo para el de ruana”. El de ruana es el pobre, el campesino, el que no tiene nada. A ese sí le cae la ley, ¿entiende? Pero para el que tiene dinero no existe. Para el que está en el Senado y roba 1.000 millones de pesos no existe la ley. Para ese hay un montón de oportunidades.

**P:** ¿Cómo ve al uribismo?

**G.B.:** Está de capa caída. Mire lo que hizo el uribismo: hizo una alianza con ese tal expresidente que se llama Pastrana. ¿Sabe qué hizo Pastrana? ¿Se acuerda del Caguán? Ese tipo no hizo nada.

**P:** ¿Por qué fue tan desastroso el Caguán?

**G.B.:** Yo era muy chico y de pronto no me interesaba, pero sí sé que la guerrilla fue muy astuta. Estaba muy diezmada y Pastrana les dio el famoso Caguán. Ahí fue que se reorganizó la guerrilla y cogió una fuerza tan impresionante que pudo seguir en la lucha.

**P:** Hábleme de las AUC. ¿Qué piensan los colombianos de ellas?

**G.B.:** Las AUC atacaban a la guerrilla, pero llega un momento en el que cometen errores. Llegan y los permean. ¿Quién los permea? El narcotráfico. El narcotráfico todo, todo, lo ha manejado aquí. A la guerrilla, a las autodefensas y al Gobierno. Y a fuerzas militares. Cómo sería tanto el poder del narco que el cartel del Valle del Cauca tenía una nómina paralela de la Policía Nacional.

**P:** El cartel de Valle del Cauca, ¿es el mismo que el cartel de Cali?

**G.B.:** El mismo. El cartel de Rodríguez Orejuela. Era el que peleaba con el cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Los policías, los altos mandos, cobraban el sueldo del Gobierno del Estado y también el del cartel del Valle. Llegaba el cartel y decía: “señor general, tal día va a pasar un convoy con 3.000 kilos de cocaína, téngame la vía despejada”. Y la autoridad montaba el operativo.

**P:** ¿Eso sigue pasando?

**G.B.:** Eso sigue sucediendo, claro. ¿Ha oído hablar de los falsos positivos? El narco manda unos kilitos por un lado, para que eso caiga, pero por otro cuela toneladas. Es como las mulas que cogen en los aeropuertos, ¿cierto? Hasta que no lo legalicen esto no se va a acabar.

**P:** ¿Los colombianos estarían de acuerdo con la legalización?

**G.B.:** Usted sabe que este es un país católico, apostólico y romano, ¿verdad? Eso hace que la gente no se posicione. Pero yo creo que la mayoría sí estaría de acuerdo. Al haber legalización habría más control, ¿no cree? ¿Usted cree que Estados Unidos estaría de acuerdo en que se legalice la cocaína? Claro que no, porque Colombia pasaría a ser una potencia (se ríe a carcajadas). Sale para Estados Unidos un buque cargado de cocaína. ¿Cuánto vale? ¡Dios mío! No lo pueden pagar. Esta es la lucha, ¿cierto? Eso es la doble moral. Este pueblo está manejado por la doble moral.

**P:** ¿Sigue existiendo la cultura juvenil de sentirse atraídos por el mundo del narco? ¿Siguen aspirando los adolescentes a convertirse en sicarios?

**G.B.:** Eso ha disminuido.

**P:** ¿Por qué?

**G.B.:** Por la extradición. Los grandes capos se entregaron debido a la extradición. Pablo Escobar decía: “Prefiero la muerte a la prisión en Estados Unidos”. Y construyó su propia cárcel.

**P:** *La Catedral*. Y luego encima se escapó de allí.

**G.B.:** Varias veces se escapó de ahí... Con un colchón, con túneles... Allí había bacanales, fiestas... Aquello era un fraude.

**P:** Se ha convertido en un mito. La gente lleva camisetas de Pablo Escobar.

**G.B.:** Eso me da mucha rabia. Eso es de mafioso barato. Un tipo que mató tanta gente. Un tipo que derribó un avión con 180 pasajeros por ir a cazar a uno...

(Nos estamos aproximado al desvío que nos conducirá a Caldono, a la vereda donde se encuentra el campamento de Naciones Unidas. Le digo a Gustavo que debemos ir atentos y a partir de este momento la conversación se centra en alcanzar el destino)

## **Entrevista 7: Lorena y Nórida**

**Cargo/interés:** Lorena y Nórida son hermanas, nacidas en Siberia (Cauca), y regentan una tienda de empanadas, arepas y refrescos, propiedad de su padre.

**Lugar de la entrevista:** Terraza de la tienda, en la localidad de Siberia (Cauca).

**Fecha:** Sábado 15 de julio de 2017.

Descripción: La entrevista no está concertada previamente. Se realiza horas después de bajar de la ZVTN Carlos Perdomo, tras mantener el encuentro con Antonio Ospina en uno de los campamentos. El municipio de Siberia se encuentra a unos 3 kilómetros de Pueblo Nuevo, zona de asentamiento de las FARC. Existe interés previo de recopilar testimonios allí, porque Siberia fue una de las localidades más azotadas por la acción de la guerrilla durante los años 90. Allí FARC y Ejército Nacional mantuvieron uno de los combates más cruentos que se recuerdan en la zona en la que actuaba el frente *Jacobo Arenas*, comandado por Ospina. Como consecuencia de aquel enfrentamiento, en 1998,

la iglesia de la localidad fue destruida y murieron varios soldados y guerrilleros. Cuando entramos en el pueblo, pregunto a varios lugareños por la posibilidad de encontrar a alguien que pudiera hablarme sobre aquellos hechos, hasta que la propietaria de un bar me señala el negocio de Lorena y Nórída y me dice que es posible que ellas quieran hablar conmigo, dado que fueron unas de las vecinas que vivieron los acontecimientos de primera mano. Lorena y Nórída acceden a hablar conmigo, mientras comemos arepas en la terraza de su negocio. En la conversación también se encuentra presente Gustavo, mi conductor durante todo el viaje. La entrevista se registra con grabadora.

**Pregunta:** La iglesia de Santa Bárbara fue derribada, ¿cuándo sucedió esto?

**Lorena:** En el año 98. Era una de las más antiguas iglesias a nivel nacional. En el año 98 hubo un ataque guerrillero muy fuerte que duró media tarde y toda una noche. Y al día siguiente uno se levantaba y veía los guerrilleros muertos. Uno no podía pasar por los escombros de la iglesia, había tanques grandísimos del Ejército. Estaba todo caótico.

**P:** ¿Hubo muchos muertos?

**L:** Hubo muchos muertos, tanto guerrilleros como del Ejército. Civiles no hubo.

**Nórída:** Pues mira que ese día en la mañana había guerrilla y nos hicieron salir, ¿te acuerdas? Nos hicieron salir para reunirnos. Cogimos y cerramos todo, pero no sabíamos dónde ir.

**P:** ¿Qué edad teníais vosotras?

**L:** Éramos niñas. Yo tenía 8 años.

**N:** Yo tendría 13.

**P:** ¿Sois dueñas de esto?

**L:** Sí, es de mi papá. Fue a partir de esos días en que mucha gente salió del pueblo, ¿no? Pues nosotras fuimos unas de esas personas que salimos, fuimos a Santander de Quilichao, pero a mi papá no le fue fácil encontrar trabajo allá y decidió venirse para acá, porque él ha tenido aquí su negocio toda la vida y a él aquí sí lo solicitaban. Pero mi mamá tenía miedo de que nosotras siguiésemos en esa violencia y decidimos quedarnos allá. Actualmente ellos están acá, pero yo ya no vivo en este recinto.

**N:** Cuando regresamos la puerta estaba abierta y estaba todo destruido y lleno de cristales.

**P:** ¿A qué se debía el destrozo? ¿Había señal de tiroteo?

**N:** No, de la explosión. Utilizaban pipas.

**P:** ¿Qué son las pipas?

(Gustavo interviene en la conversación. “Son pipas de gas”, explica. “Se usan en las cocinas y en las estufas. Los guerrilleros las usaban para lanzarlas pero también para que exploten: van cargadas de metralla y explosivos, o sea que al explotar eso alcanza una magnitud amplia)

**N:** El ruido de eso es lo más. ¡Cómo vibraba! (Mira a su hermana) ¿Te acuerdas? Pensábamos que nos íbamos a morir.

**P:** Y a partir de ahí os llevaron a vivir a Santander de Quilichao.

**L:** Sí, mucha gente se fue.

**P:** Y ya no han vuelto muchos...

**L:** Sí, muchos se fueron para Popayán, para Cali, que es lo más cercano de aquí, y ya no volvieron.

**N:** Me acuerdo una vez que estábamos nosotras aquí y llegó un camión y creíamos que era el ejército, pero no, mentira, era una *mona*, espectacular, divina, una guerrillera portando un fusil, y empezaron a dispararse y a esconderse detrás de los bancos del parque. Y todo el mundo empezó a cerrar puertas y a meterse para casa. Todo el mundo creyó que era el ejército, pero no: eran unas *peladas* muy lindas.

**P:** Ese es el ataque más duro que recuerdas, pero, habréis vivido muchos más ataques...

**L:** Sí, ese fue el más fuerte. No murieron civiles, pero vimos policías y guerrilleros por aquí tirados. El puesto de policía quedó tan afectado, que la policía se la llevaron.

**N:** A partir del 98 el pueblo se quedó sin policía y quedó bajo el mandato de la guerrilla. Yo me acuerdo que nos reunían y el que no iba... Tenía que ir un representante por casa. El pueblo estuvo años sin policía y ellos nos reunían para decirnos que nos opusiésemos a que volviese la policía.

**P:** ¿Cobraba la guerrilla algún impuesto?

**N:** No, nunca se atrevieron. Sólo nos reunían para advertir a la comunidad de que no dejáramos que la policía estuviese aquí en el pueblo.

**P:** ¿Cuánto tiempo estuvieron mandando en el pueblo?

**N:** Yo creo que así como 5 años.

**L:** Pero cuando el pueblo estuvo así, era como más tranquilo, porque ellos no se metían con la gente, porque la bronca de ellos siempre fue con la Fuerza Pública.

**P:** Si había riñas entre habitantes del pueblo, o delitos, ¿qué hacían ellos?

**L:** Hubo un tiempo en que fue el cabildo indígena el que mandaba en los casos de delincuencia. Aplicaban la ley indígena: el castigo a los delincuentes era ponerlos patas arriba y enjuiciarlos, darles latigazos y pegarlos.

(Gustavo interviene de nuevo. “El famoso cepo”, me dice)

**P:** ¿A quién le hacen eso?

**L:** A los ladrones o a la gente que viola la propia ley de ellos.

**P:** Y ahora esto está más calmado, ¿o no?

**L:** Sí, claro.

**P:** ¿Desde cuándo? ¿Desde que empezaron los acuerdos?

**L:** No, desde antes. Desde Uribe.

**P:** ¿Tiene Uribe mucha acogida aquí?

**L:** Yo creo que sí, porque Uribe golpeó mucho a la guerrilla. La tenía diezmada, acorralada, y ahora llega Santos y (se ríe irónicamente)... Ay, yo no sé, yo digo que esto es una farsa. Con Uribe los helicópteros llegaban continuamente y la guerrilla se iba y ya no pasaba nada.

**P:** ¿No gustan los acuerdos de paz en esta zona?

**L:** Pues eso está en una discordia. Hay gente que sí y hay gente que no. Pero yo creo que la gran mayoría no. Santos no tiene bien cogido al enemigo. Era mejor como lo tenía Uribe.

## **IV. CONCLUSIONES**

El proceso de dejación de armas de las FARC se ha desarrollado, en líneas generales, en un contexto de colaboración en el que todas las partes involucradas han demostrado deseos reales de acabar con el conflicto. Por primera vez desde que comenzó la guerra hace ya más de 53 años, Gobierno y FARC han justificado con su comportamiento la existencia de voluntad de paz. A pesar del extenso programa del Acuerdo Final, uno de los más complejos de los que hasta ahora se han redactado en términos de desarme, el procedimiento ha conseguido cumplir con los estándares de transparencia planteados de antemano, independientemente de las complicaciones e impedimentos que de manera inevitable fueron surgiendo durante el camino. No era tarea fácil: a la propia complejidad del texto se sumaba la incertidumbre de entrar en un territorio desconocido que no pocos sectores de la sociedad colombiana calificaron desde un principio como “farsa”.

Y es que las experiencias anteriores de negociación entre Gobierno y FARC favorecían ese clima de negación y escepticismo que se ha percibido durante los últimos meses en las calles de Colombia. La sociedad colombiana no olvida los fracasos del proceso de paz en La Uribe (1982-1985), con Belisario Betancur como presidente; del intento de negociación en Tlaxcala, México (1992), bajo el mandato de César Gaviria; y el famoso desastre del Caguán (1999-2002), el intento de paz iniciado por Andrés Pastrana.

En todos esos procesos se señaló a la metodología empleada como principal causante del fracaso de las negociaciones. Es cierto que todos ellos adolecieron de la falta de un proyecto definido y de una agenda que en ocasiones ni siquiera contaba con las garantías de unas reglas claras o de unos observadores neutrales que mediaran en las conversaciones (el mejor ejemplo es el del Caguán, proceso en el que se priorizó la transparencia frente a los medios de comunicación en detrimento del propio objetivo de las negociaciones, un objetivo que a la postre se revelaría inexistente). Sin embargo, en todos ellos falló también una premisa indispensable a la hora de afrontar un proceso de paz: la necesaria confianza entre las partes. Tanto con Betancur, como con Gaviria y Pastrana, ambas partes (Gobierno Nacional y FARC) continuaron fortaleciendo sus posiciones al mismo tiempo que mantenían conversaciones, llegando al punto de perpetrar monumentales acciones militares en plena negociación (caso paradigmático es

el del secuestro del senador Jorge Eduardo Géchem Turbay por parte de las FARC mientras este viajaba en un vuelo comercial, acción que acabó con las negociaciones del Caguán).

Las negociaciones actuales han contado con un texto mucho más ambicioso, sí, pero el acuerdo no sería posible si la perspectiva de las dos partes negociadoras no hubiese experimentado un cambio radical. El objetivo último no ha sido acabar con el otro, sino alcanzar la paz, dejando la meta de anular al contrario en el contexto de la acción política. Para ello han resultado necesarias concesiones significativas por parte de los dos bandos y, sobre todo, la inclusión en la implementación de los acuerdos de un organismo de verificación que regulara los innumerables puntos de fricción surgidos durante el proceso.

Así, no han sido pocos los reproches que ambas partes se han dedicado en los últimos días de la aplicación del punto 3 del Acuerdo Final. La dejación de armas no ha estado exenta de complicaciones y en este TFM se han señalado los principales errores y quejas protagonizados por cada una de las delegaciones. Ha habido de todo: desde acusaciones por ambas partes en lo referente a la demora en el cumplimiento de los plazos (con el retraso en la construcción de los campamentos y en la extracción de caletas como principales exponentes) hasta reclamaciones por parte de FARC relativas a la seguridad de sus miembros.

Es significativo que sea ese apartado, el de la seguridad, el que más problemas haya presentado. Y lo es porque las violaciones en ese capítulo han estado prácticamente monopolizadas por actores no partícipes en el acuerdo de paz: los grupos armados posdesmovilización. Ahora que Gobierno y FARC han decidido trasladar su lucha al entorno político, Colombia debe afrontar un nuevo desafío: la prolongación del conflicto a través de agentes diferentes.

En cualquier caso, el balance final del proceso de dejación de armas podría calificarse como satisfactorio. Es en lo que viene después donde Gobierno y FARC están encontrando mayor espacio para la disputa. El 30 de noviembre de 2017 finaliza el procedimiento que compromete al Gobierno a mantener a los exguerrilleros en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y ese día acaban también los contratos de arrendamiento de esos terrenos. Queda por ver qué va a pasar con los miembros de FARC una vez llegue esa fecha.

Y es que la viabilidad de proyectos como ECOMUN depende exclusivamente de esa circunstancia. Las FARC acusan al Gobierno Nacional de haber priorizado la dejación de armas (resulta obvio que, para la Fuerza Pública, que todos los miembros de FARC dejaran su fusil era el objetivo principal) en detrimento de los puntos del acuerdo relacionados con la integración, en especial el de la reforma rural integral. A esto hay que sumar los propios problemas estructurales de ECOMUN, dificultades que se han señalado en este trabajo, y que han impedido que el proyecto de cooperativas haya podido implementarse según lo planeado.

En todas estas cuestiones jugará un papel clave la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aún se encuentra en el proceso de elección de los magistrados que conformarán el Tribunal de Paz y que probablemente tarde todavía varios meses en empezar a funcionar.

En cuanto a los aspectos relacionados con la cobertura del reportaje, los objetivos ideados por el alumno antes de abordar la empresa se cumplieron. La planificación para contactar y fijar entrevistas con los principales actores involucrados en el proceso de paz permitía mantener altas las expectativas de llevar a cabo el trabajo, pero existía la incertidumbre respecto a la posibilidad real de acceso a la ZVTN Carlos Perdomo en Los Monos. Finalmente pudo concretarse esa acción (no sin cierta fortuna: el riesgo de retención y negativa de entrada a la zona por parte de la Fuerza Pública siempre estuvo en la ecuación) y, por lo tanto, este TFM acabó materializándose según la metodología prevista.

Se quiere señalar aquí que en ese trabajo de planificación fueron determinantes los conocimientos adquiridos por el alumno durante el curso 2016/2017 del Máster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense. Es obvio que el trabajo bibliográfico y de documentación previo jugó un papel esencial, pero no resulta menos evidente que las dificultades se habrían multiplicado considerablemente si no se hubiesen tenido en cuenta los contenidos del programa abordado durante este curso, sobre todo los relativos a la seguridad, al trabajo de campo y a los aspectos teóricos vinculados a la institución militar (el trabajo realizado sobre el terreno se ha desarrollado en su totalidad en un entorno militar: un ámbito dotado de unas peculiares reglas de juego y de un lenguaje propio, que requiere de una importante preparación previa por parte de aquel que viene de fuera).

## NOTAS

1 . La Conferencia Boyacá, también conocida como Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, tenía como objetivo el establecimiento de un gobierno popular que decretara una reforma agraria, devolviera la integridad a las comunidades indígenas, separara la Iglesia del Estado y creara un ejército nacional. A ella asistieron delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz.

2 . La Comisión Interamericana de DDHH registra a día de hoy más de 3.000 asesinatos de miembros de Unión Patriótica y 200 desapariciones entre 1985 y 2006.

3 . Durante el gobierno de Uribe se estableció una política de incentivos económicos para los miembros del Ejército Nacional en función de las bajas que estos causaran a los diferentes grupos armados de Colombia. A finales de 2008 se descubrió que algunos militares habían estado asesinando civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros ejecutados en combate para así cobrar la recompensa del Gobierno. A este escándalo se le conoce como el de los *falsos positivos*. La *Fundación Semana* ofrece el dato de más de 3.500 víctimas inocentes y más de 2.000 militares detenidos.

4 . Durante los primeros contactos de negociación las FARC habían propuesto concentrarse en 80 zonas rurales para empezar a abordar el proceso de dejación de armas. Esa cifra no era casual: coincidía con el número de frentes que manejaba la guerrilla en ese momento. La propuesta del Gobierno Nacional era radicalmente inferior: ofrecía únicamente seis zonas de concentración (Cauca, Meta, Putumayo, Chocó, norte de Antioquia y Norte de Santander). Finalmente, en junio de 2016, se llegó al acuerdo que se registra en el texto vigente: 26 Zonas Veredales de Transición a la Normalidad.

5 . El índice de abstención del referéndum fue del 62,59 %. Se trata de la abstención más alta en una llamada a las urnas en los últimos 22 años en Colombia. Las participaciones más bajas se dieron en La Guajira (19,39 %), Atlántico (24,10 %) y Bolívar (23,36 %). Según un estudio elaborado para la Registraduría Nacional del Estado Civil por la Universidad Sergio Arboleda en 2013, Colombia es el país con las mayores tasas de abstención en toda Latinoamérica.

6 . En Colombia se denomina *zonas rojas* a las regiones con mayor incidencia de violencia perpetrada por las guerrillas o grupos armados irregulares. Según la OCHA, son nueve las regiones colombianas incluidas en esa denominación: Antioquia, Caquetá, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Meta. La Fiscalía estima que en esas zonas se encuentran más de 45.000 desaparecidos por el conflicto armado.

7 . El punto 3.1.4.2. del Acuerdo Final dice lo siguiente: “Alrededor de cada ZVTN se establece una Zona de Seguridad donde no puede haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. Cualquier procedimiento policial, distinto a la seguridad del MM&V, que sea requerido en la Zona de Seguridad se hace con la previa coordinación con el MM&V y de acuerdo con los protocolos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El ancho de la Zona de Seguridad es de 1 kilómetro alrededor de cada ZVTN.

8 . El 26 de junio de 2017 más de 1.480 presos de las FARC iniciaron una huelga de hambre, en al menos 19 cárceles de Colombia, para exigir la aprobación de la Ley de Amnistía pactada en las negociaciones de La Habana. El líder guerrillero Jesús Santirch, uno de los negociadores en la mesa de conversaciones en Cuba, también se sumó a la protesta.

9 . Cuando nace la polémica debido a los incentivos económicos que recibirán los guerrilleros de FARC por desmovilizarse, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, hace pública la cifra que el gobierno de Uribe entregaba a los guerrilleros que decidían reintegrarse a la vida civil y se comprobó que esas cuantías eran superiores a las actuales. En 2003, 2004, 2005 y 2006 a los exguerrilleros se les daba una ayuda de 636.000 pesos colombianos, aproximadamente lo mismo que recibirán ahora (620.500 COP, alrededor de 186 euros), es decir, unas cantidades superiores si se tiene en cuenta el precio del dinero de esos años.

10 . El 10 de julio de 2017 Naciones Unidas aprueba la Resolución 2366, dando lugar a la tercera resolución ONU relativa al proceso de paz y a la segunda misión de la organización en Colombia. La Segunda Misión tiene como objetivo verificar la implementación de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final, relativos a la reincorporación económica, política y social de FARC y a la implementación de garantías de seguridad.

## V. BIBLIOGRAFÍA

ACNUR (2017): *Global Report on Internal Displacement*. Informe publicado en mayo de 2017 por el IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre). [www.acnur.org](http://www.acnur.org)

CHERNICK, Mark (2012): *Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano*. Bogotá. Editorial Aurora.

CINEP (2010): *The Legacy of Uribe's Policies: Challenges for the Santos Administration*. Bogotá. [www.cinep.org.co](http://www.cinep.org.co)

CNMH (2013): *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá. [www.centrodehistoriahistorica.gov.co](http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co)

CNMH (2016): *Grupos armados posdesmovilización (2006-2015). Trayectorias, rupturas y continuidades*. Bogotá. [www.centrodehistoriahistorica.gov.co](http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co)

EL COLOMBIANO (2017): *Disidencias de las FARC ya están en 8 departamentos*. Artículo publicado el 12 de septiembre de 2017. <http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/disidencias-de-las-farc-ya-estan-en-8-departamentos-LI7280692>

EL ESPECTADOR (2017): *El estigma: el obstáculo de la reintegración*. Artículo publicado el 29 de junio de 2017. <http://colombia2020.elespectador.com/pais/el-estigma-el-obstaculo-de-la-reintegracion>

EL ESPECTADOR (2017): *Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos: 7,4 millones*. Artículo publicado el 18 de junio de 2017. <http://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/colombia-sigue-siendo-el-pais-con-mas-desplazados-internos-74-millones-articulo-698945>

EL ESPECTADOR (2017): *Guerrilleros de las FARC presos, en huelga de hambre para que se cumplan acuerdos*. Artículo publicado el 27 de junio de 2017. <http://www.elespectador.com/noticias/politica/prisioneros-integrantes-de-las-farc-en-huelga-de-hambre-por-incumplimiento-del-gobierno-articulo-700233>

FIP (2015): Informe *Desarme de las FARC. Claves y propuestas para un proceso viable, exitoso y transparente*. Bogotá. [www.ideaspaz.org](http://www.ideaspaz.org)

FIP (2016): Informe *Economías criminales en clave de postconflicto. Tendencias actuales y propuestas para hacerles frente*. Bogotá. [www.ideaspaz.org](http://www.ideaspaz.org)

FIP (2017): Informe *Siete regiones sin las FARC, ¿siete problemas más?* Bogotá. [www.ideaspaz.org](http://www.ideaspaz.org)

FIP (2017): Informe *¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? Principales avances, desafíos y propuestas para hacerles frente*. Bogotá. [www.ideaspaz.org](http://www.ideaspaz.org)

FISAS, Vicenc (2017): *Negociar la paz con las FARC. Una experiencia innovadora*. Barcelona. Editorial Icaria.

GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés (2017): *Relación entre conflicto y posconflicto: Colombia y los Acuerdos de paz*. Documento publicado en el IIEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos) el 17 de mayo de 2017. [www.ieee.es / Publicaciones / Documentos de análisis](http://www.ieee.es/Publicaciones/Documentos/de_analisis).

LÓPEZ, Alejandro José (2012): *Nadie es eterno*. Cali. Editorial Sílabas.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE COLOMBIA (2003): *Política de Defensa y Seguridad Democrática*. [www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf](http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf)

MOLANO, Alfredo (2017): *A lomo de mula. Viajes al corazón de las FARC*. Bogotá. Editorial Aguilar.

MARTÍN MEDEM, José Manuel (2016): *Colombia feroz. Del terrorismo de Estado a la negociación con las FARC*. Madrid. Editorial Catarata.

NACIONES UNIDAS (Centro de Noticias) (2017): *Colombia: Misión de la ONU termina el registro de armas de las FARC*. Artículo publicado el 11 de abril de 2017. <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37110#.WcqCNZVrzIU>

EL PAÍS (2016): *Colombia: el camino a la paz*. Especial de Javier Lafuente, Sally Palomino y Ana Marcos publicado en octubre de 2016. [//elpais.com/especiales/2016/proceso-de-paz-en-colombia/](http://elpais.com/especiales/2016/proceso-de-paz-en-colombia/)

PNUD (2003): *El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia*. Bogotá. [www.pnud.org.co](http://www.pnud.org.co)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2016): *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

PROGRAMA SOMOS DEFENSORES (PNGPDDH) (2017): *Informe Agúzate, ¡que nos están matando!* Bogotá. [www.somosdefensores.org](http://www.somosdefensores.org)

RAMÍREZ DÍAZ, Steven Alejandro (2017): *Priorización de la seguridad en Colombia periodo 2002-2010: Política de Seguridad y Defensa Democrática*. Universidad Santo Tomás. Bogotá.

REVISTA SEMANA (2017): *Las armas que quedaron bajo llave para siempre*. Artículo publicado el 13 de junio de 2017. <http://www.semana.com/nacion/articulo/acto-de-dejacion-de-armas-por-parte-de-guerrilleros-de-las-farc-en-el-cauca/528546>

REVISTA SEMANA (2017): *Los que no le jalaron al proceso*. Artículo publicado el 16 de septiembre de 2017. [www.semana.com/Item/ArticleAsync/540737](http://www.semana.com/Item/ArticleAsync/540737)

RÍOS SIERRA, Jerónimo (2017): *Breve historia del conflicto armado en Colombia*. Madrid. Editorial Catarata.

RONDEROS, María Teresa (2014): *Guerras recicladas*. Bogotá. Editorial Aguilar.

SÁNCHEZ COBALEDA, Ana (2011): *La implicación de los EE.UU. en el Plan Colombia*. Memoria para el Máster en Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

EL TIEMPO (2017): *FARC dejan las armas y desaparecen oficialmente como grupo armado*. Artículo publicado el 27 de junio de 2017. [www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-oficialmente-termina-la-dejacion-total-de-armas-103088](http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-oficialmente-termina-la-dejacion-total-de-armas-103088)

VERDAD ABIERTA (2017): *Seis meses de avances y atrasos en los acuerdos con las FARC*. Artículo publicado el 1 de junio de 2017. <http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6659-seis-meses-de-avances-y-atrasos-en-los-acuerdos-con-las-farc>

VERDAD ABIERTA Y CNMH (2017): *El Davis. El nacimiento de las FARC*. Especial publicado en abril de 2017 en el portal Rutas del Conflicto. [rutasdelconflicto.com/especiales/nacimiento\\_farc\\_davis](http://rutasdelconflicto.com/especiales/nacimiento_farc_davis)

## **Páginas Web**

Presidencia de la República de Colombia [www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)

Ministerio del Interior de Colombia [www.mij.gov.co](http://www.mij.gov.co)

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia [www.pnud.org.co](http://www.pnud.org.co)

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) [www.acnur.org](http://www.acnur.org)

Misión de Naciones Unidas en Colombia [www.colombia.unmissions.org](http://www.colombia.unmissions.org)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/Programa para la paz)  
[www.cinep.org.co](http://www.cinep.org.co)

Centro Nacional de Memoria Histórica [www.centrodememoriahistorica.gov.co](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co)

Fundación Ideas para la Paz (FIP) [www.ideaspaz.org](http://www.ideaspaz.org)

Instituto Español de Estudios Estratégicos [www.ieee.es](http://www.ieee.es)